



V Curso para Diplomatas Sul-Americanos

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES



Ministro de Estado Embaixador Celso Amorim
Secretário-Geral Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO



Presidente Embaixador Jeronimo Moscardo

INSTITUTO RIO BRANCO (IRBr)

Diretor-Geral Embaixador Fernando Guimarães Reis

A *Fundação Alexandre de Gusmão*, instituída em 1971, é uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e tem a finalidade de levar à sociedade civil informações sobre a realidade internacional e sobre aspectos da pauta diplomática brasileira. Sua missão é promover a sensibilização da opinião pública nacional para os temas de relações internacionais e para a política externa brasileira.

Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H
Anexo II, Térreo, Sala 1
70170-900 Brasília, DF
Telefones: (61) 3411 6033/6034/6847
Fax: (61) 3411 9125
Site: www.funag.gov.br



V Curso para Diplomatas Sul-Americanos



Rio de Janeiro, 7 a 30 de outubro de 2008

Textos Acadêmicos



Brasília, 2008





Copyright ©, Fundação Alexandre de Gusmão

Equipe técnica:

Maria Marta Cezar Lopes

Eliane Miranda Paiva

Cíntia Rejane Sousa Araújo Gonçalves

Projeto gráfico e diagramação:

Juliana Orem e Maria Loureiro

Direitos de publicação reservados à

Fundação Alexandre de Gusmão

Ministério das Relações Exteriores

Esplanada dos Ministérios, Bloco H

Anexo II, Térreo

70170-900 Brasília – DF

Telefones: (61) 3411 6033/6034/6847/6028

Fax: (61) 3411 9125

Site: www.funag.gov.br

E-mail: funag@mre.gov.br

Impresso no Brasil 2008

Depósito Legal na Fundação Biblioteca Nacional conforme Lei nº 10.994, de 14.12.2004.

SUMARIO

LA ECONOMÍA ARGENTINA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS	7
Aldo Ferrer	
BOLIVIA: "LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURAL" DEL PRESIDENTE EVO MORALES Y EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) 2006-2008	35
Esteban Ticona Alejo	
LA CONCEPCIÓN DE UN NUEVO PAÍS - EL CASO BOLIVIANO	73
Antonio Peredo Leigue	
LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO POLÍTICO DE CHILE	97
Carlos Huneeus	
AVANCES Y RETOS EN LA COLOMBIA DE HOY	115
Alfredo Rangel	
GUYANA: LAND OF MANY WATERS	133
Mary Noel Menezes	
ECUADOR, UN PAÍS EN BUSCA DE LA SENDA PERDIDA... DE LA CRISIS A LA CONSTITUYENTE	149
Alberto Acosta	
PARAGUAY: DICTADURA, TRANSICIÓN Y COMUNIDAD INTERNACIONAL	173
Milda Rivarola	
LA ENCRUCIJADA PERUANA - 2008-2011	197
Mirko Lauer	



SURINAME 213
Kriesnadath Nandoe

POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA EN EL SIGLO XXI -
UN NUEVO PANORAMA DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 233
Miguel Ángel Pérez Pirela



LA ECONOMIA ARGENTINA: SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS







LA ECONOMÍA ARGENTINA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

ALDO FERRER

Desde mediados del 2002 hasta la actualidad, la economía registra un crecimiento anual del orden del 8%. Este año 2008, el PBI es cerca de 60% mayor que hace seis años, en un contexto de gobernabilidad de la macroeconomía, mejora de los indicadores sociales y aumento de la tasa de inversión.

Este comportamiento contrasta con la trayectoria de largo plazo y, particularmente, con el periodo que se abre en 1998 y culmina con la crisis del 2001 y principios del 2002. En este último, se produjo una caída acumulada del PBI del 20%, la tasa de desempleo alcanzó al 25% y la proporción de población debajo de la línea de pobreza superó el 50%. Finalmente, colapsaron el régimen de convertibilidad y la paridad unitaria del peso con el dólar, los depósitos bancarios fueron inmovilizados para frenar la fuga de capitales, el Gobierno declaró el *default* sobre la deuda externa pública y la privada fue objeto de renegociación. El desorden quedó reflejado en la imposibilidad de cumplimiento de los contratos entre particulares denominados en dólares y en otros dos hechos extraordinarios. Por un lado, la circulación de dieciseis monedas, emitidas por las provincias, ante el derrumbe del sistema monetario y de las finanzas públicas. Por otro, la reaparición del trueque y formas precapitalistas de intercambio.

La crisis fue el epílogo de una estrategia económica fundada en un paradigma que demostró ser incompatible con el crecimiento de la economía argentina y el bienestar social e, incluso, con los equilibrios elementales para el funcionamiento de un sistema



ALDO FERRER

económico. Tal estrategia provocó un deterioro sin precedentes en el tejido social y productivo del país y concluyó desorganizando los tres ejes fundamentales que mantienen el orden de una economía moderna, a saber: el presupuesto, los pagos internacionales y la moneda.

En ese escenario de crisis económica y convulsión social, la Argentina enfrentaba, simultáneamente, una severa crisis política. La renuncia, en el transcurso del 2001, del vice Presidente y, luego, del Presidente de la Nación y la disputa al interior de la fuerza mayoritaria, configuraban un cuadro de inestabilidad e impotencia de las instituciones. A mediados del 2002, los pronósticos sobre el futuro de la Argentina eran los peores imaginables. A saber, hiperinflación, caos social, dolarización del sistema monetario y necesidad irremediable de un salvataje internacional.

Seis años después, la realidad es totalmente distinta a la imaginada entonces. La democracia argentina resistió la crisis. En el 2003, el país en paz eligió el Presidente. Comicios posteriores renovaron el Congreso y autoridades provinciales y municipales y, en el 2008, la Presidencia de la Nación. La economía registra un crecimiento sin precedentes. El funcionamiento del sistema bancario fue restablecido y la deuda externa pública externa normalizada a través de una exitosa operación de canje y, la privada, por medio de arreglos entre las partes involucradas. La crisis financiera quedó encapsulada en sus propios límites y no impidió el crecimiento de la economía real y de la tasa de inversión, la cual, aumentó del 12% a principios del 2002 al 24% en la actualidad, financiada con ahorro interno. La recuperación se registró con recursos propios sin pedirle nada a nadie y cancelando deuda. Los fundamentos macroeconómicos, en un contexto internacional favorable, son actualmente suficientemente sólidos como para desplegar el amplio potencial de desarrollo de la Argentina.

Subsisten problemas graves, sobre todo, en el área social. La desocupación se ha reducido pero alcanza todavía a cerca del 10%, la pobreza aflige a 1/3 de la población, el trabajo informal sin cobertura social representa el 40% de la fuerza de trabajo y subsiste una exagerada concentración del ingreso. La política económica enfrenta otros desafíos como, por ejemplo, compatibilizar una tasa elevada de crecimiento con una estabilidad razonable de precios.

1. EL ORIGEN DE LA RECUPERACIÓN

La notable recuperación de la economía argentina refleja la convergencia de dos factores. Por un lado, las nuevas circunstancias abiertas por la misma crisis. Por el otro, el cambio de rumbo de la conducción política y económica. Ambos permitieron recuperar la gobernabilidad de la economía y reiniciar el crecimiento.

Hacia principios del 2002, la profundidad de la recesión había aumentado la brecha entre el producto real y el potencial al 30%. Existían entonces recursos ociosos que permitían recuperar la producción y el empleo en cuanto se expandiera la demanda y estableciera la gobernabilidad de la economía. La crisis provocó una fuerte caída de las importaciones, lo cual, sumado al *default* sobre la mayor parte de la deuda externa en un contexto de considerable crecimiento de las exportaciones, generó un sustantivo superavit en el balance comercial y la cuenta corriente. La progresiva normalización del funcionamiento de los mercados reales y financieros permitió recuperar la recaudación de impuestos, financiar el gasto público y generar un creciente superavit primario. El consolidado del Estado nacional y las provincias alcanzó, en 2004, al 6% del PBI. El mismo se redujo posteriormente, pero sigue por encima del 3%. A su vez, el abandono de la convertibilidad y la pesificación del sistema monetario, abrieron la posibilidad de recuperar el comando de la política monetaria



y la administración del tipo de cambio. *Last but no least*, el aumento de los precios internos inferior al ajuste cambiario, mejoró la competitividad de la producción de bienes y servicios transables internacionalmente.

La política económica abandonó el canon neoliberal y pudo responder con eficacia a los desafíos y nuevas circunstancias abiertos por la crisis del 2001/02. Fue así posible recuperar la gestión de los instrumentos de la política económica y provocar un *shock* de rentabilidad en actividades, particularmente en la industria manufacturera y entre pequeñas y medianas empresas, que habían sido castigadas por la sobrevaluación cambiaria y los otros contenidos de la política anterior. A partir de allí, comenzó la recuperación de la economía argentina.

2. LA POLÍTICA ECONÓMICA

Los rasgos principales de la política económica que permitió la salida de la crisis son los siguientes:

- Sostenimiento de un tipo de cambio consistente con la competitividad de la producción de bienes transables;
- Reparición del Estado como árbitro de los conflictos inherentes a una economía de mercado y una sociedad pluralista,
- Consolidación de los equilibrios macroeconómicos en el presupuesto, la moneda y el balance de pagos, para encuadrar el funcionamiento de la economía y la formación de las expectativas de los agentes económicos;

- Reducción progresiva del endeudamiento externo, de los sectores público y privado, para consolidar los equilibrios macroeconómicos y sanear la exposición financiera del sector privado;
- Utilización de la política de ingresos, como instrumento complementario de los equilibrios macroeconómicos, para orientar la evolución de los precios y administrar las presiones inflacionarias, sin deprimir el nivel de la actividad económica y el empleo.

Varios sino todos los contenidos en el actual paradigma de la política económica argentina, están presentes, a lo largo de la historia y en la actualidad, en los países que han logrado elevados niveles de desarrollo, la movilización de su potencial productivo, una inserción simétrica en el sistema internacional y la elevación del bienestar de sus sociedades. En ningún caso, tales países mantuvieron tipos de cambio hostiles a la competitividad de la producción ni, tampoco, niveles insostenibles de endeudamiento. En tal sentido, puede decirse que la política argentina se está desplazando hacia la normalidad.

El hecho que en la Argentina se hayan aplicado, durante tanto tiempo, *políticas anormales* obedece a que el país no logró, en su pasado, generar un consenso básico de largo plazo sobre la política económica, necesaria y posible, para desplegar su potencial productivo. En el fondo, subsiste aún el debate, fundado en razones complejas de la formación histórica del país, acerca de si una economía de mercado es un sistema sujeto a reglas globales administradas desde los centros de poder mundial o, en cambio, un sistema que conserva capacidad de decidir su propio rumbo, dentro de una red de relaciones globales de comercio, inversiones y corrientes financieras.



ALDO FERRER

Este dilema acerca de la naturaleza de la economía argentina, su ubicación en el mundo y su desarrollo, penetran el debate actual sobre la política económica. El dilema se plantea ahora en un cambiante escenario internacional, en el cual, la valorización de los recursos naturales y la elevación de los precios de los productos primarios, vuelven a generar la ilusión de una Argentina próspera como *granero del mundo*. Es la misma que, desde fines del siglo XIX, sustentó el modelo de la *economía primaria exportadora*, el mismo que habría de colapsar con la crisis mundial de los años treinta del siglo pasado.

En la actualidad, las propuestas en cuestiones tan puntuales como la tasa de interés, el tipo de cambio, la moneda, el gasto público y los impuestos, en definitiva tienen, siempre, como fundamento una de las dos visiones. Por un lado, la de un país periférico excepcionalmente dotado de recursos naturales destinados al mercado mundial. Por el otro, la de una economía industrial integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento, desde la producción primaria hasta las industrias y servicios tecnológicos de frontera. El esclarecimiento de este dilema dista de ser un ejercicio de mero alcance teórico e involucra los problemas concretos y puntuales. Los mismos que deben resolverse para que la actual recuperación de la economía argentina se transforme en un proceso acelerado, a largo plazo, de desarrollo sustentable con equidad.

3. LAS FASES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA ACTUAL

Las políticas del renovado paradigma desarrollista¹ estimularon la recuperación de la autoconfianza del país en sus propias fuerzas, en su

¹ L.C. Bresser Pereira denomina “nuevo desarrollismo” a su propuesta de estrategia económica para Brasil que tiene muchas coincidencias con el renovado paradigma desarrollista en la Argentina. Ver. *Macroeconomia da estagnacao*. Editora 34. Sao Paulo. 2007.

capacidad de administrarse y desplegar su potencial productivo. Desde el punto más profundo de la crisis (fines de 2001 y principios del 2002), hasta la actualidad, la economía atravesó por dos fases hasta culminar, ahora, con un nuevo escenario, en el cual, se replantean los problemas del crecimiento y la estabilidad.

3.1 LA PRIMERA FASE

Abarca desde mediados del 2002 hasta fines del 2003. En su transcurso, la demanda agregada aumentó por el elevado superávit de los pagos internacionales y la sustitución de importaciones de bienes transables, provocada por la modificación de precios relativos post devaluación. Los impulsos de la demanda agregada, más que compensaron el papel contractivo que cumplió el superávit primario del sector público consolidado.

Esta expansión de la demanda agregada y la competitividad recuperada de la producción de bienes transables, amplió los espacios de rentabilidad, estimuló la actividad privada en la industria y permitió reducir la capacidad productiva ociosa. En el mismo sentido contribuyó el sostenido crecimiento de la producción agropecuaria y, poco después el repunte, de la construcción. La respuesta de la oferta se reflejó en el notable incremento del PBI y la elevación del empleo.

Después del ajuste inicial de precios internos, posterior a la salida de la convertibilidad y de la estabilización posterior de la paridad nominal en torno de los 3 pesos por un dólar, el tipo de cambio real resultó un 30% más alto que el promedio de los últimos treinta años.

El comportamiento de la economía y de las empresas fue posible por la progresiva mejora de la confianza y las expectativas



fundada en la progresiva normalización del contexto económico y social. La gobernabilidad de la economía resultó así esencial para la recuperación. Las reglas vigentes bajo la convertibilidad eran insostenibles porque se fundaban en un régimen económico financiero basado en una moneda extranjera, desequilibrios macroeconómicos crecientes y normas incalificables, como aquella de fijar los precios de los servicios públicos en dólares e indexarlas por la inflación de los Estados Unidos. Después del colapso inevitable, se fueron normalizando las relaciones jurídicas y el régimen de contratos. Estos hechos contribuyeron a generar un escenario propicio para la producción, la inversión y el empleo.

El extraordinario dinamismo de la producción agropecuaria y de la cadena de valor agro industrial influyó en el proceso de recuperación de la economía argentina. Contribuyó el fuerte aumento de la producción del sector impulsado por la capacidad del empresariado rural, el cual, incorporó la revolución tecnológica derivada de las nuevas prácticas agronómicas, como la siembra directa, los paquetes tecnológicos y las semillas transgénicas. La apertura, particularmente en el espacio Asia Pacífico, de nuevos mercados y el aumento de los precios de los *commodities*, influyeron en el mismo sentido.

3.2 LA SEGUNDA FASE

Comienza a principios del 2004 y está concluyendo. En la misma, el impulso de la demanda agregada se sostuvo en el fuerte aumento del consumo (por la recuperación del empleo y los salarios) y el notable incremento de la inversión bruta interna. El superávit primario consolidado en las cuentas públicas, debilitó parcialmente el impulso expansivo del consumo y la inversión.

Continuaron prevaleciendo en esta fase los efectos positivos de la gobernabilidad de la economía y la modificación de los precios relativos a favor de la producción local de los bienes transables. Este último factor, tendió a debilitarse por la progresiva apreciación del peso y abre, a futuro, incertidumbre acerca del comportamiento del tipo de cambio real a mediano y largo plazo.

En esta fase, la oferta siguió respondiendo a los estímulos de la demanda. El PBI mantuvo tasas de aumento cercanas al 9% anual, con una sostenida y moderada recuperación del empleo y de los salarios reales. Se mantuvieron espacios atractivos de rentabilidad en todo el aparato productivo, lo cual explica el aumento de la inversión bruta interna.

La actual política de estabilidad se sostiene sobre los equilibrios macroeconómicos alcanzados y una política de ingresos instrumentada a través de los acuerdos promovidos en mercados y productos críticos, las retenciones sobre exportaciones diversas, los subsidios a servicios públicos de consumo masivo, los controles sobre los precios de los servicios públicos privatizados y orientaciones acerca de los límites aceptables de aumentos de salarios. En todos estos campos existen problemas que deben resolverse para mantener la viabilidad del crecimiento sustentable con equidad en el mediano y largo plazo.

4. EL SENDERO DEL DESARROLLO FUTURO

Cumplidas las dos primeras fases de la recuperación se agota el impulso al crecimiento impulsado por el cambio de las reglas del juego. Concluye, también, la etapa en la cual el nuevo paradigma de la política económica pudo desplegarse con el instrumental relativamente simple del ajuste fiscal, la pesificación del sistema monetario, la determinación del tipo de cambio y la recuperación de funciones esenciales del poder administrador.



Es necesario consolidar lo alcanzado y, al mismo tiempo, tomar nota que, actualmente, los dilemas fundamentales del desarrollo, del cambio tecnológico, del proceso de acumulación en toda su complejidad, confrontan al país con nuevos desafíos. Es preciso identificar los objetivos que se proponen, de aquí en adelante, para alcanzar niveles de desarrollo y bienestar acordes al talento y los recursos disponibles. Es decir, llegó el momento y la oportunidad de poner el país real a la altura del país posible.

Surgen así tres cuestiones fundamentales que deben encararse. A saber: la elevación del bienestar social, la integración del tejido productivo y la inserción afirmativa del país en la globalización. El pleno desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es una condición necesaria para la resolución de tales desafíos.. Ellas constituyen parte fundamental del tejido productivo y social del país, son la fuente principal del empleo y, por lo tanto, del bienestar y, finalmente, son un instrumento esencial para generar una relación simétrica y dinámica con la economía mundial.

Para construir un sendero de crecimiento de largo plazo, la política económica debe cumplir tareas más complejas que en las dos fases de la recuperación. Debe, ahora, refinar sus instrumentos para respaldar el crecimiento y la transformación de la economía y fortalecer la presencia del país en el escenario internacional. Sobre estas bases tiene que abrir nuevas oportunidades a la creatividad, ratificar que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro y el talento propios es nuestro mismo país y saldar, definitivamente, la deuda social.

En la actualidad, la política económica confronta la necesidad de consolidar la solvencia fiscal para que no quede duda alguna de la solidez de la capacidad del país de cumplir, con recursos



propios, los compromisos financieros. Esto requiere tomar decisiones tanto al nivel del gasto como de los ingresos, incluyendo subsidios y tarifas. La política fiscal debería apuntar a un superavit primario en el 4% y 5% del PBI. Las otras dos áreas centrales de la gestión macroeconómica son la reducción de la tasa de inflación y el sostenimiento de un tipo de cambio consistente con la competitividad y el desarrollo. Detengámonos en estas dos cuestiones.

5. LA INFLACIÓN

El aumento de precios es un problema importante en la evolución actual de la economía argentina y merece una consideración especial. Despierta a los fantasmas del pasado y es comprensible que genere preocupación en la opinión pública. Según los datos oficiales el índice de precios al consumidor está aumentando al 10% anual y, conforme a diversas estimaciones privadas, 20% o más.

La medición de la inflación siempre ha sido un problema en la Argentina. En el siglo XX, Argentina tuvo el record de la inflación más alta y prolongada con varios brotes hiperinflacionarios. Entre otras consecuencias, esto estimuló la aparición de múltiples estimaciones privadas de precios (consultoras, sociedades de consumidores, etc.) y el cuestionamiento de las estadísticas oficiales. En los últimos tiempos la situación se agravó por el conflicto político administrativo planteado en el organismo oficial INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y el descreimiento sobre la objetividad de sus estimaciones. La cuestión tiene además una fuerte motivación política y no es difícil advertir, entre los críticos del actual gobierno, que la inflación, además de un problema real, es una expresión de deseos. En cualquier caso, está claro que los precios están aumentando más de lo conveniente para la consolidación del crecimiento.



Uno de los riesgos es la aceleración de la inflación. Al respecto cabe observar que para que la evolución de los precios entre en un sendero de aumento constante y a tasas cada vez mayores, es decir, se acelere, tienen que verificarse al menos una de las tres condiciones siguientes:

- i) Desequilibrios graves en las finanzas públicas, los pagos internacionales y el sistema monetario, generalmente planteados en situaciones de elevado endeudamiento y eventual insolvencia. Cuando esto sucede, se agravan las pujas distributivas y los aumentos preventivos de precios. El sistema es entonces extremadamente vulnerable a las expectativas de los operadores internos y, también, a los *shocks* externos y a la volatilidad de las finanzas internacionales, como lo demuestra dramáticamente la experiencia argentina bajo la convertibilidad y en otras circunstancias del pasado.
- ii) Precios críticos de la economía fuertemente desaliñados respecto de su posición de equilibrio en el conjunto de la economía. El ajuste indispensable de uno o varios de esos precios, como, por ejemplo, tipo de cambio, salarios o tarifas de los servicios públicos, acelera inevitablemente el aumento del nivel general de precios.
- iii) Tensiones sociales extremas reflejadas, por ejemplo, en golpes de estado o en huelgas generales o sectoriales continuas, que suelen denominarse *salvajes*, en segmentos importantes de la fuerza de trabajo, fuera de control de las autoridades. Los aumentos masivos de salarios que suelen resultar de conflictos laborales graves de ese tipo, agrava la incertidumbre y las expectativas y acelera también a la inflación.

En la historia inflacionaria argentina, las aceleraciones y las hiperinflaciones fueron *siempre* resultado de la presencia de una, dos o las tres condiciones mencionadas. Ninguna de ellas se verifica en la situación actual de la economía argentina.

En efecto, la economía sigue operando con el llamado *superavit gemelo* en el presupuesto y el balance de pagos. A su vez, el sistema monetario, fundado ahora en la moneda nacional, es efectivamente administrado por la autoridad monetaria. Consecuentemente, la oferta monetaria y su incidencia en los precios está bajo control. El hecho que las actuales turbulencias financieras en los mercados internacionales, no hayan perturbado a la economía argentina, más allá de los cambios en las cotizaciones de valores y acciones y ajustes moderados de la tasa de interés, revela la solidez de los equilibrios macroeconómicos. Demuestra, además, el éxito de la resolución del *default* sobre la deuda pública y la normalización de la privada.

Respecto de los precios críticos de la economía, ninguno está sensiblemente desaliñado respecto de su posición de equilibrio en el conjunto del sistema. El tipo de cambio registra presiones a la apreciación más que a la devaluación. A su vez, los ajustes necesarios que se realicen sobre tarifas de servicios públicos y los aumentos de salarios pactados, considerando el incremento de la productividad, no están exageradamente fuera de línea con las condiciones de una inflación moderada. Es claro que existen aquí y allá, algunas tensiones, incluso la incidencia del aumento de los precios internacionales de los alimentos y la energía, pero, en ningún caso, situaciones extremas comparables a las traumáticas experiencias del pasado.

En cuanto a las relaciones sociales, más allá de algunos conflictos notorios, parciales y geográficamente localizados, los indicadores de horas



ALDO FERRER

perdidas, etc., están dentro de un cuadro razonablemente estable y en un escenario institucional fundado en la Constitución y la vigencia de las instituciones de la democracia. Es un hecho notable que el elemento más perturbador de los últimos tiempos fue el paro declarado por las dirigencias ruralistas en un escenario, en el cual, la mayor parte del sector está atravesando uno de los momentos más prósperos de su historia.

En cualquier caso, existe un problema con la evolución de los precios, sea cual fuere el índice de referencia y la confiabilidad de los disponibles. Una economía que está creciendo en torno del 8% anual en los últimos sesenta meses, tiene que lograr que el nivel general de precios oscile, como máximo, en el 10% anual. Una de las condiciones necesarias es restablecer la confiabilidad del INDEC, aunque no hay que hacerse ilusiones. Aún así, subsistirán multiplicidad de estimaciones privadas, todas o la mayor parte, con estimaciones superiores a las oficiales, como sucedía habitualmente antes del conflicto.

Contener la inflación en niveles moderados es indispensable para aumentar la tasa de ahorro e inversión hacia el 30% del PBI, necesaria para seguir creciendo a tasas comparables a las actuales, elevar el empleo, los salarios y el bienestar social. Es así preciso, consolidar los equilibrios macroeconómicos, evitar desvíos de los precios críticos de los niveles de equilibrio dinámico y preservar la paz social y la racionalidad en la resolución de la puja distributiva, que es inherente a toda sociedad pluralista y democrática y a una economía de mercado.

Esto plantea nuevos desafíos a la política económica. Se trata de articular las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, para estimular el ahorro y la inversión, gestionar la demanda agregada, promover la distribución progresiva del ingreso y preservar al sistema de los ataques

especulativos. Esto último requiere, entre otras cosas, un delicado manejo de la esterilización de los excedentes de oferta monetaria derivada del aumento de las reservas genuinas de reservas internacionales, evitar (vía la tasa de interés efectiva en dólares) la apertura de oportunidades propicias a la especulación financiera de corto plazo y mantener un tipo de cambio real competitivo y estable, en el mediano y largo plazo. Es necesario proporcionar previsibilidad a la inversión productiva e incertidumbre a la especulación financiera.

El superavit primario y la consolidación de la solvencia fiscal es un ancla indispensable para tal política dentro de un escenario, en el cual, la deuda está bajo control y puede ser administrada por los instrumentos disponibles a la política económica. El mercado mundial es actualmente favorable, y promete serlo a largo plazo, para el despliegue del potencial de desarrollo de la economía argentina con una razonable estabilidad del nivel general de precios.

6. EL TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO DESARROLLISTA

Para la ortodoxia, el tipo de cambio de equilibrio (TCE) es aquel que equilibra la oferta y demanda de divisas de las transacciones corrientes de la economía y del libre movimiento de la cuenta de capital del balance de pagos. En teoría, el TCE, así definido, contribuye a la asignación de recursos y distribución del ingreso más eficientes y, por lo tanto, a la más alta tasa de crecimiento posible.

En las economías cuyas exportaciones están concentradas en productos de la agricultura, las actividades extractivas y los combustibles, es decir, los productos primarios, la política cambiaria fundada en esta definición del TCE, es la causa determinante de la enfermedad holandesa. Esto se debe a que, en tales casos, predominan los tipos de cambio que encarecen en divisas los precios de la producción



interna y, por lo tanto, privilegian las importaciones respecto de la oferta doméstica de bienes y servicios transables, es decir, sujetos a la competencia internacional. Al mismo tiempo, esa política cambiaria fomenta las entradas de capitales especulativos que son atraídos por las altas tasas de interés prevalecientes en economías con paridades sobrevaluadas. Este enfoque genera escenarios inestables por la volatilidad de los capitales especulativos y las fuertes variaciones a que están sujetos los precios internacionales de los productos primarios.

En sentido contrario, una política cambiaria orientada a prevenir la enfermedad holandesa, es decir, enfocada a promover la competitividad de la producción interna de bienes y servicios transables y a desalentar los movimientos de capitales especulativos, opera con una distinta definición del TCE. Tal política cambiaria supone que el tipo de cambio de equilibrio es aquel que persigue cuatro fines principales. A saber:

1. Privilegiar el comercio nacional en las decisiones de gastos de consumo e inversión de las empresas, las familias y el gobierno,
2. Estimular la diversificación de las exportaciones incorporando bienes y servicios de creciente contenido tecnológico y valor agregado y, por lo tanto, impulsando la gestión del conocimiento y la transformación de la estructura productiva,
3. Lograr que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno sea el propio país, y
4. Desalentar los movimientos de capitales especulativos creando incertidumbre en los especuladores y

previsibilidad en los tomadores de decisión de inversión productiva.

El TCE desarrollista contribuye al crecimiento del comercio exterior y a generar un superavit en la cuenta corriente del balance de pagos, con el consecuente aumento de reservas del Banco Central. Por lo tanto, fortalece la estabilidad macroeconómica y los mecanismos de defensa frente a las turbulencias internacionales.

Existen, pues, dos definiciones del TCE. Una, la ortodoxa, que privilegia las importaciones y la especulación financiera. Otra, la desarrollista, que prioriza la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo. Todos los países exitosos, como los emergentes de Asia, operan con el TCE desarrollista. Por el contrario, los mayores fracasos en la historia económica de la Argentina y de América Latina, obedecen, principalmente, a que sus políticas cambiarias se fundaron en el TCE ortodoxo.

Argentina es el caso más dramático de las consecuencias del TCE ortodoxo y, en un sentido más amplio, de la ortodoxia neoliberal. La tablita cambiaria de fines de los años setenta y la convertibilidad de los noventa, dismantelaron la capacidad competitiva de la producción de bienes y servicios transables, particularmente en los sectores más sofisticados y mayor contenido tecnológico. Simultáneamente, generaron desequilibrios macroeconómicos que culminaron en la crisis terminal y el default de fines del 2001 y principios del 2002. El desorden y el costo social fueron gigantescos.

La recuperación posterior se explica, en gran medida, porque la política económica dejó de operar con el TCE ortodoxo y empezó a hacerlo con el TCE desarrollista. El ajuste cambiario nos curó transitoriamente de la enfermedad holandesa y abrió espacios de



rentabilidad en múltiples sectores potencialmente eficientes pero desmantelados por la la sobrevaluación del tipo de cambio. El conflicto entre ambas estrategias del TCE no está definitivamente resuelta ni muchos menos. De hecho, los problemas en la sociedad argentina se expresan, en buena parte, en la determinación de la política cambiaria y la elección de uno u otro camino.

En la actualidad, se verifica un progresivo retorno desde el TCE desarrollista hacia el TCE ortodoxo. La prolongada estabilidad del tipo de cambio nominal (TCN) con su reciente disminución, esta alejando al TCE de su nivel desarrollista. Es decir, progresivamente, el TCE está dejando de cumplir con sus cuatro funciones principales que son las mismas que contribuyen a explicar la recuperación de la economía argentina posterior a la crisis del 2001 y principios del 2002. A saber, retener el ahorro argentino, promover el comercio nacional, diversificar e incorporar valor agregado en las exportaciones y desalentar los capitales especulativos.

Es claro que la polémica en torno del nivel real de la inflación, dificulta calcular el desvío entre el TCN y el TCE desarrollista, pero, en cualquier caso, los aumentos nominales de salarios y otros costos, implican el aumento directo de los costos en dólares, divisa la cual, es la moneda de referencia pertinente para calcular el TCE. En consecuencia, es probable que el TCN esté actualmente alrededor del 20% al 30% por debajo del TCE desarrollista. Cuanto mas se prolongue la disparidad entre la tasa de inflación y el ajuste del TCN, mayor será el retraso del TCE desarrollista y las dificultades para su recuperación futura, sin un impacto sensible en la tasa de inflación.

Este es uno de los dilemas centrales que tiene que resolver actualmente la política económica. A saber, como sostener un TCE desarrollista en un escenario macroeconómico bajo control y con

estabilidad razonable de precios. Con todas las complejidades adicionales que esto implica atendiendo a los desequilibrios de la estructura productiva del país. Esto impone la necesidad de establecer TCE desarrollistas adecuados, diferenciados, para la competitividad y rentabilidad de las diversas actividades económicas.

La situación actual es suficientemente sólida como para soportar, durante un cierto tiempo, la ampliación de la brecha entre el TCN y el TCE desarrollista. El Gobierno cuenta todavía con un considerable “margen de error” de la política económica antes que estallen desequilibrios extremos. Pero, con el tiempo, estos reaparecerían y, a más corto plazo, cabría esperar una desaceleración de la tasa decrecimiento y de generación de empleo sin que nadie se proponga, por otros medios, “enfriar” la economía.

7. EL MERCOSUR

El horizonte del desarrollo de la Argentina se expande en el escenario del Mercosur y la integración del espacio sudamericano. Esta es, de por sí, una empresa suficientemente compleja pero, a diferencia de la experiencia europea, que es el paradigma de ese tipo de proceso, en el Mercosur, sus países miembros enfrentan, simultáneamente, otros desafíos mayúsculos. A saber: avanzar en la construcción de sus propios desarrollos nacionales, transformar su inserción en el orden mundial globalizado y dar respuesta a las profundas asimetrías, de tamaño y niveles de desarrollo, entre los países miembros.

Este conjunto de circunstancias que encuadra la formación del Mercosur y, por extensión la de América del Sur, es específico de la región. En tal sentido, se trata de una empresa sin precedentes. En otras latitudes, como en Europa o en la Cuenca del Océano Pacífico, la



ALDO FERRER

integración tuvo lugar, en su despegue, entre economías industriales avanzadas o emergentes, comparables en sus niveles de desarrollo, con una fuerte cohesión de sus estructuras sociales y una relación simétrica no subordinada con el orden mundial.

No es este el caso del Mercosur como no lo fue el de las experiencias anteriores de la integración latinoamericana. Aquí, la integración procede entre países que no han consolidado su densidad nacional en cuestiones claves como la cohesión social, mantienen, respecto del resto del mundo, una posición vulnerable en el contexto del modelo centro-periferia y tienen entre sí asimetrías de dimensión y desarrollo.

Esto caracteriza la complejidad de la formación del Mercosur. Por lo tanto, en este espacio, el proceso no se reduce a fijar reglas para la integración entre los países miembros y establecer políticas públicas de alcance comunitario. Abarca las decisiones propias de cada país en la construcción de su desarrollo nacional, las acciones conjuntas para transformar la inserción de la región en el escenario global y resolver las asimetrías existentes.

Estas circunstancias específicas del Mercosur no inhabilitan la validez del proyecto pero caracterizan su complejidad y condicionan la estrategia integracionista.

La fragmentación social y las asimetrías prevalecientes en la región, contribuyen a explicar la diversidad de las políticas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o Venezuela, cuyos gobiernos, en la actualidad, están motivados por un impulso renovador y progresista.

Las conclusiones distan de ser pesimistas si los resultados alcanzados, hasta ahora, por el Mercosur y otros vínculos

intrasudamericanos, se comparan con la situación preexistente, en el pasado. Vale decir, con las relaciones entre nuestros países al tiempo del despegue de la convergencia de Argentina y Brasil y, por lo tanto del Mercosur, en el Acta de Foz de Iguazú de 1985. Tal comparación revela que, desde entonces hasta ahora, se han conseguido avances notables en planos múltiples, incluyendo comercio, inversiones, solidaridad democrática y posicionamiento internacional. Es así preciso, descartar la visión de la *integración ideal* del Mercosur y del espacio sudamericano, rescatar lo logrado y, sobre todo, desplegar una estrategia realista, profunda y plena de integración de nuestros países, atendiendo a la realidad existente y no a las fantasías.

En la actualidad, prevalecen en la región, gobiernos, en cuyas agendas, la cuestión social es, comprensiblemente, prioritaria. Cada país, procesará los reclamos de sus sociedades conforme a sus propias realidades. Se trata de un problema central del desarrollo nacional que influye en la integración regional, pero son cuestiones de la esfera interna de cada país.

En el sendero de transformación, que cada país construirá a su manera, la integración regional conserva un potencial considerable para ampliar los mercados, coordinar complejos productivos, desarrollar la infraestructura compartida, promover la ciencia y la tecnología y concertar posiciones conjuntas frente al orden mundial, en cuestiones críticas que nos conciernen, como la paz y la seguridad, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico y las reformas en los regímenes de comercio, propiedad intelectual y financiero internacionales.

Es así preciso descartar el pesimismo fundado en supuestas nuevas fragmentaciones entre nuestros países y el fracaso de proyectos ideales de integración, que eran de partida inviables, en el contexto de las



ALDO FERRER

realidades prevalecientes en la región. Sobre la base de la apreciación objetiva de los hechos, es necesario e impostergable construir el Mercosur y la integración sudamericana posibles, en los múltiples espacios de convergencia abiertos en la actualidad, que son muchos más amplios y fecundos que en cualquier otro momento de nuestra historia común.

APÉNDICE:

LA ENFERMEDAD HOLANDESA EN ARGENTINA Y BRASIL

En la actualidad, la llamada “enfermedad holandesa” es una de las cuestiones dominantes en el debate sobre la estrategia de desarrollo en la Argentina y en otros países emergentes, como Brasil. Tal enfermedad afecta a las economías cuyas exportaciones están concentradas en los productos primarios, particularmente, en los períodos de alza de sus precios internacionales. La abundancia de divisas de ese origen, tiende a apreciar el tipo de cambio y a reducir la rentabilidad de los sectores productores de bienes transables (es decir, sujetos a la competencia internacional), distintos de los primarios.

Esta tendencia, a su vez, aumenta la tasa de interés en divisas de los países afectados atrayendo, en consecuencia, capitales especulativos de corto plazo y agravando la apreciación. A mediano y largo plazo, la enfermedad desalienta el desarrollo de nuevas actividades, particularmente las de mayor valor agregado e intensivas en contenido tecnológico. Las mismas que son las portadoras de la gestión del conocimiento y de su difusión en el tejido económico y social, las cuales, en consecuencia, constituyen el motor impulsor del desarrollo económico, en un mundo continuamente transformado por los avances de la ciencia y la tecnología.

La forma en que se presenta la enfermedad en las economías emergentes esta condicionada por las características propias de cada país, en particular, su densidad nacional. En la Argentina, los períodos de apreciación cambiaria post tablita de 1977 y en la década de 1990, tuvieron lugar en el marco de políticas antindustriales, endeudamiento externo, extranjerización de sectores y empresas fundamentales de la economía nacional y grave deterioro de las condiciones sociales. El epílogo fue la crisis terminal de fines del 2001 y principios del 2002. En Brasil,, la enfermedad se presenta en otro contexto. En cualquier caso, el tema es de los más álgidos en el debate que tiene lugar en el Brasil en la actualidad y da lugar a sustantivos aportes a la teoría del desarrollo y al estudio de la misma enfermedad holandesa, como los realizados por el Profesor Luiz Carlos Bresser Pereira.

La apreciación del real, se registra bajo el impacto del incremento de los ingresos de divisas por el aumento de las exportaciones primarias (agropecuarias y minerales) y las entradas masivas de capitales especulativos atraídos por tasas de interés en divisas, probablemente, las más altas del mundo. La paridad real/dólar pasó de casi 4 a fines del 2002 a alrededor de 1.70 en la actualidad. El déficit emergente en la cuenta corriente del balance de pagos sería más que compensado por la entrada de capitales en un contexto de reservas internacionales del Banco Central de u\$s 200 mil millones. De todos modos, la instalación de un desequilibrio de en los pagos internacionales corrientes no contribuye a la solidez de largo plazo de la economía brasileña.

Cabe observar, asimismo, que la apreciación impulsa las importaciones pero, al mismo tiempo, abarata, para las empresas brasileñas, la adquisición de activos en el exterior. La transformación de las ganancias de las firmas brasileñas, realizadas en el mercado interno, en poder adquisitivo externo, es aumentada por la apreciación del real. Esto



ALDO FERRER

contribuye a explicar el dinamismo de la proyección internacional de firmas brasileñas, incluso su creciente presencia en la economía argentina.

La enfermedad holandesa en Brasil se presenta en un contexto, en el cual, siguen prevaleciendo tendencias y políticas de construcción del poder nacional. En Brasil, a diferencia de la Argentina, nunca se instalaron políticas de desmantelamiento industrial sino, por el contrario, estrategias de respaldo a la formación de grandes centros de poder económico y tecnológico, privados y públicos. Recordemos algunos hechos principales.

La construcción de las grandes usinas hidroeléctricas y otras grandes obras de infraestructura, se realizaron bajo políticas que promovieron la participación de las empresas nacionales. Esto explica la formación de firmas locales de la construcción e ingeniería, de escala mundial. En el petróleo, a través de Petrobras, se mantuvo una política de exploración y explotación de hidrocarburos, crecientemente fundada en la ingeniería y tecnología propias. Así, actualmente, Brasil cuenta con tecnología e industrias de frontera para la exploración de yacimientos *off shore*, vitales en su desarrollo hasta ahora y, aún más, a partir de la futura explotación de los mega yacimientos recientemente descubiertos. Argentina, en cambio, con la extranjerización de YPF, dilapidó el potencial tecnológico acumulado en la empresa que, hasta entonces, era semejante o aún mayor que el del Brasil.

Otro caso notable de la construcción del poder nacional es EMBRAER, la tercera fábrica mas importante del mundo productora de aeronaves, cuya importancia treinta años atrás era inferior al de la industria aeronáutica argentina, desmantelada por las políticas antindustriales. En materia de financiamiento, a su vez,

el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), construyó un sólido poder financiero (sustentado, en buena medida, en el fondeo surgido de los recursos de amparo al trabajador), el cual, respalda el desarrollo de las actividades prioritarias y la proyección internacional de las empresas brasileñas, incluso en el mercado argentino. Argentina, en cambio, disolvió su Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y su fondeo en recursos basados en la masa salarial (como en el BNDES), creados en 1970, durante mi gestión en el Ministerio de Economía, sobre la base del anterior Banco de Crédito Industrial.

Con la misma firmeza, Brasil ha desplegado, una activa política social, fortalecida bajo el Gobierno Lula. Los programas de *bolsa escola* y *bolsa familia* parecen haber sido muy eficaces en la asistencia de sectores marginales. La política de educación y salud, registra también avances considerables. Brasil es así, un país inmenso y contradictorio, destinado a ocupar un lugar importante en el escenario mundial. La enfermedad holandesa no contribuye a desplegar en plenitud el potencial del país pero el mal se expresa, en nuestro vecino, en un contexto muy distinto al nuestro. Porque aquí, bajo el programa económico del 2 de abril de 1976 del régimen de facto y las políticas de la década del noventa, la enfermedad holandesa tuvo lugar en un contexto de destrucción del poder de decisión nacional con la extranjerización indiscriminada de los núcleos estratégicos de la economía nacional, la desindustrialización y el deterioro de las condiciones sociales. De este modo, la enfermedad holandesa produjo en Argentina efectos más negativos que en Brasil. Argentina, por lo tanto, debe no solo establecer una política cambiaria que la cure de la enfermedad holandesa sino, además, construir núcleos de poder nacional que, como en el caso del Brasil, son fundamento principal del desarrollo futuro.



ALDO FERRER

REFERENCIAS

A. FERRER. La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 4ª. Ed., 2008.

A: FERRER. La densidad nacional: el caso argentino. Capital Intelectual. Buenos Aires. 2004 .



**BOLIVIA: “LA REVOLUCION
DEMOCRATICA Y CULTURAL”
DEL PRESIDENTE EVO MORALES
Y EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
(MAS) 2006-2008**





BOLIVIA: “LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURAL” DEL PRESIDENTE EVO MORALES Y EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) 2006-2008¹

ESTEBAN TICONA ALEJO²

*“(...) no sólo podemos ser electores, sino elegidos, bien por nosotros,
empecemos por la diputación para después llegar a la
Presidencia de la República, puesto que somos mayoría (...).”*

Manuel Chachawayna, primer candidato
indígena aymara a Diputado en 1927.

DATOS GENERALES

El territorio de Bolivia comprende tres zonas geográficas: al oeste, el altiplano o puna, limítrofe con Perú, Chile y Argentina, una vasta meseta de una altitud media de 3.000 mts s.n.m. encerrada entre dos ramas de la cordillera de Los Andes. Los valles y los yungas, de menor altitud, lindantes con Argentina, Brasil y Paraguay; y al este, los llanos, una región amazónica al norte y chaqueña al sur, que limita con Brasil y Paraguay.

Según el último Censo de Población y Vivienda en 2001 (INE, 2003b: 27), Bolivia cuenta con 8.274.325 habitantes, aunque hoy en día se

¹ Conferencia presentada al “V Curso para Diplomáticos Sudamericanos”, organizado por la Fundación Alexandre de Guzmán y el Instituto de Pesquisa de Relaciones Internacionales de Brasil. Río de Janeiro, 21 de Octubre de 2008.

² Aymara-boliviano. Es Sociólogo y antropólogo, candidato a Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es docente en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Tiene varios libros publicados sobre movimientos sociales indígenas y campesinas. Actualmente es Director General de la Academia Diplomática Boliviana de la Cancillería de Bolivia.



calcula la existencia de 10 millones de habitantes. La población indígena asciende a 4.133.138 personas, de las cuales 1.857.342 residen en el área urbana (44,94%) y 2.275.796 en el área rural (55,06%). El 62% de la población se autoidentifica como indígena; entre ellos, el 30,71% es hablante de quechua. Los Aymaras suman el 25,23%; los Chiquitanos el 2,22%; los Guaranís el 1,55%; los Mojeños el 0,85%, y otros hablantes de idiomas de la Amazonía, oriente y chaqueña (se incluye a los Urus del altiplano), suman el 1,49% (INE, 2003a: 158).

INTRODUCCION

Un testimonio del ex secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Asambleísta del MAS, Román Loayza, en un taller en La Paz³, sintetiza la idea de que los pueblos indígenas y campesinos se sienten más cómodos haciendo política desde sus propias organizaciones.

Loayza contó, que cuando inició su vida sindical y éste iba en ascenso se preguntó muchas veces “me dedico a la vida sindical o la vida política”. Su carrera sindical estaba cimentada en las tradiciones quechuas comunales y en el sindicalismo local anti hacendatario. Ambas prácticas habían desembocado en otra forma de hacer política, con fuertes raíces andinas y sobre todo en la convicción anticolonial y liberadora de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia. En cambio la “política *q'ara*” o criolla mestiza estaba (aún está) conectaba con el quehacer de las élites dominantes, con la clase política del país y su profunda enajenación colonial y, su desarraigo de los intereses de las mayorías del país. Esta última constatación, le permitió optar por “la política como hecho propio”, es decir, hacer política desde el sindicato local, pero con fuertes ligazones comunales andinos.

³ “Sistema de representación político en Bolivia”. Seminario organizado por FBDM-IDEA-PNUD-AECI-ASDI. La Paz, 6 de junio de 2006.



Lo más importante de este testimonio es constatar que los sindicalistas campesinos e indígenas, siempre transitaron en la vereda política boliviana; pero la convicción de contar con un propio instrumento político, basado en la matriz andina, como el *thakhi* o el *ñan* (“camino”), les permitió construir un proyecto político alternativo y hacer política de otra manera. Aunque en la presente coyuntura, queda el gran reto de cristalizar esa experiencia civilizatoria andina en un nuevo modelo de Estado para todos los bolivianos y bolivianas.

I. BREVE HISTORIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA VEREDA POLÍTICA BOLIVIANA

La presencia de indígenas y campesinos, principalmente aymaras y quechuas en la política nacional es de larga data. A pesar de su exclusión en la fundación de la república en 1825, algunos sectores de la clase política boliviana denominada *q'ara* o criolla-mestiza, casi siempre han tratado de “añadirlos” al quehacer político y a la democracia occidental.

Dos grandes inclinaciones imperaron en esta larga experiencia de los pueblos indígenas y campesinos en la política nacional. Por un lado, la insubordinación abierta contra el sistema político reinante y por la otra, el juego a las reglas de la “democracia boliviana”. Ambos procesos tuvieron convicciones variados y múltiples impactos; pero en muchas ocasiones fueron implementadas como estrategias paralelas.

1. EL MOVIMIENTO DE LOS APODERADOS GENERALES, 1880-1900

La Ley de Exvinculación de 1874 sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del *ayllu* (casi equivalente a la comunidad) por la posesión individual. En otros términos, se declaraba la extinción legal del *ayllu* y/o comunidad y se pretendía parcelar su territorio, individualizando



la posesión comunal, mediante la dotación de títulos privados. Para las poblaciones indígenas andinas, éste fue un golpe duro, pues el Estado boliviano pretendía destruir la sociedad *ayllu* mediante un decreto. Como consecuencia de la aplicación de la citada ley, se desató el más importante proceso de expropiación de tierras indígenas de la historia republicana, implementado a través de la Revisita General de tierras del año 1881 (Condarco Morales 1982).

Frente a esta política estatal anti-india, alrededor de 1880 se constituye un movimiento indígena, denominado *los Apoderados Generales*, que estaba conformado por autoridades originarias como Jilaqatas, Mama jilaqatas, Jilanqus, Mallkus, Mama mallkus o Kurakas de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano Espinosa y Diego Cari Cari fueron sus primeros representantes (Demelas 1984 y Ticona 1989). Las principales acciones de este movimiento de los *Apoderados Generales* fueron representar a las marcas, ayllus y comunidades originarias de los cinco departamentos citados y oponerse a las políticas de expansión de la hacienda de los sectores dominantes, utilizando la legislación de la época.

El resultado de esta masiva oposición y resistencia india fueron, en primer lugar, la suspensión de la Revisita General de tierras por parte del gobierno y en segundo lugar, la exención de las comunidades originarias de la revisita. Por ello comenzaron a tener vigencia las tierras de los ayllus y comunidades originarias, que habían sido compradas de la Corona de España en la época colonial mediante títulos de *Composición y Venta*.

Sin embargo, en la medida que continuaban en la lucha, el movimiento de los *Apoderados generales* iba logrando algunas reivindicaciones más inmediatas, pero también comenzaban a rebasar



los marcos de la lucha legal, pasando a otra etapa más política e incluso subversiva. En esta etapa se configuraba claramente el poder de los ayllus y comunidades, quienes comenzaban a plantear el derecho a un gobierno propio. Dentro de este panorama de masiva movilización indígena se ubica el desacato o la desobediencia civil a las autoridades superiores y subalternas, propugnado por los *Apoderados Generales* (Demelas 1984, Ticona 1989 y Condarco Morales 1982).

La instauración del primer gobierno indio en Peñas del departamento de Oruro, alrededor de 1900 a la cabeza de Juan Lero, no fue una casualidad de la participación aymara-quechua en la guerra federal de 1899, sino una consecuencia clara de una etapa de fuerte convicción política indígena buscando la autodeterminación (Condarco Morales 1982 y Reinaga 1970/2000).

2. EL MOVIMIENTO DE LOS CACIQUES APODERADOS, 1912-1952

Después de la derrota del movimiento de los *Apoderados Generales*, primero a la cabeza de Feliciano Espinoza y Diego Cari Cari, y luego de Pablo Zárate Willka, Juan Lero y otros, después de la participación india en la guerra federal de 1900. Alrededor de 1912 continuó el movimiento indígena aymara, quechua y uru en su lucha, ahora liderados por una red denominada los *Caciques Apoderados*, pertenecientes a los ayllus y comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, quienes emprendieron una otra etapa de la prolongada lucha legal y de rebeliones hasta 1952, en demanda de la restitución de las tierras comunales usurpadas por las haciendas y el pleno acceso a la ciudadanía.

Esta segunda etapa de lucha fue calificada de reivindicación por la "soberanía comunal" y "por la ciudadanía" (Rivera 1989). Aparecen como figuras visibles de este movimiento Santos Marka T'ula, Faustino



Llanqui, Francisco Tangara y muchos otros (THOA 1984 y Choque y Ticona 1996).

Una de las estrategias de los *Caciques Apoderados* fue la recuperación de los títulos coloniales de *Composición y Venta* otorgados por la Corona de España. Esta búsqueda llevó a los caciques apoderados a una interpretación de la recuperación de las demarcaciones originales de los ayllus y comunidades, lo que originó serios enfrentamientos con la casta dominante de entonces.

Uno de los ejes del conflicto entre la sociedad indígena y la sociedad criolla-mestiza dominante era el problema del territorio, no meramente como medio de producción, sino como el espacio socio-espiritual del ayllu y la comunidad en su conjunto. Vale decir desde el espacio productivo y social hasta los espacios sagrados de los *ymiris* o cerros tutelares, que representan la relación de los ayllus, la comunidad con sus antepasados.

Los primeros años del siglo XX, en la medida que se cristalizaban los gobiernos liberales, se legitimaban las usurpaciones de tierras comunales y la red de caciques apoderados tuvo que diseñar nuevas estrategias en una lucha desigual. La convicción de ser propietarios primigenios del territorio desde los antepasados les permitió reivindicar el derecho a la nueva ciudadanía.

3. MANUEL CHACHAWAYNA: EL PRIMER CANDIDATO INDÍGENA HA DIPUTADO

En enero de 1927 el Partido de la Unión Nacional, más conocido como Partido Nacionalista, bajo el liderazgo de Hernando Siles, participaba en las elecciones del Poder Legislativo. Con la voluntad de ganar las elecciones camarales, el partido oficial se lanzó a la campaña electoral.



El voto calificado vigente no permitía que toda la población indígena pudiera votar libremente en los comicios. Sin embargo, el Partido Nacionalista, para que un importante número de aymaras y quechuas puedan votar y apoyar al partido, encontraron el justificativo del derecho que también tenían los indígenas de votar y tener su propia representación.

En esta coyuntura política indigenista fue postulado Manuel Chachawayna, como candidato aymara a diputado por las provincias Muñecas y Camacho del departamento de La Paz. Este indigenismo oficial, plagado de oportunismos y sutilezas, inició la compleja relación política del sector comunal de Chachawayna y los gobiernos de Saavedra y Siles.

Chachawayna no fue elegido diputado, pese a ser el aliado del republicanismo. Pero inauguró un pequeño espacio político en la búsqueda de tener una propia representación política (Ticona 2002).

4. LA PROPUESTA DE "RENOVACIÓN" DE BOLIVIA DE EDUARDO NINA QUISPE

Eduardo Nina Quispe, aymara del ayllu Chivo de Taraco, en una de sus publicaciones más importantes titulada, *De los títulos de composición de la corona de España*, plantea la "Renovación" de Bolivia. Allí sostiene que los territorios de los ayllus y comunidades, legalizados mediante títulos coloniales, por haber sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de *mit'a* en Potosí, les otorgaban pleno derecho propietario a los ayllus y marcas de la época.

Este fue el argumento central del movimiento indígena de la época para exigir al gobierno la inmediata posesión administrativa a favor de los ayllus y comunidades, a pesar de que muchas de



estas tierras estaban en poder de los hacendados después de la Revisita de 1882.

En el documento citado, Eduardo Nina Quispe muestra que el movimiento indígena, no sólo tenía el interés en la preservación del patrimonio territorial e histórico del ayllu y la comunidad andina, sino de la totalidad del territorio nacional boliviano.

No cabe duda que a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los ayllus y markas, Nina Quispe planteó la idea política más clara de su época, la renovación o la re-fundación de Bolivia. Por eso decía:

“Todos los bolivianos obedecemos para conservar la libertad. Los idiomas aimará y quechua, habla la raza indígena, el castellano, lo hablan las razas blanca y mestiza. Todos son nuestros hermanos”
(Nina Quispe 1932).

Queda claro que pensaba que Bolivia tendría un mejor destino si partía del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también de los no indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia intercultural (Mamani 1991).

La Guerra del Chaco con el Paraguay (1932-1935), trajo una serie de consecuencias para el movimiento de los caciques apoderados. Las organizaciones indígenas son combatidas por el Estado, en especial por la logia militar *Legión Cívica*, instancia especializada en la represión india. Eduardo Nina Quispe, fue tildado de “comunista” y “subversivo” y apresado por “atentar” contra la seguridad del Estado, en plena confrontación internacional.



Esta coyuntura de guerra externa e interna obligó a los caciques apoderados, a una especie de “exilio interno”, que supuso el retorno a sus lugares de origen u otras regiones distantes. Esta “clandestinidad obligada” impuso a los caciques apoderados, perder gradualmente la vigencia del movimiento. Aquí se inicia el quiebre de la organización de los caciques, que hasta entonces, habían logrado frenar, en alguna medida, el avance vertiginoso de las haciendas, alentada por políticas estatales y paraestatales y oponerse abiertamente a las políticas del Estado colonial boliviano (Arze 1987 y Choque y Ticona 1996).

5. LA REVOLUCIÓN NACIONAL DE 1952 Y EL MOVIMIENTO KATARISTA E INDIANISTA

La revolución del 9 de abril de 1952, posibilitó una mayor presencia del indio en la política nacional. Aunque los primeros 12 años de la revolución del 52, éstos fueron subordinados al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), bajo el denominativo de “diputados campesinos”. El movimiento katarista e indianista, inició el cuestionamiento al carácter inconcluso de la revolución del 52, además de instituir la autonomía organizativa y fundar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979, a la cabeza de Jenaro Flores Santos (Rivera 1984, Hurtado 1986 y Ticona 2000). A partir de esta experiencia, el movimiento indígena-campesino reivindicó la nueva ciudadanía y la identidad plena como pueblos, e inauguró con ella, una especie de matriz político ideológico anticolonial contemporáneo, plenamente vigentes en el actual escenario político nacional.

La experiencia de los primeros diputados indianistas, como Constantino Lima y Luciano Tapia del Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) (Tapia 1995) o la presencia de los kataristas Víctor Hugo



Cárdenas y Walter Reinaga del Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTKL), abrieron la presencia real e indígena en la política nacional en la etapa denominada “proceso democrático”, iniciada en los años ochenta. En esta misma década, son nombrados los primeros ministros indígenas, como Zenón Barrientos, Mauricio Mamani, Simón Yampara, entre otros (Hurtado 1986).

6. EN TIEMPOS NEOLIBERALES: LA BÚSQUEDA DEL “INSTRUMENTO POLÍTICO”

Después de la fundación de la CSUTCB en 1979, se han vivido diversas situaciones de crisis por una serie de factores. Pero ello no impidió seguir avanzando en la propuesta política (incluido el discurso) propiamente dicho.

Donde ha habido mayor desarrollo ha sido en la articulación entre el discurso político de la identidad indígena-campesina y la clase social. Una importante ocasión para esta profundización fue el año 1992, que llevó a repensar todo el tema de “los 500 años” de invasión y colonización española y, la resistencia y vigencia actual de los pueblos originarios. En todo ello cupo a la CSUTCB, a la CIDOB y a otras organizaciones de base una acción protagónica.

Una de las intenciones entonces más soñadas fue la de crear “un instrumento político”: la Asamblea de Nacionalidades, propugnada desde el I Congreso Extraordinario realizado en Potosí en 1988, debatida en varios encuentros y comités conjuntos de la CSUTCB y CIDOB y en otras varias instancias.

La idea central era la reconstitución formal de los ayllus y comunidades a través de sus autoridades originarias y del pueblo, y la creación de una instancia superior de todas ellas a nivel nacional. Se



preveía incluso que esta última podía llegar a sustituir, o al menos coordinar con este nuevo enfoque de unidad en esa diversidad india, a las actuales organizaciones indígenas y sindicales, según el caso. Por este camino, los varios promotores de la idea esperaban dotarse de un espacio político de deliberación, decisión y ejecución como pueblos originarios del país.

Mientras esta propuesta sólo era una idea, todos apoyaron la Asamblea y fue masiva su aceptación. Pero, a medida que se le intentó darle cuerpo, surgieron los problemas internos y los juegos de intereses políticos ideológicos. No faltaron algunas voces que se preguntaban con recelo: ¿Qué oculta la idea de la Asamblea de las Nacionalidades? ¿Qué intereses políticos estarán detrás de ella? Estas contradicciones saltaron a la vista, con un gran éxito expresivo y una débil organización, en el momento mismo de su realización. El 12 de octubre de 1992 vivió al mismo tiempo masivas movilizaciones, llenas de fuerza simbólica, y un doloroso fracaso en la instauración de la Asamblea de Nacionalidades.

Está claro que el "instrumento político", hay que entender como una propuesta de estrategia (y táctica, se dice en algunos documentos) política de los pueblos originarios, campesinos y otros sectores sociales del país. Por tanto, no es exclusivo de los pueblos aymaras ni quechuas, sino abierto a otros sectores de la sociedad boliviana.

Queda también evidente, el proceso de la construcción del "instrumento político" y por tanto una propuesta inconclusa. En definitiva, si bien todos son llamados para construir el "instrumento político", sólo los que han llegado a influir en la dirección de la CSUTCB lograron llevar adelante la misma (Villca 1992 y 1995; Ticona 1996).



7. NUEVOS ACTORES EN ESCENA: LOS COCALEROS

Sin el ánimo de hacer algún análisis profundo, nos aproximamos al surgimiento del movimiento cocalero. Como es sabido, el cultivo y uso de la coca ha sido tradicional desde antes de los inkas. En la época colonial su uso aumentó notablemente tanto en las minas como en el campo y actualmente, la hoja de coca sigue siendo un elemento central de la cultura andina, tanto al nivel de consumo durante el trabajo, como para otras actividades curativas, sociales y rituales.

El panorama se complicó cuando, en los años 70, empezó a masificarse la actividad del narcotráfico en el Oriente del país y poco a poco estableció la base social de otra economía, cuya principal materia prima es la hoja de coca. Al principio era una actividad limitada a un sector poderoso y reducido. Pero la fuerte crisis económica del país, sobre todo durante el Gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) y luego, el inicio de la política neoliberal del MNR del año 85 y su continuidad con los gobiernos subsiguientes.

La masiva “relocalización” de trabajadores del país o la recesión laboral, obligó a los indígenas, campesinos y sectores populares a relacionarse con los niveles más subordinados de esta economía perversa. Para la mayoría de los indios y campesinos no se trata de buscar las rápidas ganancias del narcotráfico sino de acceder a una de las poquísimas formas alternativas de sobrevivencia que les siguen abiertas.

El problema empieza por la falta de verdaderas propuestas de desarrollo rural para los indígenas y campesinos en sus lugares de origen. De esta forma, la migración rural sigue en aumento y al no encontrar suficientes opciones en la ciudad y al fracasar las alternativas



del gobierno a la solución de la producción de la coca, cada vez fueron más los indígenas y campesinos y hasta alguna gente de sectores populares urbanos que dirigieron sus pasos al Chapare-Chimoré para actividades directa o indirectamente relacionadas con el ciclo de la coca-cocaína.

Frente a este panorama, la política dominante de los Estados Unidos ha sido golpear las zonas de cultivo de la hoja de coca, el procesamiento, la producción de la droga y los circuitos del tráfico ilícito. El argumento del gobierno norteamericano siempre ha sido preservar la "seguridad nacional" de los estados involucrados en la problemática. Este es el eje fundamental de su estrategia frente a Bolivia y toda la región andina: una "guerra contra las drogas". Esto explica que desde 1985 se hayan producido continuas operaciones militares conjuntas en territorio boliviano, llegando incluso a forzar un tratamiento militar en los centros de producción de la hoja de coca.

Pero centrémonos en la población "colonizadora". El recurso de militarización, junto con una serie de abusos reiterados de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) y otras instancias de control, ha representado para los indígenas-campesinos del Chapare y los Yungas un nuevo motivo de movilización permanente. En ello, la contradicción sigue siempre latente: lo que unos perciben sólo como delito de narcotráfico, para la mayoría de los campesinos-indígenas sigue siendo, ante todo, estrategia de sobrevivencia.

Ante la creciente represión, la población civil del Chapare multiplica sus protestas, canalizadas a través de sus organizaciones sindicales. Se organizan varias campañas contra la militarización mediante asambleas, reuniones masivas y sobre todo con la constitución de Comités de Autodefensa en el Chapare. Todo ello favoreció la unidad de las diversas federaciones de los productores de coca en



medio de los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para dividir y disociar hasta el enfrentamiento a dichas federaciones, en torno al tema de la erradicación de los cocaes. Más aún, la existencia de un claro objetivo compartido, ha facilitado también una mayor articulación entre dirigentes y bases, expresada en reiteradas movilizaciones de masas.

En medio de toda esta movilización campesina quechua-aymara, ha ido creciendo la importancia del sector productor de la coca dentro de los pueblos originarios y campesinos. Si bien siguen perteneciendo orgánicamente a la Confederación Nacional de Colonizadores o a la CSUTCB, sobre todo a través de la Federación Especial de Trabajadores del Trópico, ha desarrollado su propia identidad y ha ido ampliando poco a poco su capacidad de influencia y liderazgo en el conjunto de la organización indígena y campesina del país.

La potencialidad política indígena-campesina se expresó de diversas maneras. Por ejemplo, dentro de la CSUTCB en el III Congreso en 1987, a cambio de su apoyo a uno de los bandos en pugna, las representaciones del Trópico cochabambino triplicaron el número de sus delegados. Además, sin perder este vínculo con la respectiva confederación matriz, ellos mismos se han organizado, a través de un Comité de Coordinación de sus cinco federaciones, como “productores de coca” realizando sus propios encuentros nacionales desde 1988 y elaborando sus propios planes y propuestas alternativas.

La lucha de los productores de la hoja de coca, ha permitido denunciar casos de implicación en el narcotráfico de agentes y de autoridades policiales, casos de prevaricato en los estratos judiciales, violación permanente a los derechos humanos, etc. Lograr que ese foco de corrupción llegara a ser conciencia en la opinión pública, supuso años de denuncias y un clima de tensión a momentos insoportables.



La marcha de los cocaleros del Chapare "por la dignidad y la defensa de la soberanía nacional", en agosto y septiembre de 1994, hasta la ciudad de La Paz, inició otra etapa de capacidad de movilización del sector, logrando burlar reiterados esfuerzos gubernamentales para dispersarla y suscitando, de paso, un amplio apoyo nacional. Encuestas realizados por un influyente medio de comunicación, llevaron a nombrar al dirigente cocalero Evo Morales, apresado al principio de la marcha, como "el hombre del año".

En 1995, ante la violencia generalizada por parte de los organismos de la lucha contra el narcotráfico del gobierno, las mujeres (esposas, hijas, hermanas, etc.) de los cocaleros del Chapare, realizaron otra larga caminata hasta la ciudad de La Paz, exigiendo justicia y el respeto a los derechos humanos de los productores de la hoja de coca. De esta forma, las movilizaciones de los productores de la hoja de coca, forzaron a un diálogo y negociación que antes se le negaba, poniendo nuevamente sobre el tapete una serie de cuestionamientos a la política estatal de la coca y la administración de justicia en estas zonas.

A esto se suma, el éxito de los cocaleros en las elecciones municipales de diciembre de 1995, donde lograron mediante su movimiento político denominado la Asamblea de la Soberanía de los Pueblos (ASP), la elección de 47 concejales, que les ha permitido sustentar mejor su discurso, especialmente en la provincia Carrasco de Cochabamba.

Todos estos éxitos, han hecho que las bases indígenas y campesinas de otras regiones del país, tengan más aproximación y simpatía hacia los cocaleros. Porque sencillamente, las bases aymaras y quechuas, encontraron en el movimiento cocalero, una alternativa a sus reivindicaciones postergadas.



Estos antecedentes, hacen que no sea ninguna sorpresa el triunfo categórico de los cocaleros en el VII Congreso de la CSUTCB. Este ascenso no sólo les permite ser representantes y portavoces de los pueblos originarios y campesinos del país, sino la de manejar la propuesta política denominada “instrumento político”.

Este contraste entre la gran fuerza expresiva y la dificultad de transformar la idea compartida en una organización de consenso trae muchas enseñanzas para la maduración política de los sectores indígenas y campesinos, en sus niveles superiores (Ticona 1996).

8. EL VICEPRESIDENTE INDÍGENA

La elección del aymara Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente del agringado Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), obedeció principalmente a un estudio de marketing político. El acompañante de Goni debía tener las cualidades opuestas a las del candidato presidencial, que era un empresario minero, parte de la oligarquía *q'ara* o criolla y muy relacionado con los Estados Unidos (Albó 2002:70). Es decir, aquello que no tenía Goni, lo indio y la pobreza de los sectores mayoritarios del país, representó Cárdenas. Esta experiencia simbólica, fue sin lugar dudas la más importante de la presencia de un indígena como vicepresidente en el poder ejecutivo, aunque su imagen indígena fue muy bien utilizado para imponer las políticas neoliberales en el país.

Después de la “guerra del gas” de 2003, el gobierno de Carlos Mesa, a fin de tejer algún puente de comunicación con la población indígena paceña y particularmente de la ciudad de El Alto nombró al aymara Nicolás Quenta como Prefecto del departamento de La Paz. En esta coyuntura se abren otros espacios para los indígenas como el de ser embajadores, son los casos de Elsa Guevara que fue representante en Cuba y otro indígena guaraní en Paraguay.



II. BOLIVIA DESPUES DEL AÑO 2000

1. ANTECEDENTES GENERALES

El Gobierno de Víctor Paz Estensoro, mediante el Decreto N° 21.060 de 1985 inauguró la etapa neoliberal en la vida política del país. El Estado boliviano se retiró de su rol de dueño de los recursos naturales y las empresas más importantes, como las minas y los hidrocarburos, fueron vendidas a manos privadas y los sindicatos combativos, como fue el caso de los trabajadores mineros, fueron replegados mediante la política de la "relocalización" o la recesión laboral.

En la primera gestión del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), siguiendo los grandes lineamientos de sus antecesores, a partir de otros cambios legales, como la reforma de la Constitución Política del Estado, la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular (o ley de municipalización), todas de 1994, y la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, más conocida como la Ley INRA de 1996, abrían nuevas sendas para la cristalización de las políticas neoliberales.

La denominada "la guerra del gas" o rebelión de octubre de 2003 obligó a los parlamentarios de entonces a realizar algunas modificaciones a la Constitución Política del Estado de 1994. Mediante la Ley N° 2.631 del 20 de febrero de 2004, se incorporó la realización del Referéndum, la Asamblea Constituyente y la participación de candidatos de las organizaciones indígenas y campesinas, sin tener que hacerlo mediante partidos políticos.

En estas etapas, las políticas neoliberales, al reconocer jurídicamente formas de organización de los estratos sociales más postergados, como los indígenas, campesinos y sectores populares del



país, buscaba su incorporación más activa a la vida política local, desde sus ayllus y/o comunidades, juntas vecinales y regiones de origen. Sin embargo, esta forma de reconocimiento neo-liberal no contribuyó a generar espacios reales de democracia y convivencia en el respeto y la diferencia.

2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS, CAMPESINAS Y EL QUIEBRE DEL MODELO NEOLIBERAL

El modelo neoliberal excluyente después de varios años de intentar cuajarse colapsó, sobre todo a partir de las masivas movilizaciones sociales iniciadas en abril de 2000 la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, contra una empresa multinacional del agua, que pretendía privatizar la misma.

En el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa (iniciada el 6 de agosto de 2002) se ejerció en un ambiente de fuertes cuestionamientos a las políticas neoliberales y baja legitimidad al quehacer de la política tradicional⁴. La coalición de gobierno se estableció con 5 partidos con representación congresal y mostró una crisis de credibilidad desde su origen por constituir una alianza política con predominio de intereses antinacionales y oligárquicos.

La primera crisis política se presentó en febrero de 2003, con el amotinamiento de las tropas de la policía acantonadas cerca del Palacio de Gobierno (Plaza Murillo), en contra de un decreto que fijaba nuevos impuestos a la ciudadanía, que derivó en el enfrentamiento armado inusual con el ejército y el saldo lamentable de cerca de 40 muertos entres policías,

⁴ En las elecciones generales de 2002 participaron 11 partidos políticos. El Movimiento Nacionalista Revolucionario obtuvo el primer lugar con el 22,46% de los votos, en segundo lugar se ubicó el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales con el 20,96%, en tercer lugar la Nueva Fuerza Republicana con el 20,91%; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria con el 16,32%, y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe con el 6,09%, como los más significativos.



militares y civiles. Esta crisis policial-militar fue secundada por sectores populares descontentos, que incendiaron y saquearon algunas sedes de los principales partidos gobernantes, algunos ministerios, la alcaldía de El Alto y algunos comercios y empresas. Desde entonces el nuevo gobierno se apoyó más en el ejército.

Indudablemente, la denominada “guerra del gas” de 2003 y la consiguiente masacre de cerca de setenta personas y casi quinientos heridos, a raíz de la represión a bala por parte del ejército, principalmente a indígenas urbanos y rurales en la ciudad de El Alto y algunas provincias de La Paz, inició el quiebre político más importante de la etapa neoliberal. Estas masivas movilizaciones de los meses de septiembre y octubre del año indicado, se extendió a algunos sectores de la clase media y en las minas, principalmente a raíz de las pretensiones del gobierno de Sánchez de Lozada de vender el gas por el territorio chileno, ha puesto nuevamente al desnudo el tipo de democracia y las verdaderas relaciones entre sectores sociales dominantes y la población indígena y los sectores populares del país y, esta fue la detonante para la caída del presidente represor.

Lo más novedoso de todo este proceso emergente fue la sustitución del histórico rol de los trabajadores mineros y la Central Obrera Boliviana (COB) por un nuevo y creciente protagonismo de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, tanto andinos como de la amazonía, el oriente y el chaco y, todos ellos con una agenda no sólo de reivindicación indígena-campesina sino también de clase social y de defensa de los recursos naturales como el gas, el agua y la tierra-territorio.

En este escenario de quiebre de las políticas neoliberales y la consiguiente crisis de la política tradicional, se realiza el ascenso vertiginoso de la llamada la “Asamblea por la Soberanía de los Pueblos” (ASP), creado por las 6 federaciones de productores de la hoja de coca del Chapare



cochabambino en 1995 y más tarde denominada el Movimiento al Socialismo (MAS), liderizado por el aymara Evo Morales Ayma.

Un salto importante en el ascenso nacional del movimiento cocalero, Evo y el MAS, ocurrió en 2002 como reacción a los intentos tanto de las elites políticas tradicionales como de la Embajada de Estados Unidos de frenarlo a toda costa, lo cual más bien lo catapultó a segunda fuerza política nacional en las disputadas elecciones de julio de dicho año. Para poder gobernar, Sánchez de Lozada tuvo que aliarse con el tercero y el cuarto, vale decir con la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Reyes Villa y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Paz Zamora.

En los meses siguientes el MAS adquirió un mayor protagonismo político y con buen olfato político, organizó movilizaciones masivas de los movimientos indígenas y campesinos en diversas partes del país protestando contra la política “entreguista” del gas a las multinacionales extranjeras que pretendían utilizar para ello un puerto de Chile, el país que en 1879 había dejado a Bolivia sin acceso al mar.

A la huida de Sánchez de Lozada, le sucedió constitucionalmente su Vicepresidente, Carlos Mesa, un periodista con poca experiencia en la política nacional. A pesar del masivo apoyo de los sectores indígenas y populares al inicio de su gestión, por no tener ningún antecedente en la política tradicional, su gobierno fue estructuralmente muy débil.

La debilidad del gobierno de Mesa dio también al crecimiento del movimiento “autonomista” de Santa Cruz, a la que posteriormente se sumaron los de Tarija, Beni y Pando y se denominaron “media luna”. Estas elites económicas y oligárquicas regionales intentaron frenar el peligro que para ellas representaba el ascenso del MAS e impulsieron la elección de



prefectos, como una forma de defensa política y desde la esfera departamental. Los dirigentes de este movimiento “autonómico”, con grandes recursos económicos para distribuir favores y manipular los medios de comunicación locales, lograron movilizar a grandes multitudes sobre todo urbanas en cabildos abiertos y recolectar medio millón de firmas y así justificar la convocatoria legal a una consulta o referéndum sobre autonomías departamentales.

En las elecciones municipales de diciembre de 2004, el MAS ganó ampliamente en el área rural andina e incluso partes del Oriente; pero no logró conquistar ninguna ciudad importante, ni siquiera El Alto, cuyos electores –movilizados un año antes– prefirieron el voto por el anterior alcalde (José Luis Paredes). Por eso el MAS, junto con los movimientos sociales, volvieron a promover movilizaciones indígenas y populares, y cierre de carreteras desde varios frentes, apelando a la defensa del gas y los recursos naturales.

Finalmente Carlos Mesa, cercado desde tantos frentes, se sintió incapaz de gobernar y renunció a la presidencia en junio de 2005. Fue el momento más difícil para la democracia boliviana pues sus dos sucesores constitucionales –el presidente del Senado y de Diputados– eran personalidades vinculadas con el antiguo régimen de Sánchez de Lozada y estaba claro que si uno de ellos asumía la presidencia, la convulsión social y política llegaría a límites impredecibles. Entonces, se produjeron una serie de masivas movilizaciones en las calles e incluso en los cuarteles hasta asegurar que ambos renunciaran a su derecho presidencial para que la secuencia de sucesores constitucionales llegue hasta su último eslabón, que era el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, el único constitucionalmente habilitado para convocar a nuevas elecciones adelantadas. Así, por un efecto dominó, todo culminó con la masiva votación por Evo Morales y el MAS en las elecciones de diciembre de 2005.



En resumen, todo este proceso y muy particularmente a partir de octubre 2003, pasaron a primer plano dos agendas contrapuestas:

a) La “Agenda de octubre de 2003”, llamada así por el levantamiento de la ciudad de El Alto en ese mes y apoyada por el occidente andino empobrecido. Incluye ante todo la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que implica cambios profundos a partir de una democracia más directa, la construcción de un Estado intercultural, con mayor rol social.

b) La “Agenda de junio de 2004”, fecha de un cabildo convocado por las elites oligárquicas de Santa Cruz. Su punto central son las “autonomías” departamentales vinculantes, que implica un referéndum sobre el tema y la elección directa de los prefectos departamentales.

III. EL GOBIERNO DE EVO MORALES, EL MAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Llegadas las anunciadas elecciones del 4 diciembre de 2005, se tuvo por primera vez un claro vencedor por mayoría absoluta: Evo Morales y el MAS, que lograron el 54% de los votos válidos y una mayoría semejante en diputados, pero sólo un 44% en el senado (por tener un mismo cupo de 3 por departamento). Se mostró así el deseo mayoritario por un cambio real. Sin embargo, en las elecciones simultáneas de prefectos, sólo tres de los nueve electos fueron del MAS (Oruro, Potosí y Chuquisaca), mostrando el peso que a este nivel tienen los liderazgos departamentales con diversas tendencias, tanto en la amazonía, el oriente y el chaco como en espacios fuertes del MAS, como Cochabamba y la ciudad de La Paz.

Lo que más llamó la atención nacional y mundial fue la asunción de un indígena aymara –Evo Morales– a la presidencia del país, y con ese amplio margen de votos. Con ello se inicia un acceso mayor de indígenas



y campesinos a cargos fundamentales del Estado, aunque las estructuras de la misma aún siguen coloniales.

El nuevo gobierno ha dado una alta prioridad a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, cuyos miembros fueron elegidos el 2 de julio de 2006, con resultados bastante equiparables a los de diciembre de 2005.

El MAS gobernante tiene un perfil múltiple, que articula diversas perspectivas del movimiento social boliviano, como el movimiento indígena, originario, campesino, popular con sus dimensiones de clase social y étnico cultural. Todo ello, en torno a un gran movimiento social que además aglutina a las izquierdas que habían quedado fuera de juego político desde 1985. Estos énfasis, incluidos el de construir una sociedad plurinacional, se combinan con una nueva idea de Estado social y comunitario fuerte.

En la dimensión social y clasista, los nuevos gobernantes han dado alta prioridad a su relacionamiento con los movimientos sociales de los diversos sectores, pero sobre todo con las indígenas, campesinas y populares urbanas. Esto es lo que subyace en la caracterización del MAS como un “Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos” y en otras instancias como el “Estado Mayor del Pueblo”.

En sus primeros pronunciamientos el nuevo gobierno ha expresado más voluntad política que los precedentes para transformar la actual estructura socio-económica colonial y neoliberal. Desde un principio dieron algunas señales a favor de los más desfavorecidos, como rebajar sus propios sueldos y aumentar el de los maestros y trabajadores de salud, en un porcentaje superior a los de los gobiernos anteriores, y más tarde aumentaron también el salario mínimo nacional. Al nivel más estructural se pretende emprender el plan de redistribución de latifundios



improductivos en tierras del oriente, la amazonía y el chaco, y que tiene fuerte oposición de los grupos de poder oligárquico asentados en las regiones indicadas.

En su plan y metas del desarrollo económico, se enfatiza ampliar la base estructural productiva y fomentar las pequeñas empresas productivas urbanas y rurales, además de de fomentar otras formas de economía (como la comunitaria y de los ayllus) vigentes en las comunidades indígenas y campesinas del país.

Ha sido fundamental en toda esta etapa la nacionalización de los hidrocarburos, dictada el 1º de mayo de 2006 y cristalizada mediante la firma de nuevos contratos con 10 empresas transnacionales el último día del mes de octubre. Aparte del renovado apoyo popular y político que la medida suscitó, su efecto práctico más inmediato es el aumento significativo de ingresos por impuestos y por nuevos precios de exportación, logrados ya con Argentina pero que causaron duros forcejeos con el Brasil, por afectar a su empresa privada-estatal Petrobras.

En estas circunstancias, el gobierno de Evo y el MAS se alineó con quienes desean cambiar el modelo neoliberal y los intereses de los grandes poderes económicos del imperio. Evo y su equipo se siente muy a gusto con Castro de Cuba, con Chávez de Venezuela y Kirshner de Argentina y busca mantener buenas relaciones con el Brasil de Lula y el Chile de Bachelet. Además de Ortega en Nicaragua y Lugo en Paraguay. Es decir, con toda aquella parte de Latinoamérica menos dócil a la hegemonía imperial de los Estados Unidos. Ha sido dura y persistente su oposición a la política de total erradicación de la hoja coca de este país – narcotráfico cero, si; coca cero, no– y al ALCA y al TLC con Estados Unidos, pese a que hay cautelosos acercamientos en busca de algún acuerdo para no dejar colgados a numerosos productores de tejidos, joyas, etc. que venden sobre todo a Estados Unidos.



IV. EL GRAN ESCENARIO DE LA REFUNDACION DE BOLIVIA: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

1. LOS PRIMEROS PASOS

El antecedente más importante para llegar a demandar una Asamblea Constituyente fue la Marcha Indígena de los pueblos de la amazonía, el oriente, el chaco y los pueblos andinos, en mayo de 2002 (poco antes de las elecciones nacionales de junio de aquel año), titulada "Por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales". Esta fue la primera movilización indígena directamente orientada a conseguir la convocatoria para una Asamblea Constituyente. Sus principales protagonistas eran los del llamado "Bloque Oriente" y formado por indígenas amazónicos, orientales, chaqueños, colonizadores andinos y otros campesinos no indígenas, a los que durante esa marcha se unió el Consejo Nacional de Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ) de la región andina.

Es significativo que estos pueblos indígenas minoritarios, que no habían participado en las estructuras del Estado, demostraran mayor vigor para forzar un cambio radical de la Constitución. No lograron su objetivo de inmediato, pero sí que se promulgara una ley de necesidad de reforma de la Constitución, que luego facilitaría los cambios parciales introducidos por Mesa en febrero 2004 y, de ahí, la Convocatoria a la Asamblea Constituyente en marzo de 2006.

Aquel sueño de los pueblos indígenas y campesinos, está ahora en el corazón del debate nacional entre sus principales propugnadores, y algunos grupos contrarios y conservadores. Como dijimos, convocar a la Asamblea Constituyente fue uno de los acuerdos de junio de 2005, como parte de la agenda lograda cuando el presidente Mesa se sintió forzado a renunciar. Aquel acuerdo incluía, el compromiso de llevar a



cabo en un mismo acto electoral las demandas centrales de convocar a la Asamblea Constituyente y el Referéndum autonómico.

El primer acto del nuevo Gobierno de Evo Morales y el nuevo Parlamento instalado el 22 de enero de 2006 fue convocar a ambos eventos para una misma fecha. Después de largos y enconados debates entre partes, el tenor de la doble convocatoria fue promulgado el 6 de marzo del citado año.

Ambos temas fueron llevados a las urnas en julio de 2006, con un nuevo triunfo del MAS, que mostraba de nuevo la gran fuerza de la región andina sobre la llamada “media luna” de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

En la elección de constituyentes del 2 de julio de 2006, el MAS consiguió un 51% del voto, por mayoría absoluta en todos los departamentos andinos más —por primera vez— la primera mayoría en Santa Cruz y en todo Tarija, y 137 (o 54%) de los 255 curules de la Asamblea Constituyente. Pero no lograron los dos tercios que les habrían dado pleno control de la Asamblea. Más aún, en base a la distribución de mayorías y minorías acordadas para la Ley de Convocatoria, aun ganando en todas las circunscripciones electorales⁵ el vencedor quedaría por debajo de los dos tercios, debiendo para ello hacer alianzas con partidos derechistas y asociaciones ciudadanas menores. La fuerza de “oposición”, denominada PODEMOS del expresidente derechista Jorge Quiroga, alcanzó apenas

⁵ En las 70 circunscripciones locales (antes llamadas “ uninominales”), el vencedor lograba dos constituyentes, uno varón y otra mujer, y la primera minoría un(a) tercer(a) constituyente, sumando un total de 210 elegidos. En cambio, en las 9 circunscripciones departamentales, el vencedor sólo lograba 2 curules (varón y mujer) y los otros 3 se repartían de a uno entre las tres siguientes minorías. Por tanto, si un partido ganara en todas las circunscripciones, tendría sólo un 62% de los constituyentes. Sólo si una minoría elegible ni siquiera alcanzara el 5% de los votos de su circunscripción, la primera e incluso la segunda mayoría podrían lograr un nuevo constituyente.



el 15% en la elección de constituyentes. En cambio surgieron una serie de fuerzas políticas menores, gracias a que la gran mayoría de los constituyentes eran elegidos en circunscripciones locales.

La Constituyente se inauguró el 6 de agosto de 2006 en medio de un extraordinario desfile ciudadana en que se resaltó el gran conglomerado de aproximadamente 36 pueblos indígenas y campesinos de toda Bolivia. Sin embargo, transcurrido tres meses, el proceso va a paso lento en aprobar los artículos de su Reglamento:

Sin embargo, el primer artículo fue aprobado por mayoría absoluta. Es decir, aquella que declara que la Asamblea será originaria o refundacional y plenipotenciaria. En otras palabras, estará sobre los otros poderes constituidos. Pero este mismo artículo señala que mientras dure la Asamblea Constituyente se respetará los actuales tres poderes del Estado constituidos.

Este carácter originario fundacional y con plenos poderes ha despertaba la gran susceptibilidad de los sectores oligárquicos de la "media luna", que se ven amenazados en perder sus privilegios políticos y económicos, como las enormes latifundios en sus manos, y se aferran a argumentos estrictamente jurídicos como el respeto estricto a la actual Constitución Política del Estado colonial.

2. LA PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO DE ESTADO Y SOCIEDAD

El colonialismo había iniciado un régimen racializado y con una sociedad impuesta sobre la otra: la "república" de españoles y la "república" de indios, con una obvia y humillante colonialidad de la segunda a la primera (Quijano 1992). Pero también un cierto reconocimiento de la segunda, a través de un implícito contrato de "respeto" a sus territorios a cambio de tributo y mit'a (Platt 1982).



Esta colonialidad del poder se deterioró a fines del siglo XVIII, motivando los grandes levantamientos de 1780. Ya en época republicana, en la segunda mitad del siglo XIX con el ataque frontal a los ayllus y comunidades, se re-instauró una relación asimétrica con “ciudadanos”, en un grupo, y una “indiada” desestructurada y no reconocida, en el otro. Seguían siendo dos repúblicas pero ya sin contrato implícito. El “mejor indio” era el peón de hacienda sin tierra propia, porque tenía que aprender de su patrón q’ara o “blanco”.

Desde entonces y muy particularmente en todo el movimiento indígena de los caciques apoderados de los años 1912 y 1952 que citamos arriba (THOA 1984 y Mamani 1991), la permanente protesta india tuvo dos fuentes: la defensa de sus territorios, mediante títulos y el pleno acceso a la educación. En ambos frentes estaba implícito el tema de la búsqueda de construir una nueva ciudadanía como un hecho político decolonial (Walsh 2005).

Con la revolución de 1952, comenzó a resquebrajarse algunas formas de colonialidad. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apostó por el camino liberal de la uniformización del Estado y la sociedad mestiza, transformando retóricamente al indio en campesino, reconociéndole la propiedad privada de una parcela, el derecho a la educación, y el “voto universal”. Fueron importantes avances, pero la tarea quedó inconclusa y el colonialismo internó continúo.

La consecuencia lógica de todo el discurso precedente, es la propuesta de que Bolivia debería re-fundarse como un Estado plurinacional e intercultural. Esta formulación apareció por primera vez en un documento de la Confederación Sindical Única de



Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1983, como un planteamiento central de la tesis política de su II Congreso⁶. Pero propuestas más recientes, como la Asamblea de Nacionalidades, siguen apuntando a lo mismo.

Al hacer esta propuesta entendemos que se desea construir un Estado Unitario a partir de la diversidad de culturas -pueblos indígenas y originarios- y regiones que lo componen. Al hablar de la Asamblea de Nacionalidades como "instrumento político", se plantea que este respeto debe pasar también por alguna forma de organización política a partir de esas identidades. Esta diversidad ya no es vista como un obstáculo a ser eliminado, sino más bien como un constituyente fundamental del Nuevo Estado Unitario social de Derecho Plurinacional planteada en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano (2007), que no es otra cosa que la apuesta por un Estado intercivilizatorio.

En Bolivia los sectores criollos y mestizos son una minoría dominante que en sí misma no constituye una nación si no es invocando a una densidad histórica que necesariamente se engarza, por lo menos discursivamente, con un período prehispánico (Reinaga 1970). Como mínimo, debe enfatizar el momento anti-hispánico, como momento fundacional de la república y, de hecho, los libertadores apelaron entonces con frecuencia a la época inca y precolonial.

Sin embargo, estos sectores criollos y mestizos han impuesto su visión cultural a toda la nación, o para decirlo provocativamente, al conjunto de naciones que conforman la Bolivia plurilingüe y

⁶ "Queremos... la construcción de una sociedad plurinacional que, manteniendo la unidad de un estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones aymara, quechua, tupi-guaraní, ayorecode y todas las que la integran... (Un) Estado Plurinacional y Pluricultural que agrupe a las naciones aymara, quechua... respetando sus diferencias"(CSUTCB 1983).



multicivilizatorio. Más aún, el mestizo aceptado es el que, a pesar de sus orígenes, más se acerca a los modos culturales del “blanco”.

Por otro lado, aunque sectores medios urbanos y hasta sectores proletarios más urbanizados, niegan con frecuencia su identidad y origen aymara, quechua o indígena en general, e incluso mantienen pautas de discriminación en su relación con los indígenas; están más ligados culturalmente a lo indígena que la minoría acríticamente occidentalizada. Además, el proceso actual está demostrando que la recuperación de su identidad, emprendida con vigor inicial por los aymaras, se expande a la propia clase obrera a través de la presencia katarista e indianista y campesino-indígena en la Central Obrera Boliviana (COB) y de la presencia de los pueblos originarios del oriente en el escenario nacional.

Hay, pues, una maduración para ir imaginando el país de otra manera. En el fondo, se trata de plantear una re-fundación del país que a la vez articule las distintas civilizaciones indígenas y sociales, sin negarlas y con un sentido de equidad. Siendo que este no es el único planteamiento, lo consideramos el de mayor envergadura y viabilidad.

3. A MANERA DE CONCLUSIONES. LOGROS DEL GOBIERNO DE EVO MORALES

UN PRINCIPIO FILOSÓFICO GENERAL

La búsqueda del Vivir bien (en base a categorías de *Qamaña* en aymara, *Kawsay* en quechua o *Ñande reko* en guaraní) y no Vivir mejor. Se busca contribuir a forjar un mundo justo, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico con la naturaleza para el *Vivir bien* de todos los pueblos a nivel mundial. Decimos “vivir bien” porque no aspiramos a “vivir mejor” que los otros. Nosotros no creemos en la concepción lineal y acumulativa del progreso y el desarrollo ilimitado a costa del



otro y la naturaleza. Tenemos que complementarnos y no competir. Debemos compartir y no aprovecharnos del vecino. *Vivir bien* es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra o *Pachamama*.

EN LO ECONÓMICO: LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

La "guerra del gas" de octubre de 2003, constituye la expresión nacional más nítida de los bolivianos para enfrentar el proyecto antinacional del régimen neoliberal sobre uno de sus principales recursos naturales. Esta firme decisión del pueblo boliviano permitió recuperar el control de sus hidrocarburos, entregadas sistemática y arbitrariamente a propiedad del interés internacional.

El pueblo boliviano obligó a que se convoque a un Referéndum nacional para decidir sobre el futuro de los hidrocarburos en Bolivia. En 18 de mayo de 2004, los bolivianos dijeron sí a la "recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo" a favor del Estado, la refundación de la YPFB, su participación en toda la cadena productiva y la recuperación de las acciones de los bolivianos en las petroleras capitalizadas.

Con la legitimidad lograda en las urnas, el gobierno de Evo Morales ejecutó el mandato del pueblo y nacionalizó los hidrocarburos del país, recuperó la propiedad, posesión y el control total y absoluto de éstos a favor del Estado con el Decreto Supremo 28701 del 1º de mayo de 2006.

Esta nacionalización no fue confiscatoria, sino que devuelve al Estado la propiedad y usufructo del gas y su comercialización. En este sentido, se obró de manera responsable que regulariza la situación de las empresas petroleras en Bolivia al obligar a una nueva regulación contractual,



bajo los intereses del Estado y Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (Ministerio de Hidrocarburos y Energía 2007).

EN LO SOCIAL

Dos bonos son los que tienen mayor impacto social. Dirigido a dos sectores importantes pero desatendidos en los últimos años, como ser los niños y los ancianos. El primero es el Bono “Juancito Pinto” y el segundo el Bono “Dignidad” dirigida a la tercera edad.

El bono “Juancito Pinto” es un incentivo de 200 Bs (aproximadamente 30 dólares) anuales a los niños y niñas que cursan el ciclo primario en escuelas fiscales de todo el país y es una forma de apoyar la permanencia de los menores en el sistema educativo.

El bono “Dignidad” es la renta vitalicia a la vejez, que trata de paliar a 700. 000 personas en toda Bolivia con 200 Bs mensuales. El grueso de esta población es la que nunca ha accedido a ninguna forma de renta y en gran medida son personas de sectores indígenas, campesinas y sectores populares del país. Ambos bonos se pagan con las utilidades que ha generado la nacionalización de los hidrocarburos.

EN LO POLÍTICO

A pesar de las dificultades encontradas por la Asamblea Constituyente, éste sesionó a lo largo de 18 meses y aprobó la Nueva Constitución Política del Estado. Por primera en la historia de Bolivia todos los sectores sociales fueron partícipes de discutir y diseñar el nuevo modelo de Estado y sociedad para Bolivia. Si se logra cristalizar la Nueva Constitución Política del Estado mediante un Referéndum de consulta al pueblo se habrá cristalizado jurídicamente los cambios en democracia, la apuesta más importante del gobierno de Evo Morales y el MAS.

BIBLIOGRAFIA

ALBÓ, Xavier. 2002. *Pueblos indios en la política*. La Paz: Cipca y Plural editores.

ARZE, René. 1987. *Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco*. La Paz: Ceres.

CONDARCO MORALES, Ramiro. 1982. *Zarate el "Temible" Willka*. La Paz: Imprenta renovación.

CONTRERAS BASPINEIRO, Alex. 2005. *Evo Morales. Una historia de dignidad*. La Paz: Ecos.

CHOQUE, Roberto y Esteban Ticona. 1996. *Sublevación y masacre de 1921. Jesús de Machaca: la marka rebelde*. La Paz: Cipca-Cedoin.

CSUTCB.1983. Tesis política y estatutos. CSUTCB. La Paz.

VILLCA, Juan de la Cruz. 1991. *No podemos rezar lo que no es nuestro*. Por una Ley que unifique a los pueblos originarios de Bolivia y Awiayala. En Informe Rural. La Paz, CEDOIN 45:5.

VILLCA, Juan de la Cruz. 1994. Los campesinos exigen: la COB debe cambiar. En Presencia. 20/III/94.

HURTADO, Javier.1986. *El Katarismo*. La Paz: HISBOL.

DEMELAS, Marie Daniela. 1984. Comentario sobre la reedición del "Zarate Willca" de Condarco Morales. En Revista Historia boliviana IV/2. Cochabamba.

PLATT, Tristán. 1982. *Estado boliviano y ayllu andino*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.



MAMANI C., Carlos. 1991. *Taraqu 1886-1935: Masacre, guerra y "Renovación" en la biografía de Eduardo L. Nina Qhispi*. La Paz: Aruwiyiri

NINA QUISPE, Eduardo. 1932. *De los títulos de composición de la corona de España. Composición a título de usufructo como se entiende la excensión revisitaria. Venta y composición de tierras de origen con la corona de España. Títulos de las comunidades de la República. Renovación de Bolivia. Años 1536, 1617, 1777 y 1925*. s.p.i. La Paz.

RIVERA, Silvia. 1984/2003. Prefacio a *Oprimidos pero no vencidos*. Luchas del campesinado aymara y quechua 1900-1980. Yachaywasi-Aruwiyiri: La Paz.

REINAGA, Fausto. 1970 (2001). *La Revolución india*. La Paz: Pib.

REPÚBLICA DE BOLIVIA. Asamblea Constituyente de Bolivia. 2007. *Nueva Constitución Política del Estado*. Aprobada en detalle. Oruro, 9 de diciembre de 2007. La Paz.

REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ministerio de Hidrocarburos y energía. 2007. *Nacionalización en el siglo XXI*. 111 años de historia petrolera en Bolivia. La Paz.

QUIJANO, Anibal. 1992. Colonialidad y modernidad-racionalidad. En *Los Conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas*. Heraclio Bonilla, compilador. Santa fe de Bogotá: Tercer mundo editores/ FLACSO Ecuador/Libri Mundi. Pgs. 437-447.

THOA. 1984. *El indio Santos Marka T'ula, cacique principal de los ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la república*. La Paz: THOA-UMSA.

TICONA ALEJO, Esteban. 1996. *CSUTCB: Trayectoria y desafíos*. La Paz: CEDOIN.



TICONA ALEJO, Esteban. 1989. Algunos antecedentes de organización y participación india en la revolución federal: los apoderados generales, 1880-1890. En *Temas Sociales* (La Paz: UMSA) 14: 113-142.

TAPIA, Luciano (Lusiki Qhispi Mamani). 1995. *Ukhamawa jakawisaxa. Así es nuestra vida*. Autobiografía de un aymara. La Paz: hisbol.

TICONA ALEJO, Esteban. 2000. *Organización y liderazgo aymara. La experiencia indígena en la política boliviana. 1979-1996*. La Paz: Universidad de la Cordillera-Agruco.

TICONA ALEJO, Esteban. 2002. *Memoria, política y antropología en Los Andes bolivianos. Historia oral y saberes locales*. La Paz: Agruco-Plural-Carreras de antropología-arqueología.

VILLCA, Juan de la Cruz. 1992. *Propuesta para la discusión en las bases*. En Convocatoria 1a. Asamblea de Naciones Originarias y del Pueblo. La Paz: CSUTCB.

VILLCA, Juan de la Cruz. 1995. *La marcha nacional campesino-cocalera en el relato de Juandela*. CSUTCB. Oruro.

WALSH, Catherine. 2005. *Pensamiento crítico y matriz (de) colonial. Reflexiones latinoamericanas*. Introducción. Quito: Abya Yala-UASB.





LA CONCEPCIÓN DE UN NUEVO PAÍS EL CASO BOLIVIANO







LA CONCEPCIÓN DE UN NUEVO PAÍS - EL CASO BOLIVIANO

ANTONIO PEREDO LEIGUE

Bolivia, como república, acaba de cumplir 183 años. Estos tres años, desde 2005, han sido objeto de la atención mundial. Todos saben que se está librando, en Bolivia, una lucha violenta que tiene, incluso, episodios cruentos. ¿Ha surgido una nueva clase dominante que trata de eliminar a la anterior, que se resiste a morir? o, simplemente, ¿se trata de una más de las convulsiones que sufre mi país desde que se fundó?

Es muy posible que, la mayoría de los observadores externos, no logren entender los alcances de esta lucha hasta que se resuelva abiertamente. Porque se trata de una confrontación que va más allá de lo circunstancial. Se trata del enfrentamiento entre dos concepciones opuestas de estructura estatal. Una, que está siendo desplazada del poder, pero que se resiste dejar sus privilegios, con todos los medios a su alcance, incluyendo la violencia física. Otra, reclamando una transformación incluyente, asentada en una visión comunitaria que preservaron durante siglos los pueblos originarios y que aún hoy es palmariamente visible en la vida cotidiana de la mayoría. ¿Por qué, una concepción incluyente, una propuesta de mayor participación, un modelo que está permitiendo superar las condiciones de atraso y miseria en Bolivia, enfrenta un rechazo tan violento? ¿Cómo es que, el sector desplazado se resista tan cruel y tenazmente al cambio y hasta pida públicamente capturar la mitad del territorio nacional y convertirlo en un protectorado de la potencia que lo acepte? Tratar de explicarnos las motivaciones de una y otra parte es el propósito de este trabajo.



CARACTERÍSTICAS FUNDACIONALES DE BOLIVIA

El 6 de agosto de 1825, una asamblea constituyente reunida en Chuquisaca, proclama la República de Bolívar. Tanto la fecha como el nombre, son un homenaje al general Simón Bolívar, libertador de cinco países sudamericanos; la fecha recordaba la batalla de Junín, con la que comenzó a agonizar la colonia española en esta parte del continente. Para consolidar esta república de homenaje, Chuquisaca fue rebautizada con el nombre de Sucre, el lugarteniente de Bolívar, que en Ayacucho terminó con la dominación colonial.

Educados en Europa, bajo la influencia de los pensadores liberales, tanto Bolívar como Sucre aspiraban a que, en este suelo, se impusiese los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Con esa concepción se redactaron las constituciones políticas de nuestros países y con las cuales, las élites dominantes, intentaron estructurar sociedades similares a las europeas.

En todos los casos, les fue imposible entrelazar a los grandes sectores de la sociedad que no encajaban en el modelo liberal. En algunos países, optaron por el exterminio de los americanos oriundos y la reducción a regiones apartadas de los sobrevivientes. En otros, como Bolivia, mantuvieron la estructura colonial reservando, el carácter de república liberal, para la “gente libre”, entendiendo por tal a los propietarios, comerciantes, empleados y una parte de los artesanos. El resto, la gran mayoría, siguió soportando el sistema de servidumbre.

De este modo, las costumbres de estos pueblos fueron condenadas como bárbaras; sus creencias, perseguidas como brujería; su vestimenta, despreciada y su lenguaje prohibido o, cuando más, tratado como dialecto.



Sin embargo, sobre ellos recaía el imperio de una legislación extraña y opuesta a las normas con las que se regían. Bastará un ejemplo para explicar esta distorsión normativa. Por razones de conveniencia, la colonia española preservó la comunidad indígena que, de alguna forma se mantuvo durante los primeros años de la república. Hacia mediados del siglo XIX, los criollos y mestizos convertidos en clase dominante, al producirse una drástica merma en la extracción de minerales, volcaron su atención al dominio de la tierra. El gobierno promulgó una norma conocida como “ley de ex vinculación” para sustraerles la propiedad ancestral a los pueblos oriundos. La ley establecía un plazo para que, las comunidades, tramitaran el reconocimiento oficial de sus tierras. Al no tener instrucción formal, pues las escuelas les estaban vedadas, y no haber sido difundida la ley, llegó el plazo sin que ninguna comunidad hubiese conocido tan infame obligación. Recién entonces aparecieron las autoridades que, con fuerza pública por delante, desalojaron las tierras que, entonces, pasaron a manos de la clase dominante.

Se comprenderá claramente que, la normativa traída de Europa regía para los pueblos indígenas en cuanto a obligaciones se refiere, pero no respecto a los derechos que supuestamente tenían como personas. ¿Cuáles eran los derechos? La ciudadanía, es decir, el derecho de pertenecer a Bolivia y ser protegidos por el Estado, no les correspondió; manteniendo el sistema feudal, eran siervos del señor que se había apropiado de sus tierras, con todas las características de aquel sistema hacía tiempo abandonado en Europa. Carecían también del derecho a votar; de hecho, hasta 1956, en Bolivia sólo votaban los varones mayores de 21 años, que hubiesen prestado servicio militar, que supiesen leer y escribir, tengan domicilio conocido y una renta mínima. Por cierto, el servicio militar era obligatorio incluso para los comunarios, pero esto por sí sólo no les daba ningún derecho.



Las guerras, de las que tuvimos tres a lo largo de la república, los convertía en soldados de primera línea. Si tenían suerte, volvían a su condición anterior, tal vez portando una medalla al mérito sin mayor significación.

Es bueno, aquí, hacer una reflexión. En mi exposición, no he hecho ni haré uso de referencias a historiadores, legisladores o pensadores que avalen mis afirmaciones. Sin embargo, y creo que sería una falta de respeto hacerles un listado de autores, bastará que ustedes acudan a cualquiera de los escritores que ha revisado la historia de Bolivia, para confirmar cualquiera de estos asertos.

Tan faltos de derechos se mantuvieron los pobladores oriundos de Bolivia que, hasta mediados del siglo XX, los latifundios o fincas como se les nombraba, se vendían con valor agregado: el número de colonos que trabajaba esa tierra en beneficio del patrón. Por supuesto, el colono tenía una familia que cumplía también labores de servicio, a cambio de todo lo cual recibía la concesión de una parcela de tierra (sayaña, en lengua nativa) que podía cultivar para su beneficio en tanto se mantuviera en servicio. No está demás decir que, el patrón, podía expulsarlo con cualquier pretexto, sin reconocerle ninguna indemnización.

Seguramente no estoy diciendo nada nuevo para ustedes. En buena parte de los países latinoamericanos, aún hoy, se mantienen estas prácticas muy cercanas a la esclavitud.

LA INCONSISTENCIA NORMATIVA

En Bolivia, la sustitución de la colonia por la república criolla, tampoco significó un cambio en la estructura económica. La portentosa riqueza que generó el cerro de Potosí impuso rígidas regulaciones para impedir el desarrollo de cualquier tipo de producción en la región,



administrativamente definida como Audiencia de Charcas. Excepto la agricultura, estaba prohibida cualquier industria. Esa región, actualmente Bolivia, estaba obligada a explotar sus recursos naturales, llevarlos hasta la metrópolis, a cambio de lo cual recibía los artículos de consumo. La república no cambió el sistema. Tampoco le convenía hacerlo a la nueva potencia que, bajo otra figura, dominó esta parte del continente.

Eso explica que la aplicación de los principios liberales en la estructuración de la república, no educó a una mayoría de la población en tal normativa. No hubo ninguna clase de apertura. Los grupos dominantes mantuvieron al país en condición de reducto para su exclusivo beneficio y, en consecuencia, se fueron debilitando ante poderes externos a donde llevaban sus riquezas y buscaban asentarse sin dejar nada para la tierra que explotaban.

La normativa liberal no funcionó ni siquiera para el sector que se movía alrededor del poder. A lo largo de 180 años son muy pocos los gobiernos que, habiendo sido elegidos, concluyesen su mandato; casi la mitad de los presidentes fueron producto de un asalto armado y, otra parte, resultado de acuerdos artificiales entre intereses económicos y políticos. Nueve de cada diez personas no tenían ninguna intervención en estos juegos de poder.

Pero si bien puede asumirse que tales prácticas se han dado en otros países, en Bolivia iba más allá el incumplimiento de las leyes. Un hecho evidente es la evasión de impuestos. Los grandes empresarios – grandes, en la relatividad de un país empobrecido como es el mío- no pagaban impuestos. De hecho, el sustento del tesoro de la nación durante el primer siglo de vida republicana, fue el impuesto a la tierra. Hay que tomar en cuenta que, la principal fuente de enriquecimiento de la clase dominante, era la explotación minera. No lo eran la agricultura, la ganadería o la producción forestal.



La consecuencia ideológica de ese estado de cosas, ha sido la falta de una conciencia nacional. ¿Qué significa esto? Los grupos de poder consideraron siempre que Bolivia era tierra de explotación, no su patria; buscaban tener una nacionalidad exterior e imitar costumbres traídas de fuera, cuando no instalar su residencia en otros países. Los sectores medios de la población, se afirmaron en el regionalismo resaltando sus características provincianas por encima de cualquier rasgo nacional. Sólo los sectores pobres y marginados tenían concepto de nación, talvez en términos gruesos, quizás de forma simplista pero, de todos modos, base esencial de pertenencia a su país.

LA FORMACIÓN DEL ESTADO

Así fue que, ya cuando finalizaba el siglo XIX se dio el primer intento de construir Estado en esta república que, durante sus primeros decenios, estuvo gobernada por caudillos militares, muy pocos de los cuales tuvieron una visión productiva. Es que, al fundarse Bolivia, no había una clase dominante. Los integrantes del nuevo poder, apenas eran funcionarios coloniales o, cuando más, comerciantes que se enriquecieron llevando y trayendo mercadería de Lima, la capital virreinal, a Buenos Aires, la ciudad republicana, y viceversa. El sentido de nación les era absolutamente ajeno.

La guerra del Pacífico, que dejó a Bolivia sin acceso propio al mar obligó, a los grupos de poder, a considerar la formación de un Estado nacional. El Partido Liberal, creado entonces, cuando el liberalismo ya había cumplido su rol en las otras repúblicas del continente, se encargó de esta tarea, en representación de una nueva clase que surgía en razón de una nueva explotación minera: el estaño.

Para hacerlo, sin embargo, esa nueva clase pactó con la decadente oligarquía no sólo respetando sus privilegios, principalmente la servidumbre



como forma de explotación agrícola, sino que emparentándose con ella. A cambio, la oligarquía criolla se avino a seguir sustentando el tesoro fiscal. Los empresarios mineros pagaron impuestos reales, aunque nunca suficientes, recién en el segundo decenio del siglo XX.

Fue en ese momento que hubo otro intento de consolidar el Estado. Pero, los gobernantes se enfrentaron a un dilema: la definición de las fronteras dentro de las cuales debía estructurarse ese Estado, un siglo después de su creación. Casi sin molestias y como producto de acuerdos, fueron recortando la extensión territorial de Bolivia. Hacia el norte lo mismo que al sur, al oeste y al noroeste, miles de kilómetros, no sólo desconocidos sino también ignorados fueron abandonados en beneficio de los países vecinos. Algunas guerras han tenido un impacto nacional, aunque por lo general se impuso un resignado achicamiento. La pérdida del litoral marítimo recién comenzó a tener un impacto concienical a mediados del siglo pasado. La guerra del Chaco, con el Paraguay como contendiente, formó otra conciencia: la del derecho de los sectores marginados, convocados para guerrear, pero nunca para decidir.

Hasta el término de esa guerra (1935) la política fue privilegio del grupo dominante. Aunque llegaron las ideas socialistas y hasta se fundó un Partido Obrero Social Demócrata Boliviano, sólo al retorno de los combatientes surgieron los partidos de corte popular. Los propios militares sintieron ese impacto y, como en Chile o Brasil por esa misma época, se dio un nacionalismo de corte social. De aquella época proviene una Constitución que incorpora el concepto de beneficio social, el derecho a la organización y a la huelga obreras. De entonces también provienen la creación del Ministerio del Trabajo como instancia de apoyo a los trabajadores, no de intermediación entre el capital y el trabajo y, con mayor proyección, la Ley General del Trabajo, considerada hasta hoy como una de las más avanzadas en el continente. Por supuesto, su cumplimiento, ha tenido violentas oscilaciones.



ANTONIO PEREDO LEIGUE

Pese a estos avances en el terreno de los derechos legales, la apropiación de la riqueza seguía sin variaciones. Fue tan grande esta acumulación que llevó a la nómina de los diez personajes más ricos del mundo a Simón Patiño, dueño de la mayor explotación de estaño en Bolivia. Con Aramayo y Hochschild formó el trío que era conocido como “Barones del Estaño”; su representación política, que tenía injerencia en todos los gobiernos, era motejada como “rosca”.

Bajo tal égida se hizo el gran negocio de la metrópolis, el enriquecimiento de los barones y el empobrecimiento del país. El estaño y el caucho, se vendieron, a Estados Unidos, a lo que irónicamente se llamó “precios de la libertad”, fijos en niveles muy por debajo de la cotización internacional, dizque como contribución de los aliados a la guerra contra el nazismo. Aquella fue la última aventura de los barones y la rosca.

Arribamos así a mediados del siglo pasado, sin un Estado consolidado en ningún sentido. Un millón de kilómetros cuadrados poblados por apenas tres millones de personas con menos del 20% en las ciudades y un producto interno bruto que no alcanzaba a 500 dólares anuales per capita. No era un país; era una factoría.

LA REVOLUCIÓN NACIONAL

Es natural que, los acontecimientos que se produjeron durante ese tiempo: guerra del Chaco, imposición de precios bajos a la producción nacional, conquistas sociales de los trabajadores, represión continua en defensa de intereses externos, se acumularan hasta provocar una abierta confrontación que sólo se resolvería en la ruptura del sistema. Este episodio se conoce, en la historia boliviana, como Revolución Nacional.

En abril de 1952 fue derrocado el régimen que, para entonces, se había entregado al ejército. Durante tres días se libraron combates



cruentos en La Paz y en otras ciudades. Con los soldados disparando a desgano y, finalmente, pasándose a las filas insurrectas, los defensores del régimen debieron abandonar el palacio de gobierno que, de inmediato, fue ocupado por los dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que, esa misma noche, proclamaron la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Por la primera, fueron confiscadas las concesiones que explotaban los barones del estaño y, mediante la segunda, se abolió el latifundio y la servidumbre feudal. Los sectores populares, que habían vencido a las fuerzas armadas, ocuparon los cuarteles, se hicieron de las armas que encontraron y formaron milicias populares que, durante dos años, impusieron un régimen de control armado que garantizó la aplicación de las medidas anunciadas. En los hechos, los trabajadores mineros expulsaron a los directivos extranjeros de las grandes minas y los campesinos ocuparon los latifundios impidiendo la presencia de los propietarios. Legalmente pasaron varios meses y hasta más de un año para que se dictaran las normas de los que, en realidad, ya funcionaba: minas explotadas en beneficio del Estado y tierras distribuidas entre los campesinos.

Para el MNR en el gobierno, la estructura política no podía extremarse. La concepción de sus dirigentes era la organización de un Estado capitalista moderno. Una de sus primeras preocupaciones fue lograr el asentimiento de Washington; para esto, envió una misión de primer nivel que, durante varias semanas, negoció el reconocimiento diplomático de la Casa Blanca. Finalmente obtuvo el beneplácito, a cambio de cumplir condiciones esenciales para Estados Unidos de Norteamérica. Indemnización a los barones del estaño, preservación de las tierras productivas de los latifundios, reorganización del ejército y la policía bajo tutelaje de Washington y otras más.

Aún así, Washington no dudó en “castigar” a los revoltosos bolivianos interviniendo en el mercado internacional del estaño, para



mantener bajos los precios de este mineral, usando las reservas que acumuló con las ventas baratas que le hizo Bolivia. Sabotearon la economía nacional usando nuestro propio estaño. La inflación provocada con éste y otros artificios, fue desproporcionada; el gobierno no estaba preparado para enfrentarla y debió resignarse a aceptar lo que oficialmente se llamó Programa de Estabilización Económica pero que, en el argot popular, se conoció como “Plan Eder”. Era diciembre de 1956, cuando se decretó el plan. Mediante éste, se detuvo la inflación a costa de una total paralización de la economía. Durante casi 10 años, las inversiones productivas fueron irrisorias al punto que, construcciones urbanas no se avanzaron más. Evidentemente, la minería fue la más castigada. De las 44 mil toneladas métricas que se producían durante la Segunda Guerra Mundial, llegamos a un promedio inferior a las 20 mil toneladas. La Revolución Nacional había sido derrotada, aún en su concepción de Estado capitalista moderno.

La aplicación de otros planes, dirigidos a cercenar las conquistas populares y disolver la organización sindical, fue apenas un corolario de este proceso. La dirigencia de ese gobierno, que había comenzado conduciendo una radical transformación de la estructura social, económica y política del país, se acomodó a las circunstancias y se alineó, con bastante docilidad, a las políticas estadounidenses. Las dictaduras militares que le sustituyeron, a partir de 1964, tuvieron la alianza de los cuadros de ese partido.

De la Revolución Nacional se pasó, casi sin transiciones, a la doctrina de las fronteras ideológicas. De hecho, el segundo gobierno de Paz Estenssoro (1960-64) fue cómplice del aislamiento de la joven Revolución Cubana y hasta rompió con Checoslovaquia sólo para favorecer a una empresa norteamericana.

No fue esto, sin embargo, lo más importante. Víctor Paz asumió su segundo periodo, trayendo un programa de reconstrucción y fortalecimiento de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) que,



en términos populares se conoció como “Plan Triangular”. Tres eran los financiadores: USAID, el BID y el gobierno de Alemania Federal y tres eran las etapas en que debía cumplirse. Delegados de quienes ponían los fondos se constituyeron en una super gerencia que determinaba presupuestos, operaciones, destino del personal y todo cuanto se vinculase con el movimiento económico de la empresa. El gobierno, que ya no hablaba de la Revolución Nacional, cumplió las dos primeras etapas, aún a costa de distanciarse aún más de los trabajadores mineros, que constituían la vanguardia del movimiento popular. Es evidente que, el Plan Triangular, no iba a funcionar, si no se cumplía la tercera etapa. Y éste fue el motivo principal del golpe militar que encabezó René Barrientos a fines de 1964.

Pero, ¿cuál era el carácter de ese plan? Reducir la capacidad productiva de la empresa estatal, en beneficio de los privados. De este modo, ya entonces, se iniciaba el proceso de contracción de la intervención del Estado en la economía nacional. Era uno de los ensayos de lo que, años después, se denominó como reajuste estructural o, en términos corrientes, modelo neoliberal.

LA OBEDIENCIA DICTATORIAL

Entre 1964 y 1982, con variantes diversas, Bolivia vivió una larga serie de gobiernos militares que aplicaron la teoría de las fronteras ideológicas y, más que eso, el conocido Plan Cóndor que vinculó criminalmente a las dictaduras militares de ese periodo.

El crecimiento de la deuda externa, pese a la bonanza económica que se produjo en los primeros años '70, castigó duramente a nuestras naciones. El ejemplo de Bolivia, también en este caso, es demostrativo: de algo más de 500 millones de dólares que se debía en 1970, pasamos a 3.500 millones a principios de 1978. Iguales índices se registraron en todos los países de la región.



Para entonces, se había iniciado el éxodo de nuestros habitantes hacia los países vecinos. Es notorio que, la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) haya organizado una repatriación con su par argentino, con resultados nulos, pues los supuestos beneficiarios del programa, volvieron a salir del país. El ingreso de millones y millones de dólares no creó actividad productiva ni empleo, por lo tanto. Sirvió para enriquecer a algunos sectores privilegiados quienes, además, se hicieron propietarios de grandes extensiones de tierra, desalojando a campesinos asentados en ellas.

Creo importante detenerse en las características del Plan Cóndor, ciertamente conocido por el auditorio, pero cuyas particularidades son instructivas. La lucha contra la dictadura involucró a las organizaciones sociales y partidos políticos, excepto claro está a los que participaban del régimen. En consecuencia, la policía política perseguía a dirigentes juveniles, sindicalistas, activistas políticos y hasta gestores independientes que reclamaban contra la represión. Varios sacerdotes y religiosas fueron expulsados del país, por tales motivos. A la mayor parte de los otros les esperaba la cárcel, cuando no la muerte o desaparición forzada. Fue entonces que comenzó a funcionar el Plan Cóndor. Una joven de nacionalidad argentina que, desde niña vivió en Bolivia y su hija de pocos meses, fueron entregadas a la policía federal de ese país y desaparecieron; la nena logró ser recuperada por su abuela nueve años después. Fue con este caso que se formó la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, como sección especial de Madres de la Plaza de Mayo. Dirigentes sindicales bolivianos fueron entregados a la dictadura de Pinochet, quien los residenció en pequeñas poblaciones del sur de aquel país. La policía de otros países, llegó a Bolivia para interrogar a presos políticos y, en más de una ocasión, decidir su destino.

En medio de esa práctica de terrorismo de Estado, Banzer y Pinochet acordaron dar una imagen internacional de entendimiento



diplomático. Restablecieron relaciones diplomáticas, suspendidas desde los primeros años '60 y anunciaron que avanzaban exitosamente hacia una solución a la reivindicación marítima de Bolivia. La ilusión duró poco más de un año y, sin mayores consecuencias, las relaciones entre ambos países volvieron a su anterior estado.

Varios factores, internos y externos, apresuraron la caída del régimen de Banzer en 1978, pero la recuperación de la democracia debió pasar más de una prueba. Hasta 1982, se sucedieron 6 gobernantes militares y 2 civiles. Sobresale, en esa serie, la dictadura de Luis García Meza sustentada por el narcotráfico. Fue en tal etapa, que se construyó la estructura de elaboración de cocaína, organización de las rutas de transporte clandestino y vinculaciones con las mafias que manejan el tráfico de drogas a nivel mundial. Aún hoy día, sigue siendo esa la estructura que mantiene esa actividad ilícita y dañina.

EL NEOLIBERALISMO EN ACCIÓN

La democracia fue, finalmente, recuperada en 1982. Pero la economía estaba gravemente dañada, la sociedad mostraba serias fisuras y la acción política era menos que una esperanza. Durante tres años, un gobierno popular se esforzó por recuperar una situación estable. Sin embargo, el lastre que había dejado la larga etapa dictatorial y las desventajosas condiciones internacionales, complotaron en contra de las iniciativas que, a poco de implementarse, provocaron el agravamiento de la situación. En tales, condiciones, el gobierno sólo pudo tomar medidas desesperadas. Cada una de las cuales, producía el efecto contrario al que se buscaba.

Fue así que, recortando su mandato, ese gobierno debió ceder el paso a los triunfantes partidos del neoliberalismo. Un plan ya preparado de antemano detuvo la enloquecida carrera inflacionaria, que había sobrepasado 20.000 por ciento, a cambio de lo cual se diseñó e implementó



la contracción del Estado al papel de mero facilitador del manejo económico por las transnacionales. En poco más de dos años, el aparato productivo que construyó el Estado a partir de 1952 e incluso antes, fue destruido o vendido en condiciones desventajosas.

Bolivia entró tarde en la aplicación del modelo pregonado, internacionalmente, como la panacea de la pobreza en la que nos habían sumido los anteriores modelos de los estados centrales. ¿Habría que recordar que la influencia de la CEPAL en nuestro continente viene desde los años '50 del siglo pasado? Pero, aunque tarde, se comportó como un alumno aplicado a tal punto que, el consultor que tuvieron los partidos tradicionales para diseñar el modelo e implementarlo, Geofrey Sachs, comentó posteriormente que, Bolivia, cumplió al pie de la letra el modelo pero no supo cómo cobrar la factura a los organismos financieros internacionales. De modo que, el resultado de esa experiencia, que duró veinte años, fue un mayor empobrecimiento de la población, la desestructuración de la sociedad y una sucesión de gobiernos que se mostraron incapaces de emprender un programa nacional.

UN PAÍS DISTINTO

Había un estado de cosas que no podía mantenerse. Ya en 1990, apenas cinco años después de implementado el modelo neoliberal, una marcha indígena proveniente de las tierras bajas, cruzó a pie el país de oriente a occidente exigiendo una asamblea constituyente. Voy a repetirlo, pues parece inexplicable que, los indígenas de las tierras bajas, que en esas regiones poco pobladas son una minoría, reclamaran la elaboración de una nueva constitución para el país. ¿Qué noción de país podían tener esas etnias, a las que ni el poder ni los partidos políticos tomaban en cuenta?, ¿cuál era la motivación que les llevaba a reclamar una reivindicación que podían haber enarbolado los sectores más avanzados del movimiento popular? Parecía que, la imposición



de un modelo tan explotador despertaba conciencias que sociólogos, antropólogos y mucho menos politólogos, ni siquiera sospechaban.

Algunos estudiosos se atreven hoy, no antes, a decir que la remoción que se hizo en 1992, recordando los 500 años del desembarco de Colón en este continente, fue el chispazo que recuperó las ancestrales sabidurías originarias. Pero es un argumento débil. Parece más coherente asumir que, ante el fracaso de las luchas sectoriales contra el modelo neoliberal, las expresiones de culturas frente a las que, el sistema no había creado anticuerpos, como ya los tenía contra los sectores sociales, los partidos de izquierda y las organizaciones insurgentes, fueron tan decisivas que quebraron el espinazo de la estructura neoliberal.

En particular, los sectores indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que habían luchado por sus reivindicaciones, colmaron su paciencia, después de pasar varias veces por el mismo círculo vicioso: demanda, acuerdo de satisfacción, incumplimiento, demanda. Se dieron cuenta, en ese andar por la misma senda recurrente que, el sistema, no iba a permitir nunca cumplir una promesa que iba contra la misma estructura de poder. La conclusión parece lógica: sólo es posible atender los requerimientos y las expectativas de los pueblos indígenas, cambiando la estructura. ¿Cómo hacerlo? Escribir una nueva Constitución Política del Estado.

Durante años, esta reivindicación fue sustentada en solitario por ese sector de los pueblos originarios. Las nacionalidades mayoritarias de quechuas y aymaras centraban su atención en problemas acuciantes referidos a la miseria económica y la pobre educación que recibían sus hijos. Los pueblos de las tierras bajas desarrollaron un amplio espectro de nociones y convicciones sobre dos problemas aparentemente iguales, pero de alcances muy distintos: los temas de la tierra y el territorio.



Se trata de diferenciar un tema, la tierra, como el medio a través del cual se sustenta la familia y se basa el poco o mucho desarrollo económico de la comunidad. El otro tema, territorio, tiene una connotación vital, es la subsistencia misma de la especie humana. El indígena de las tierras bajas, por su misma condición de minoría entre las minorías, valora en mucho el ámbito que habita, constreñido por el avance devastador de los capitales que, reducidos en esa extensa zona del país, se dedican a la explotación extensiva de las tierras que están a su alcance. Si en su avance, como ocurre a diario, encuentra a estos grupos indígenas, simplemente arrasa con ellos como si fuese mala hierba que se desbroza, para preparar un terreno de siembra.

No estoy hablando de nada novedoso. Los indígenas guatemaltecos lo han vivido cruelmente, como lo testimonia la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, cuya familia fue víctima de ese avance criminal. En cada uno de nuestros países hay evidencias demasiado recientes como para que las ignoremos. Además, están plasmadas por esos espléndidos narradores que Latinoamérica parió tan generosamente el siglo pasado.

LOS POBRES SON LOS INDÍGENAS

Las tierras bajas de Bolivia comprenden tres departamentos: Santa Cruz, Beni y Pando, más extensas provincias de otros cuatro departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. En total abarcan más de la mitad del territorio nacional; es decir, más de 600 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, está poblada por una tercera parte de la población total del país.

En ese extenso territorio, los ganaderos ocupan miles y miles de hectáreas. La ley acepta que, por cada cabeza de vacuno, se le otorguen al propietario 5 hectáreas de pastizales. Al contrario,



un campesino y su familia puede ser dotado con dos hectáreas de tierras cultivables, si tiene suerte. No es extraño, pues desde los tiempos bíblicos, el ganadero ha sido favorecido por los poderosos, frente al agricultor.

Apoyado por ese favor, el ganadero avasalla a los campesinos pobres que no tienen a quién quejarse. No busca tierras propias, sino que arrebató las que prepara el agricultor y luego, con el poder de su hato, impone leyes que santifican el despojo. En todas partes hay un severo castigo al que roba ganado, pero nunca he sabido de leyes que castiguen el robo de una cosecha.

No es extraño, por lo tanto, que en nuestra América, el agricultor sea indígena y el ganadero sea criollo descendiente de europeos. La confrontación cultural está ligada estrechamente con la supervivencia. Porque, es cierto que hay grandes empresarios dedicados a la agricultura en las tierras bajas de Bolivia, pero se trata de agricultura para la industria. En Santa Cruz, para poner un ejemplo, en los años '50 se dedicaron al cultivo extensivo de la caña de azúcar, veinte años después se dedicaron al algodón y, actualmente, cultivan soya. La agricultura básica, la alimenticia, ha estado en manos desde siempre de los pueblos originarios.

Pero es en los valles y el altiplano, las tierras altas de Bolivia, donde se concentra el cultivo alimenticio. Pagado a precio de mercado interno, es decir mucho menor que en los países vecinos, esa agricultura ha sostenido un costo de vida muy bajo permitiendo, así, una inmensa fuga de capitales y el rápido enriquecimiento de una élite que no ha tenido ningún interés en plantear el desarrollo nacional.

Está demás decir que, esta condición de desigual distribución de la riqueza se agravó con la implementación del modelo neoliberal desde 1985.



Año 2000: EL COMIENZO DEL CAMBIO

El proceso de entrega de nuestros recursos llegó a un límite inaceptable el año 2000. es curioso constatarlo después de los hechos, pero es así: los sustentadores del sistema no tienen un límite; quieren avanzar cada vez más, hasta que rebasan sus posibilidades. En el caso de Bolivia, la gota que rebalsó el vaso, fue precisamente de agua. La empresa que administraba la distribución de agua potable en Cochabamba, ciudad central de Bolivia, aumentó desproporcionadamente las tarifas. Adujo, después de los reclamos, que era una especie de contribución que los usuarios debían dar para solventar las obras que se requerían para ampliar la provisión de agua. La reacción de la población fue violenta, apoyada por campesinos que declararon una guerra hasta lograr la expulsión de la empresa.

Un bloqueo campesinos en las rutas principales del país le siguió inmediatamente. El sistema creyó salvarse rescindiendo el contrato de la empresa administradora del agua potable y haciendo promesas que no cumpliría. Una especie de tregua se dio durante los dos siguientes años en los que, sin embargo, era evidente que no había posibilidades de seguir manteniendo el modelo neoliberal.

Así lo confirmó la elección de nuevas autoridades en 2002. Evo Morales y el MAS se situaron, entonces, en un segundo lugar que dio al traste con todas las encuestas. La coalición de gobierno apenas pudo mantenerse poco más de un año y debió ceder posiciones. El neoliberalismo había terminado.

Pero, lo importante es que, en ese intenso periodo, las naciones de los valles y las tierras altas, asumieron la demanda de Asamblea Constituyente y la ensamblaron con su reclamación económica, haciéndola de alcance nacional. Era el pedido de nacionalización de los hidrocarburos.



Es bueno desglosar aquí la situación. La recuperación de los hidrocarburos ha sido la base en la que puede sostenerse la transformación del país. Sin ese factor, hablar de un nuevo país, sería simplemente simbólico. Con el sustento de ese rescate económico, que nos ha sacado de la mendicidad en que nos encontrábamos el año 2005, no era posible pensar en una nueva Constitución Política del Estado. Aún así, ustedes lo saben, los sectores que han sido afectados por este proceso de cambio, se oponen tenazmente y con violencia inusitada, a esa transformación.

Pero, ¿cuál es el carácter de ese texto que define las reclamaciones de los pueblos originarios, sin excluir a las poblaciones criolla y mestiza? Todo el análisis a los que les he sometido, tiene el propósito de explicar los alcances diseñados en la nueva Constitución Política del Estado.

El tema central es el reconocimiento de la comunidad. Las constituciones liberales que tienen las repúblicas latinoamericanas, establecen una relación directa entre el Estado y el individuo; es la visión liberal, revolucionaria en la Europa del siglo XIX y que copiamos al pie de la letra, pero que nunca pudo ser aplicada en nuestros países. Perdonen, será mejor que diga: en mi país. Basta recordar que, sólo a fines de aquel siglo pudo estructurarse el Estado boliviano; antes de eso, fue el dominio de feudos que un gobernante militar, sucedido por otro no menos aventurero, lograba someter a ciertas normas, por lo general, caprichosas.

La comunidad es la forma de vida de los pueblos originarios en Bolivia. Debo señalar que, una pregunta incluida en el censo de 2001 consultaba la pertenencia a alguna comunidad originaria; el 65% de la población se reconoció como parte de alguna comunidad. Pues bien, la comunidad es no sólo una relación entre personas, sino un núcleo de acción que ve los problemas internos, sus necesidades, su relacionamiento con el conjunto de la sociedad y con el Estado. También diseña su base económica, mediante un sistema que puede ser primario, pero que ha



permitido la supervivencia de nuestra sociedad, más allá de las percepciones poco sensibles de los grupos de poder que se turnaron hasta el reciente 2005 y que aún siguen golpeando para recuperar sus privilegios.

El reconocimiento de la pluriculturalidad, no es otra cosa que sentar como principio la diversidad de nuestro pueblo en el que existen 36 pueblos originarios de dimensiones muy diversas, además de una gran población mestiza y otros sector criollo. La nueva Constitución puntualiza que, esa heterogeneidad, ha vivido bajo una misma estructura de Estado y debe seguir en tal condición. Por supuesto, el Estado debe cambiar de forma. Las autonomías son una forma de ese cambio, pero éstas tienen distintos alcances. Las autonomías municipales tan antiguas como la propia república, las autonomías indígenas, demanda que dio origen a la Asamblea Constituyente y las autonomías departamentales. No podemos ocultar que hay provincias —es decir, parte de los departamentos- que reclaman también autonomía.

Están entonces, el reconocimiento de la comunidad y la vigencia de la autonomía en, al menos, esos tres niveles. Por lo tanto, los derechos individuales tienen una nueva concepción. Ya no es suficiente enumerar derechos y dejar que éstos se cumplan en la medida de las posibilidades o, más bien, conforme a las condiciones impuestas por los grupos de poder. Por eso, la nueva Constitución, establece derechos fundamentalísimos, que son una obligación ineludible del Estado y que, en términos gruesos, se refieren a los factores básicos de vida. Todos los otros derechos, reconocidos internacionalmente, están consagrados en ese texto, pero los esenciales tienen un carácter de obligación estatal. Seguramente no podrán cumplirse de inmediato, pero el Estado, no este gobierno u otro, sino el Estado, debe planificar para resolverlos.

La propiedad privada está debidamente protegida, en contra de toda propaganda que distorsiona este hecho. ¿Por qué se protege la



propiedad privada? No sólo por el respeto al derecho de las personas, conforme a la cultura europea, sino por las mismas raíces de la comunidad originaria. En ésta, la propiedad privada es la forma de desarrollo de la familia. Es ese desarrollo que permite la selección de los dirigentes comunitarios que, para prestar ese servicio, deben contar con recursos personales, pues la comunidad no les reconoce estipendio, dieta o sueldo alguno. No tiene por qué hacerlo, pues la conducción de la comunidad es un deber de cada miembro en condiciones de hacerlo y, a la vez, es una condición de prestigio.

Los cambios estructurales del Estado se refieren a su relación con la sociedad. Las autoridades elegidas deben estar sometidas al control social. Esto se hará mediante el referendo revocatorio. La iniciativa ciudadana tendrá un carácter social, no individual. Los tribunales de justicia no serán una cuota distribuida por los partidos que copen el parlamento, sino que tendrá el mismo carácter electivo que los otros poderes del Estado. El régimen económico reconocerá la propiedad comunitaria, en la misma forma que reconoce la propiedad privada. Y, sobre todo, se trabajará en la formación de una conciencia social que involucre a quien debe considerarse servidor público, más que mandatario y guardián social más que policía o soldado.

Esta es la concepción por la que abogamos en Bolivia. Una concepción que tiene proyección más allá de las fronteras del país. Es decir, no concebimos que nuestra concepción pueda tener desarrollo pleno, si no somos parte de una comunidad de naciones. Nuestra adhesión a UNASUR, no es retórica; la consideramos una necesidad ineludible del cambio que proponemos. Pero, por supuesto, es un tema que requiere de otro análisis.





LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO POLÍTICO DE CHILE







LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO POLÍTICO DE CHILE¹

CARLOS HUNEUS²

Chile se encuentra en un momento de definiciones como consecuencia del buen desempeño de la democratización y porque los gobiernos han sido controlados por la misma coalición desde el cambio del régimen militar del general Augusto Pinochet (1973-1990),³ la Concertación por la Democracia, formada por el PDC y el PRSD, de centro, y el PPD y el PS, de izquierda. Los logros obtenidos son notorios y se pueden resumir en que la democracia se ha consolidado, los militares están subordinados al poder civil, se han dado pasos muy importantes en el tratamiento a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, con numerosos oficiales que han sido condenados por la justicia por su responsabilidad en los crímenes, y el proceso económico, en términos generales, ha sido positivo, con un crecimiento sostenido, que ha permitido la disminución de la pobreza.

También se ha profundizado el orden político, mejorando su calidad, con reformas constitucionales que han establecido una relación de mayor equilibrio entre el poder ejecutivo y el congreso a través del fortalecimiento del senado, que ha asumido competencias que antes tuvo el presidente, como el nombramiento de altos funcionarios del estado, como los ministros de la Corte Suprema. Se

¹ Este artículo se ha escrito en el marco del proyecto de investigación Fondecyt Nr. 1070868 sobre la presidencia en Chile.

² Profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

³ Lo hemos analizado en nuestro libro Carlos Huneeus, *The Pinochet Regime*. (Boulder, Col.: Lynne Rienner, 2007).



ha modernizado el poder judicial, con una reforma procesal penal que introdujo a los fiscales, un cambio legislativo de enormes dimensiones, que permite al juez concentrarse en fallar los casos sometidos a su consideración, produciendo una enorme habilidad a la labor de los tribunales.

Se han reforzado ciertas instituciones paraestatales, lo cual ha producido una dispersión del poder. Destaca el banco central autónomo, de rango constitucional, que limita el poder del gobierno en la política monetaria y restringe otros ámbitos de la política económica, pues el ejecutivo no puede financiar actividades con empréstitos del instituto emisor. Se ha fortalecido el tribunal constitucional con la reforma constitucional de 2005, que le entregó la totalidad del control de la constitucionalidad de las leyes,⁴ y su competencia se extiende al poder ejecutivo, pues puede declarar la inconstitucionalidad de decretos supremos.⁵ En el 2008 dictó dos sentencias que detuvieron políticas del gobierno: uno fue sobre la píldora del día después, que estaba siendo distribuida por el sistema público de salud según una resolución del ministerio de salud y en agosto del 2008 declaró inconstitucional el préstamo contratado por el ente financiero del Transantiago, el sistema público de transporte público, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar su déficit.

Después de cuatro gobiernos que han tenido un buen desempeño, la Concertación enfrenta serias dificultades para seguir siendo una alternativa de poder en las elecciones presidenciales del 2009. La alternancia del gobierno aparece más cerca que en las tres anteriores elecciones (1993, 1999 y 2005). Las coaliciones de gobierno

⁴ Antes compartía esta labor con la Corte Suprema.

⁵ Antes sólo detener solamente los decretos que trataran materias reservadas a la ley por el constituyente.



no son eternas no solo cuando están formadas por varios partidos, sino también por los altos costos que éstos asumen por ejercer el poder durante un largo tiempo y se impulsaron profundas transformaciones políticas y socioeconómicas.

La Concertación surgió durante el régimen militar como una alianza estratégica de partidos de centro e izquierda con la finalidad de recuperar la democracia, por iniciativa de dirigentes que habían aprendido las lecciones de la crisis y fracaso de la democracia, que colapsó a través de un golpe militar precipitado por el fracaso del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende (PS) (1970-1973). Consolidada la democracia y desaparecido el general Pinochet después de su fallecimiento el 2006 y políticamente desprestigiado a consecuencia de la denuncia el 2004 por el senado de los EE.UU. del hallazgo de millonarios depósitos que poseía en un banco en la capital de ese país, faltan los motivos que justificaron la existencia de la Concertación. Para que continúe siendo una alternativa de poder, los partidos que la integran deben definir una propuesta programática nueva, formulada a partir de una visión crítica de lo realizado, para formular nuevos objetivos a alcanzar, que incluyan enfrentar las falencias y debilidades existentes en el sistema político y en el orden económico.

La actual presidenta, Michelle Bachelet (PS) (2006-2010), encabeza la cuarta administración y es la primera mujer en América del Sur que llegó a la presidencia a través de elecciones.⁶ Han habido diferencias,

⁶ Isabel Martínez de Perón fue vicepresidenta de Argentina, elegida en 1973 con su marido, Juan Domingo Perón, electo presidente y asumió la presidencia luego de su fallecimiento en 1974, siendo derribada por un golpe militar en 1976. Lidia Gueiler fue presidenta de Bolivia durante ocho meses, habiendo asumido, cuando fue derrocado el presidente Walter Guevara Arce, porque ella era presidenta de la Cámara de Diputados y fue derrocada por un nuevo golpe de estado en julio de 1980. Violeta Chamorro fue presidenta elegida en Nicaragua entre 1990 y 1997. En 2007, Cristina Kirchner, esposa del presidente Nestor Kichner (2003-2007), ambos peronistas, fue elegida presidenta en Argentina.



pues mientras los dos primeros presidentes, Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), eran del PDC y fueron elegidos por amplia mayoría en primera vuelta, Ricardo Lagos (2000-2006) y Bachelet pertenecen a los partidos de izquierda de la Concertación, PS/PPD y fueron elegido por un *ballotage*, superando al candidato de la derecha con los votos del partido Comunista.⁷ Hubo, por ende, una cierta alternancia de poder entre los partidos, lo cual favoreció la sobrevivencia de la coalición al permitir a los principales partidos que una personalidad de sus filas fuera presidente de la república.

Esta continuidad constituye una excepción en las democracias de la “tercera ola”,⁸ especialmente en América Latina, pues las primeras administraciones después de los regímenes militares entregaron la presidencia a un candidato de la oposición, elegidos por la ciudadanía para manifestar el rechazo a su deficiente gestión. También es una novedad en la historia de Chile en el siglo XX hasta 1973, pues, con la excepción entre 1938 y 1952, ningún presidente pudo entregar la banda presidencial a un sucesor que fuera de su partido o de la coalición que lo eligió.

En este trabajo se hace un examen de los logros alcanzados por los gobiernos de la Concertación y se examinan las dificultades que enfrenta esta exitosa coalición para seguir siendo una alternativa de poder. Se emplea el análisis crítico porque las debilidades y falencias constituyen sendos desafíos para el desarrollo político de Chile.

⁷ Bachelet había ganado la primera vuelta, el 11 de diciembre de 2005, simultánea con las elecciones parlamentarias, con el 45,95% de las preferencias. Para un análisis de las elecciones, véase Huneus, Carlos, Berríos, Fabiola & Gamboa, Ricardo (eds.) *Las elecciones chilenas de 2005. Partidos, coaliciones y votantes en transición* (Santiago: Catalonia, 2007).

⁸ Usamos el concepto de Huntington, Samuel P. *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*, (Londres: University of Oklahoma Press, 1991).



LOS VACÍOS EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS.

Se destaca merecidamente los logros alcanzados por Chile desde el restablecimiento de la democracia, especialmente económicos, pero también es necesario mencionar sus vacíos y limitaciones, porque todo ello forma parte de la gestión de los gobiernos democráticos. Ha habido un crecimiento económico continuado desde 1990, que ha permitido que millones de chilenos tengan mejores condiciones de vida y se disminuya la pobreza al 13% de la población. La inflación es de un dígito desde hace más de una década y la economía se sustenta en bases relativamente sólidas, aunque la exportación de materias primas sigue siendo predominante. Sin embargo, este proceso económico ha ido de la mano con la existencia de enormes desigualdades, que son económicas, como también sociales y políticas. Las desigualdades económicas fueron calificadas como “escandalosas” por los obispos de la Iglesia Católica en 2005, pero no se han adoptado decisiones para disminuirlas.

Las causas de las desigualdades económicas son profundas y complejas, algunas de las cuales son de carácter político, que se reflejan claramente en las encuestas de opinión. Una de las causas políticas de las desigualdades es la existencia de un débil movimiento sindical que no ha podido presionar por mejores derechos económicos para los trabajadores.⁹ Históricamente Chile tuvo un movimiento sindical débil,¹⁰ con la excepción de finales de los años 60 y durante el gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende, que en ese tiempo fue un actor que complicó el proceso político, antes que favorecer el desarrollo de la democracia. El régimen militar impuso una legislación laboral que debilitó estructuralmente las

⁹ Krugman, Paul, *The Conscience of a Liberal*, (Nueva York: W.W. Norton & Company, 2007).

¹⁰ Angell, Alan, *Politics and the Labour Movement in Chile* (Londres: Oxford University Press para el Royal Institute of International Affairs, 1972). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile* (México: Ediciones ERA, 1974).



bases del sindicalismo, con la proliferación de sindicatos a nivel de las empresas y a través de una política económica que privilegió el capital por sobre el trabajo. Esta arquitectura institucional ha sido en parte modificada por los gobiernos democráticos, introduciendo importantes reformas al sistema económico impuesto por el régimen anterior, pero ha sido insuficiente el cambio en las relaciones capital-trabajo porque no ha tenido mayoría en el senado, aunque también ha influido una baja voluntad política en los partidos y en los gobiernos.

La situación de los de los trabajadores incluso ha empeorado. En 1990 sólo el 19,2% de la fuerza laboral estaba sindicalizada. Esta cifra bajó desde 1995, llegando al 14,5% en 1999, para subir levemente hasta el 15,6% en 2004 y disminuir en los años siguientes, llegando al 14,5% en 2006. Esto tiene como consecuencia que un porcentaje bajísimo de los trabajadores participa en la negociación colectiva para reajustar sus remuneraciones y mejorar las condiciones de trabajo. En 1991 el 10,1% de la fuerza laboral usaba este mecanismo, para bajar posteriormente, alcanzando al 5,6% en 1999, el 4,5% en 2003, el menor porcentaje en toda la democracia, para situarse en un débil 5,4% a finales del gobierno de Lagos. Esta débil organización favorece la continuidad del desequilibrio en los beneficios económicos, con un coeficiente Gini adverso, en el 0.56, que es de los peores del mundo. Este es un dato que refleja una enorme limitación del desempeño de una coalición de centro-izquierda.

La debilidad de los sindicatos se da en un sistema político que se caracteriza por la debilidad asociativa de los chilenos, con una baja participación en las juntas de vecinos, organizaciones de derechos humanos, de protección al medio ambiente y otras. Ello agrava el problema de las desigualdades, porque la agenda pública tiende a ser



influida por los grupos que tienen más acceso a los medios de comunicación, que son las grandes empresas y las organizaciones de empresarios que las representan. Este círculo vicioso de las desigualdades se ha hecho más visible en el último tiempo porque ha habido presidentes de izquierda, que se esperaba hubieran tomado medidas para corregirlas. El presidente Lagos, al final de su mandato, recibió enormes elogios por parte de los dirigentes de las organizaciones empresariales,¹¹ no de los sindicatos. Esto remite a una debilidad programática de la izquierda chilena y al trauma del fracaso del gobierno de Allende, sobre lo cual volveré más adelante.

El proceso político también tiene debilidades provenientes del sistema electoral binominal, impuesto por el régimen del general Pinochet para favorecer a los partidos que lo apoyaron y perjudicar a los de la Concertación porque fue establecido después del plebiscito de 1988.¹² Este sistema obliga a la formación de coaliciones para obtener un escaño, por el alto umbral en votos que requiere para obtener el escaso (33.4%). Por ello impone una competencia entre partidos aliados, desvirtuando el carácter de las elecciones que es entre partidos adversarios. Esto es así porque cada alianza podrá obtener sólo un escaño, pues para elegir los dos necesita duplicar a la lista que le sigue. Esto ha implicado la exclusión del partido Comunista (PC), que no forma parte de la Concertación y que tampoco apoyó la recuperación de la democracia por la vía electoral, aunque el PC ha sido determinante en la elección en segunda vuelta de Lagos y Bachelet. Como la derecha tiene sólo dos partidos - la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional

¹¹ Esto es recordado por la afirmación del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, de que “los empresarios aman a Lagos”.

¹² Gamboa, Ricardo, “El establecimiento del sistema binominal”, en: Huneus, Carlos (compilador), *La Reforma al Sistema Binominal en Chile* (Santiago: Konrad Adenauer Stiftung, 2006), pp.45-64.



(RN)-, puede haber una competencia entre candidatos de cada una de las colectividades en cada distrito. La situación es diferente en la Concertación, porque tiene cuatro partidos que aspiran a un escaño por distrito. En la práctica, los partidos de izquierda (PS y PPD), junto a los radicales, han formado un subpacto al interior de la Concertación para evitar la competencia entre ellos y para enfrentar al postulante del PDC, el único partido de la coalición gobernante que lleva candidatos en todos los distritos. Esto pone al PDC en una situación desmedrada, porque se trata de una lucha electoral de tres partidos contra uno e históricamente la izquierda ha sido más fuerte, con la excepción del comienzo de la transición. Esta situación se hace insostenible para el PDC en los comicios del 2009, pues corre el peligro de quedar muy debilitado en su representación parlamentaria, aunque pueda tener un porcentaje relevante del electorado.

A estos problemas se agregan las debilidades de la inscripción electoral, con apenas un cuarto de los jóvenes inscritos en los registros electorales que deben hacerlo personalmente en las oficinas del Servicio Electoral. Este es un anacronismo intolerable, porque el sistema político contempla importante gestiones por internet, pero no se puede utilizar para ser ciudadano. Esto ha significado que la mayoría de la juventud no está integrada al sistema político, lo que daña la legitimidad de la democracia y tiene consecuencias negativas en los partidos. Por ejemplo, las colectividades de la Concertación no tienen presencia en las federaciones de estudiantes de las universidades públicas y privadas, lo cual les impide tener una fuente de reclutamiento de nuevos dirigentes, con una clase dirigentes cuyos principales figuras, incluyendo los de la oposición, son parlamentarios o dirigentes de partidos desde 1990 e incluso, mucho antes, porque ocuparon cargos en el régimen militar o participaron en la oposición democrática a éste. El padrón electoral no ha crecido y, por ende, se ha envejecido.



El gobierno Bachelet nombró una comisión de expertos para preparar un proyecto de reforma del sistema electoral, que fue presidida por Edgardo Boeninger, exministro secretario general de la presidencia del presidente Aylwin. Sin embargo, esta comisión fracasó en buena medida por la falta de apoyo en los partidos de la Concertación, especialmente en los de izquierda. Esto se explica porque se benefician del sistema binominal en una doble medida: compiten unidos contra el PDC y la exclusión del PC obliga a muchos votantes de este partido a apoyar a los candidatos del bloque PS/PPD por el factor del voto útil, pues los postulantes de su partido carecen de posibilidades de ser elegidos. Esta aceptación en la práctica del binominalismo no beneficia la imagen de los partidos de la Concertación, que lo han criticado por su origen y consecuencias negativas a la democracia.

LAS DEBILIDADES DE LOS PARTIDOS DE LA CONCERTACIÓN

Los partidos de la Concertación no se están preparando para enfrentar los desafíos del futuro para seguir siendo una alternativa de poder y, por el contrario, hay signos de agotamiento de su razón de ser. El PPD se rompió el 2006 por un conflicto a raíz de las elecciones a su directiva, abandonando el partido el candidato a presidente derrotado, que era uno de los tres senadores de la colectividad, acompañado de un diputado. Con ese paso, la Concertación perdió la mayoría que había logrado en el senado en las elecciones del 2005, porque la eliminación de los senadores designados por la reforma constitucional del 2005 impidió que la derecha controlara la cámara alta con el apoyo de éstos, como lo hizo hasta ese momento.

Un año después, el PDC expulsó a uno de sus senadores por discrepancias con sus declaraciones en contra de la Concertación. Esta medida tuvo consecuencias muy graves para el PDC, para la Concertación y el gobierno Bachelet porque renunciaron en solidaridad con él cinco



diputados, por lo cual el gobierno perdió la mayoría de la Cámara de Diputados, que la Concertación había controlado desde los primeros comicios legislativos de 1989. Este es un cambio institucional muy relevante, pues la cámara de diputados tiene la función de fiscalizar los actos del gobierno, que ahora la oposición pudo ejercer en plenitud al disponer de mayoría en ella. La oposición, con el apoyo de los diputados que renunciaron al PDC, presentó una acusación constitucional contra la ministra de Educación, que, luego de ser aprobada en la cámara de diputados, fue destituida por el senado en mayo 2008, el primer caso desde 1990, mecanismo que sólo había operado durante el gobierno del presidente Allende en un contexto político muy distinto.

Los problemas de los partidos no terminan ahí porque el PPD y el PRSD formaron una lista propia para las elecciones de concejales en los comicios municipales del 26 de octubre del 2008, lo cual significó privilegiar los intereses individuales por encima de los de la Concertación, significando, en la práctica, una ruptura de ésta. Aunque se mantiene el compromiso de apoyar un candidato común a alcalde, la Concertación irá con dos listas, la del PPD/PRSD y la formada por el PS y el PDC, que competirán entre si y con la lista de la derecha. Esta división constituye un precedente para que nuevamente se planteen dos o más listas en los comicios legislativos del 2009, incluyendo más de un candidato presidencial, lo que sería el fin de la Concertación en la forma que se ha conocido hasta ahora. La iniciativa del PPD y PRSD carece de propuesta programática y su fundamento ha sido sólo de interés electoral.

LOS PROBLEMAS DEL GOBIERNO BACHELET Y LA DEBILIDAD DE LA IZQUIERDA

Las dificultades para que la Concertación sea una alternativa de poder también se explican por las debilidades del gobierno de



Michelle Bachelet, especialmente su dificultad para constituir un equipo de ministros y saber dirigirlos, tareas fundamentales del liderazgo presidencial.¹³ Su primer gabinete se caracterizó por la designación de seis de los 21 ministros que pertenecían a un colectivo de profesionales sin vinculación con los partidos, *Expansiva*, lo cual daba cuenta del interés de la presidenta de ser independiente de los partidos.¹⁴ El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, había fundado esta asociación a comienzos del gobierno anterior como un grupo de poder y él estaba radicado en EEUU desde el exilio de su padre en 1976, el jurista Eugenio Velasco, siendo profesor de economía en la Universidad de Harvard. Ha tenido dificultades para desempeñar su cargo porque desconoce las complejidades de la política chilena y su ausencia de vinculación partidaria le hace muy difícil su relación con las bancadas en el congreso.

Este gabinete no se consolidó porque el gobierno enfrentó la revuelta escolar a las pocas semanas de haber comenzado su labor en Marzo del 2006, iniciándose una rotativa ministerial sin precedentes desde 1990. Por ejemplo, ha tenido tres ministros del Interior y Educación, todos ellos del PDC, en menos de tres años, lo que da cuenta de la dificultad de la presidenta para entenderse con colaboradores del principal partido aliado. No ha habido prolijidad en las designaciones de ministros en algunas carteras, como en Agricultura cuando, a comienzos del 2008, sacó a su titular, un exitoso rector de una universidad pública y con un doctorado en Alemania en economía agraria, también del PDC, y lo reemplazó por una persona ajena al sector agrícola, del mismo partido, y sin tener la formación

¹³ Greenstein, Fred I. *The Presidential Difference. Leadership Style from FDR to Clinton* (Princeton: Princeton University Press, 2000).

¹⁴ La presidenta Bachelet dio un perfil “ciudadano” a su gobierno, que implicó mostrar una menor cercanía con los partidos. Esto se explica porque fue nominada candidata del PS y de la Concertación por el apoyo que ella tuvo en las encuestas y no por una decisión de las directivas, lo cual le daría una autonomía de las colectividades .



CARLOS HUNEUS

profesional para cumplir su tarea, que había trabajado durante años como asistente de la presidenta de la colectividad, la senadora Soledad Alvear.

Tampoco el gobierno de la presidenta Bachelet ha logrado imponer su agenda, en que destacan importantes logros en educación preescolar, que apuntan a favorecer el ingreso de la mujer al trabajo, y la reforma previsional, que mejorará las condiciones de vida de los adultos mayores. El ministro del Trabajo, socialista, ha impulsado una agenda a favor de los trabajadores y su acción ha significado un mayor espacio para éstos, pero ello está opacados por los problemas que ha tenido el gobierno.

El gobierno ha estado a la defensiva por dos hechos. El primero ocurrió escasas semanas después de llegar a La Moneda, por una revuelta escolar producida por las críticas de las organizaciones de los alumnos a la calidad de la educación pública, que paralizó los liceos de Santiago y puso al gobierno a la defensiva. Esta movilización constituyó un severo cuestionamiento a la gestión de los gobiernos de la Concertación, produciendo el primer cambio de gabinete.

El segundo fue el fracaso del Transantiago, un ambicioso programa de modernización del transporte público en Santiago puesto en marcha el 10 de febrero de 2007, sobre la base de empresas privada y que había sido iniciado por la administración del presidente Lagos. Ha habido un fuerte malestar de los santiaguinos, especialmente en los sectores populares, que son los que más utilizan el transporte público. Este fracaso demostró que una política mal diseñada puede perjudicar especialmente a los pobres, mostrando que las desigualdades también se expresan en los servicios públicos. El Transantiago ha dominado la preocupación del ejecutivo, concentrando energías sin lograr mostrar mejoras que satisfagan a los usuarios y ha tenido un fuerte impacto en la



evaluación del gobierno, influyendo en el aumento de los chilenos que no aprueban su gestión, llegando al 45% en la medición de Julio de 2008, produciéndose un empate con quienes aprueban la gestión del gobierno, 44%, una situación que no se dio en los dieciocho años de democracia.¹⁵

El gobierno Bachelet tampoco ha podido enfrentar bien un problema que se arrastra desde antes, que tiene que con la mayor complejidad de la agenda económica y la necesidad de considerar los intereses de todos los actores económicos. Ha habido una preocupación, como antes en el de Lagos, por políticas que dieran confianza a los empresarios y se ha justificado ello por la necesidad de priorizar el crecimiento y superar las desconfianzas provenientes del gobierno de Allende, que privilegió la nacionalización de empresas, lo cual condujo a un enfrentamiento con los empresarios. Esa argumentación no tiene el sentido que le han dado ambos presidentes, porque ellos no son presidentes de izquierda, como en el Uruguay, sino que fueron elegidos como candidatos de la Concertación y si hubieran competido por sus partidos o un bloque de izquierda, no habrían ganado los comicios presidenciales.

El impacto del fracaso de Allende tiene consecuencia en el partido socialista, el principal de la izquierda, que se traduce en decisiones de política económica que también atienden a los intereses de los empresarios, sin tener una similar preocupación por el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Personalidades del socialismo que trabajan con grandes empresas o se han hecho empresarios son muy destacadas en el partido, legitimando de paso la función de éstos en el sistema político y económico. Esto tiene un impacto conservador en el sistema político, porque sectores del empresariado, se caracterizan por

¹⁵ Barómetro CERC, Julio 2008, www.cl.



CARLOS HUNEUS

su rechazo a los sindicatos, con prácticas antisindicales - especialmente en el retail, la industria salmonera- intolerables para un país con la fortaleza de su democracia y con una economía integrada al mundo. Se ha creado una delicada relación entre la clase dirigente y las empresas, con exministros que salen del gobierno y son nombrados de inmediato como directores de empresas privadas, incluso reguladas, lo que crea un conflicto de intereses que daña la imagen de los partidos y de los políticos y crea una relación para nada favorable a la calidad de la democracia.¹⁶

Esta relación entre el PS y los empresarios tiene consecuencias políticas porque este partido, a diferencia del socialismo español, la social democracia alemana y el laborismo británico carece de una presencia importante en el movimiento de trabajadores, que cumpliera la función de presionar al interior del partido y en el gobierno a favor de las demandas de los asalariados. Si bien es cierto que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es militante del PS, actúa con amplia autonomía y su desempeño en la organización ha sido opaco, sin tener el liderazgo como para influir en la agenda del PS en temas económicos que beneficien a los trabajadores.

CONCLUSIONES

La exitosa democratización en Chile lleva al país a una situación de definiciones porque debe enfrentar nuevos desafíos, a partir de sus propios logros. La Concertación por la Democracia tiene la necesidad de plantear una redefinición de sus metas si desea seguir gobernando por

¹⁶ El director de presupuesto y el ministro del Trabajo del presidente Lagos, ambos socialistas, fueron nombrados directores de empresas reguladas, una de agua potable y el otro, de una empresa del Transantiago. Un exministro fue nombrado director del principal banco del país, de propiedad de un grupo económico que fue beneficiado de un crédito del BancoEstado cuando era presidente. Este banco forma parte del sistema financiero del Transantiago.

otro período presidencial. Esto requiere un análisis crítico de lo alcanzado en los cuatro gobiernos democráticos, que no se ha hecho. Difícilmente los partidos podrán realizar esta tarea cuando comience la campaña presidencial, que es también parlamentaria.

La oposición tampoco ha ofrecido una alternativa programática nueva, porque apuesta a derrotar a la Concertación sobre la base del desencanto de sus votantes, para lo cual enfatiza más la continuidad que el cambio de rumbo si llega a La Moneda. Esto aumenta la tendencia de la política chilena hacia un cierto inmovilismo, escondido detrás de buenos indicadores económicos y el perfeccionamiento del sistema económico existente, con el agravamiento de los problemas existentes, algunos de los cuales hemos analizado en estas páginas. El desarrollo económico y político es más complejo y difícil a medida que se avanza en ello, y se requiere una decidida voluntad política para enfrentar los problemas y las falencias existentes. Los partidos de izquierda, el PPD y el PS, parecieran haber dejado de lado su voluntad de cambio y el PDC, por su parte, se ha debilitado como para ser la colectividad que creó y dinamizó la Concertación en su primera etapa. Los problemas del gobierno Bachelet hacen más difícil que la coalición pueda enfrentar en buenas condiciones las próximas elecciones presidenciales y las posibilidades de la alternancia del gobierno son mayores que nunca.

El debilitamiento de los partidos de la Concertación plantea que los costos de estar en el gobierno son demasiado altos y que el paso a la oposición podría ser necesario para que resuelvan sus problemas y se modernicen, como lo demuestra la experiencia comparada.





AVANCES Y RETOS EN LA COLOMBIA DE HOY







AVANCES Y RETOS EN LA COLOMBIA DE HOY

ALFREDO RANGEL

Afortunadamente para los colombianos la larga noche oscura de violencia y de inseguridad que hemos padecido durante los últimos 40 años está llegando a su fin, estamos de manera cierta empezando a ver la luz al final del túnel, a voltear la página de este fenómeno de violencia tan arraigado en Colombia, y por eso los retos que se nos presentan hacia el futuro, que son grandes e ingentes, no van a estar determinados de manera significativa por el tema de la violencia, que en buena parte condicionó la suerte del país en las décadas anteriores.

La mejoría de la situación en Colombia se ha logrado gracias a la aplicación de unas políticas de seguridad nacional muy consistentes y eficaces, que han permitido recuperar de una manera importante la seguridad y la confianza de los colombianos y de los extranjeros en Colombia. La recuperación de la seguridad ha logrado reactivar la economía de una manera inusitada en comparación con años anteriores, lo que a su vez ha permitido un avance importante en la solución de los problemas sociales del país.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

En efecto, en Colombia el promedio del crecimiento económico de las últimas décadas ha sido de 2.5% del PIB, no obstante el año anterior fue de 7.5% , el más grande de los últimos 30 años. Esto ha sido resultado del crecimiento de la inversión interna y externa, como consecuencia de la mejoría en las condiciones de seguridad del país. Así, Colombia tenía en promedio en los años anteriores dos mil



ALFREDO RANGEL

millones de dólares de inversión anual, hoy está cerca de nueve mil millones de dólares de inversión anual, y ya existen proyectos de inversión hacia el futuro por el orden de nueve mil millones de dólares. Según la CEPAL, Colombia es el cuarto receptor de inversión extranjera en el área, después de Brasil, México y Chile. De igual manera, la inversión interna ha crecido en los últimos años hasta llegar a ser hoy el 27 % del PIB luego de representar sólo el 15%. Su deuda externa con relación al PIB bajó de 48% a 26% en los últimos 5 años y el déficit fiscal bajó de 3.6% a 0.8% en el mismo periodo. Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos se han triplicado en los últimos 10 años llegando a 12 mil millones de dólares; de igual manera las exportaciones a Venezuela, nuestro segundo socio comercial, se multiplicaron por 7 al pasar de 800 millones de dólares a 6 mil millones de dólares. Esto ha significado para Colombia significa crecimiento, productividad, empleo y mejoría en las condiciones de vida de la población.

Así, el desempleo abierto que hace 6 años era de 18%, logró bajarse a la mitad a finales del año 2007 y hoy se ubica en 10.5%. En este mismo lapso la población en condiciones de pobreza descendió de 57% a 42%, lo que significa que al menos 4 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 5 años, y 10 millones de persona lo hicieron en los últimos 8 años. La población con acceso a la seguridad social en saludo pasó del 56% al 83%, duplicándose el acceso al sistema de las personas más pobres. De igual forma, la población cobijada por el régimen de pensiones ha crecido en un 44% en los últimos años. En el inmediato futuro se espera una leve desaceleración del crecimiento económico a una tasa del 4.5% anual, pero el crecimiento va a continuar y el país parece blindado en torno a los riesgos derivados de la crisis financiera internacional.

LA RECUPERACIÓN DE LA SEGURIDAD

Esta recuperación del país ha sido posible por la recuperación de la seguridad. En efecto, Colombia tuvo en el año



2007 la tasa de homicidios ha sido la más baja de los últimos 20 y en los últimos 6 años esa tasa se redujo a la mitad, pues pasamos de 65 homicidios por 100.000 habitantes, que es muy alta en comparación con países similares a Colombia, y hemos bajado en menos de 6 años a 34 homicidios por 100.000 habitantes. Aún cuando esta tasa sigue siendo alta, significa una situación menos complicada que la que desafortunadamente están viviendo algunos países del vecindario cercano. En efecto, varios países superan hoy la tasa de homicidio de Colombia, que hasta hace pocos años estuvo en el primer lugar por razón de su conflicto armado interno. Entre ellos están El Salvador con una tasa de 55, Venezuela con 52, Jamaica con 49, Guatemala con 45, y Honduras con 43. Y Bogotá con 18 está en mucho mejor situación que Ciudad de Guatemala (103), San Salvador (95), Caracas (87), Tegucigalpa (56), Sao Paulo (55), Rio de Janeiro (53), Brasilia (38), Washington (34) y Lima (22) . De continuar esta tendencia al alza la tasa promedio de homicidio de la región que hoy es de 26 y triplica la de Europa, podría llegar a ser de 30 en el año 2030, lejos de la tasa mundial que es de 9.

De otra parte, Colombia ha mejorado ostensiblemente su situación con respecto a un crimen en el que por muchos años mantuvo una ignominiosa delantera: el secuestro. En efecto, la disminución en un 80 por ciento de este delito en nuestro país y su auge reciente en el vecindario ha llevado a que al menos cinco países latinoamericanos nos superen en cantidad de secuestros en proporción a sus respectivas poblaciones. En su orden: México, Ecuador, Brasil, Haití y Venezuela. Que en Ecuador y en Venezuela ahora haya más secuestros que en Colombia era impensable hasta hace poco. Pero ocurrió, como lo demuestra el último estudio de Pax Christi sobre el tema. Claro que Colombia se quedó con la mala fama. Ahora se habla de que un país se ‘colombianiza’ cuando en él crece el secuestro y en general su inseguridad interna. Y esto ocurre cuando precisamente



ALFREDO RANGEL

los colombianos vamos de vuelta y empezamos a resolver en gran medida esos problemas.

EL DEBILITAMIENTO DE LA GUERRILLA

El debilitamiento de la guerrilla y la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia ha llevado a una disminución sustancial de sus acciones violentas contra la población y contra los organismos de seguridad del Estado. Así por ejemplo, los ataques guerrilleros contra pequeños poblados rurales que en el año 2002 fueron cerca de 30 e incluyeron en algunos casos toma de control de poblaciones durante muchas horas, se redujeron a 2 hostigamientos a pequeños poblados en zonas muy marginales de la geografía nacional. Los desplazamientos forzosos de personas, producto de las confrontaciones violentas entre guerrilleros y paramilitares en disputa por el control de porciones del territorio nacional, también se redujeron sustancialmente. Los retenes ilegales de la guerrilla en las carreteras que en el año 2002 llegaron a ser 246 se redujeron el año pasado a únicamente 18, o sea 13 veces menos.

Qué es lo que ha hecho posible esta recuperación de la seguridad? Pues una política muy efectiva contra los grupos armados que les ha ocasionado la debacle más grande en toda su historia. El caso de las FARC es muy diciente. Veamos algunos indicadores de su debilitamiento en los últimos 5 años.

Hombres en armas. Perdieron el 60% de sus hombres, al pasar de 18 mil a cerca de 7 mil. Por primera vez en su historia disminuyó su pie de fuerza. La mayoría ha desertado y se ha acogido a programas gubernamentales. Simultáneamente ha caído su capacidad de reclutamiento, por el deterioro de su imagen entre sectores del campesinado.

Finanzas. Sus ingresos han caído al menos en un 40%. A pesar de su mayor involucramiento en el narcotráfico, sus ingresos descendieron porque ahora la parte del león se la están llevando las mafias mejicanas. Además, el frente del Negro Acacio fue desvertebrado y esto significó una enorme pérdida de ingresos de la droga. Sus secuestros anuales cayeron un 92%, al pasar de 998 a 75. La pérdida de presencia territorial y de movilidad les ha disminuido su capacidad de extorsión a la mitad.

Territorio. Medida por el número de municipios donde las FARC han realizado ataques contra la Fuerza Pública, su presencia territorial se ha reducido en un 40%. Perdieron definitivamente zonas estratégicas en Cundinamarca, y redujeron su presencia y perdieron movilidad en su retaguardia estratégica en el sur del país como resultado del Plan Patriota. Sus redes urbanas fueron desvertebradas y con ellas su propósito de urbanizar el conflicto.

Operaciones. Su capacidad operacional ha descendido verticalmente. Sus ataques anuales a la Fuerza Pública pasaron de 399 a 214, casi la mitad. Hay que resaltar que la mayoría de ellos son campos minados, una táctica totalmente defensiva orientada a detener el avance de las tropas gubernamental que persiguen a la guerrilla en medio de su repliegue, táctica que ocasiona el 68% de las víctimas entre los miembros de la Fuerza Pública. Los retenes ilegales pasaron de 278 a 37, un 86% menos. Sus atentados contra la infraestructura económica bajaron a menos de la mitad, sus ataques a poblaciones descendieron de 39 a 1.

Mandos. Nunca habían tenido una pérdida tan significativa de mandos como ahora, sea por capturas, por bajas o por deserciones, en todos los niveles de su dirección, desde los frentes hasta el Secretariado. Numéricamente hablando todos tienen reemplazo, pero esta racha de pérdidas golpea muy duro su moral y representa una merma significativa de



su capacidad política, organizativa, financiera y militar. La capacidad y la experiencia de muchos de esos mandos es irremplazable.

Comunicaciones. Los organismos de inteligencia del Estado tienen a las FARC prácticamente incomunicadas. Esto ha deteriorado la capacidad de comando y control de sus comandantes, ha propiciado el relajamiento, la indisciplina y la desmotivación de la tropa, y la extensión de la corrupción y la fuga de recursos entre los mandos medios, afectando aún más sus deterioradas finanzas y su mermada capacidad operacional.

Moral. La motivación de las FARC está en su punto más bajo de su historia. Se derrumbaron sus expectativas de éxito militar. Su debilitamiento militar y financiero, la incomunicación, la avalancha de desertiones, la delación generalizada a cambio de recompensas, la caída de jefes importantes y el masivo rechazo popular del pasado 4 de febrero, seguirán debilitando su moral y su motivación para continuar la lucha.

Como consecuencia de todo lo anterior, ahora las FARC tienen el tiempo en contra. Su debilitamiento será progresivo e irreversible, y mientras más débiles estén, menos podrán lograr en una negociación con el Estado. Por su parte, el ELN, mucho más débil, se encuentra en una situación aún más calamitosa. Llegó a tener unos 4.500 hombres en armas, pero hoy no tiene hoy más de 600 o 700 hombres en armas, es decir una fracción de lo que era en el pasado. Se encuentran en situación muy cercana al cese de hostilidades obligado por la acción de las fuerzas gubernamentales.

LA DESMOVILIZACION PARAMILITAR

Pero la política de seguridad del Gobierno también incluye una política de paz que siempre ha mantenido la puerta abierta para realizar



conversaciones de paz pues con los grupos que así lo acepten. Esta política de paz logró desmovilizar a 32.000 miembros de los grupos paramilitares, 16.000 de los cuales entregaron armas pues eran combatientes que estaban en las filas armados. Esto también ha contribuido enormemente a disminuir el número de masacres, de asesinatos, de desplazamiento forzado en Colombia que ha sido pues un problema crítico en el país durante los últimos años.

La desmovilización de estos grupos ha sido un gran logro del Gobierno nacional. Eran grupos que no habían sido derrotados por el estado en el momento de su desmovilización y que más bien, por el contrario, estaban pasando por su mejor momento desde el punto de vista militar, político, económico y social. Además, habían logrado derrotar a la guerrilla en muchos lugares y tenían control territorial sobre muchas zonas del país. Sin embargo, el Estado les impuso sus propias condiciones para que se sometieran a la Ley de Justicia y Paz, que es el marco jurídico bajo el cual entregaron las armas y se desmovilizaron.

Esta Ley obliga a los responsables de crímenes atroces a confesar todos sus delitos y entregar sus bienes para reparar a las víctimas como condición necesaria para ser objeto de rebajas sustanciales en sus penas de cárcel. Si no confiesan la totalidad de sus delitos o no entregan a las autoridades todos su bienes, podrían perder esos beneficios y pasar a la justicia ordinaria en la cual podrían ser condenados a más de 60 años de cárcel por sus delitos y no a 8 años como lo contempla la Ley de Justicia y Paz, si cumplen cabalmente con sus condiciones. El hecho importante es que es la primera vez que en Colombia se desmoviliza un grupo armado en estas condiciones que hacen posible lograr simultáneamente dosis importantes de verdad, justicia y reparación a las víctimas. Nunca en las desmovilizaciones anteriores de grupos guerrilleros en Colombia había sucedido esto,



pero tampoco se había dado en ningún proceso de reconciliación nacional a nivel mundial. Como resultado de la aplicación de esta Ley han sido incorporados a juicios 2.700 paramilitares desmovilizados, entre ellos los 50 principales jefes, 15 de los cuales fueron extraditados a Estados Unidos para ser procesados por narcotráfico, se han inscrito 137 mil víctimas para ser parte civil en los juicios y reclamar una reparación, se han encontrado 1.300 fosas comunes y se han exhumado más de 1.600 cadáveres.

La desmovilización de los grupos paramilitares ha permitido sacar a la luz pública y empezar a procesar judicialmente a muchos dirigentes políticos que en su momento se aliaron con esos grupos ilegales para presionar indebidamente a los electores o para amenazar a sus opositores, con el fin de obtener ventajas electorales. La inmensa mayoría de esos casos sucedieron antes del inicio de la actual administración durante la cual se desmovilizaron esos grupos. No obstante la conmoción que han causado esos procesos, en ningún momento la institucionalidad ni la marcha del Congreso se ha puesto en riesgo y las Cortes han trabajado de manera independiente, lo cual es una muestra de la fortaleza institucional de Colombia. En el Congreso está en curso la aprobación de una reforma política que en el futuro impida la penetración de grupos armados ilegales en la política colombiana, propósito en el que coinciden el Gobierno Nacional, los partidos políticos y la sociedad colombiana.

De otra parte, es muy probable que las guerrillas de las FARC, del ELN se desmovilicen en un futuro y probablemente con ellos habrá que hacer unas concesiones mucho mas generosas que las que se hicieron con los paramilitares, es decir, una ley de justicia y paz tal vez menos dura y menos exigente, y esto tal vez no provoque las críticas que ha tenido que soportar el Gobierno colombiano por la desmovilización de los paramilitares. Pero si ese es el costo para una



desmovilización total de la guerrilla y para el advenimiento de la paz definitiva en el país, es posible que los colombianos estemos dispuestos a asumirlo.

NARCOTRÁFICO

De otra parte, en Colombia hay problemas que siguen siendo críticos. En efecto, el gran lunar de la política de seguridad democrática es el tema del narcotráfico. No se ha tenido éxito en la lucha contra el narcotráfico. Pero este no es solamente un problema de Colombia, ya que a nivel global también se esta perdiendo la guerra contra las drogas ilícitas, en particular contra la cocaína. Cada día se produce y se consume más cocaína en el mundo. Los datos son absolutamente devastadores, en Colombia efectivamente se ha reducido el tamaño de las siembras de coca a cerca de la mitad que teníamos hace diez años, pero en esta área reducida hoy estamos produciendo más del doble de cocaína que antes, hasta llegar a más de 600 toneladas anuales.

En Colombia se han destruido todos los carteles de la droga que han surgido, los grandes carteles de Medellín, el cartel de Cali, el del Norte del Valle; se han incautado miles de toneladas de insumos, también se han decomisado centenares de toneladas de cocaína, se han fumigado más de medio millón de hectáreas a lo largo y ancho del país. También se han extraditado a Estados Unidos centenares de capos, durante los últimos 6 años más de 600 miembros de bandas de narcotraficantes fueron enviados para ser juzgados por la justicia de ese país. Y sin embargo la cantidad de cocaína que se produce y se exporta desde Colombia sigue prácticamente igual o mayor. Ahora está produciendo mucha cocaína Perú y Bolivia abasteciendo un mercado que es creciente internacionalmente. Hay cerca de seis millones de consumidores de cocaína en los Estados Unidos y eso está estable. Pero también hay países donde está creciendo el



consumo, como en Irlanda, España, Francia, Italia, también en países de Europa Oriental y en América Latina, donde Argentina hoy es el mayor consumidor de cocaína, superado en América solamente por Estados Unidos. También ha penetrado de manera grave en Brasil y sobre todo en México con enormes secuelas de violencia, criminalidad, armamentismo y corrupción, pues en este último país las mafias se están disputando violentamente la parte del león en la repartija de las gigantescas ganancias ilegales derivadas del narcotráfico.

Como resultado de la persistencia de la alta rentabilidad del narcotráfico, Colombia ha visto aparecer decenas de pequeños carteles de narcotraficantes que han reemplazado a los antiguos grandes carteles de la droga que han sido desarticulados por el Estado; pero, a diferencia de sus antecesores, estos pequeños carteles buscan tener un bajo perfil, no confrontar violentamente al Estado y garantizar sus condiciones de operación más con la corrupción que con la violencia. Simultáneamente, en muchas zonas rurales del país ha surgido recientemente un nuevo fenómeno de bandas armadas al servicio del narcotráfico, muchas de ellas nacidas a partir de reductos no desmovilizados de anteriores grupos paramilitares. Estos grupos armados ilegales han entrado en alianzas con muchos frentes guerrilleros que también se dedican al narcotráfico, con el fin de enfrentar conjuntamente la acción represiva del Estado. Estas bandas representan una nueva amenaza a la seguridad nacional y son el resultado de la persistencia del narcotráfico como actividad ilegal que genera ingentes ganancias. No son grupos paramilitares contrainsurgentes como lo fueron los que se desmovilizaron y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, son verdaderas narco-bandas que se alían con las guerrillas para repartirse los territorios, los mercados y las ganancias del narcotráfico, y repeler coordinadamente al Estado.



FRONTERAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

El otro problema de seguridad pendiente en Colombia es el de las fronteras. Yo creo que se está avanzando, ha sido un punto en el cual el gobierno nacional ha hecho un énfasis muy grande en el Plan de Consolidación que es la segunda parte de su política de seguridad democrática. El desbordamiento de los efectos del conflicto armado interno hacia territorios de países vecinos, le ha ocasionado a Colombia muchos incidentes fronterizos que han derivado en tensiones políticas y diplomáticas con algunos de sus vecinos. El Plan Consolidación trata de blindar las fronteras para evitar la transhumancia de grupos irregulares, la utilización de territorio extranjero como zonas de resguardo y protección de esos grupos, disminuir el contrabando de armas, drogas y mercancías, y evitar la comisión de otros delitos como el secuestro en esas zonas.

Luego de un largo periodo crítico de las relaciones entre Colombia y Venezuela, la situación afortunadamente tiende a normalizarse. Han cesado los ataques verbales y públicos entre los mandatarios de ambos países, los gobiernos han expresado su intención de colaborar en la guarda conjunta de las zonas fronterizas y continuar la robusta agenda de integración binacional que incluye megaproyecto energéticos como la construcción de un poliducto entre el Golfo de Venezuela y el pacífico colombiano. El Presidente Chávez se ha deslindado pública y claramente de la guerrilla de las FARC sobre la que mantenía una actitud que para algunos colombianos era ambigua y para otros era de franco apoyo y respaldo. Chávez ha declarado que la lucha armada no tiene vigencia alguna, ha llamado a la guerrilla a entregar a los secuestrados inmediatamente y sin ninguna contraprestación. Esto ha sido valorado muy positivamente por el gobierno colombiano el cual



ha ratificado su decisión de normalizar las relaciones entre los dos países que tienen un muy robusto, fluido y creciente intercambio comercial y cultural.

Con Ecuador, la situación es un poco más compleja y variable, pues aún cuando se han acentuado los contactos entre las dos cancillerías con vistas a normalizar las relaciones diplomáticas que están en suspenso desde hace unos meses, la situación aún está lejos de regularizarse. Colombia ha acusado reiteradamente a las autoridades ecuatorianas de ser muy complacientes con la presencia de la guerrilla colombiana en su territorio y, a su vez, el gobierno ecuatoriano le enrostra al colombiano no hacer lo suficiente para evitar que los insurgentes traspasen las fronteras. Pero el bombardeo de las Fuerzas Militares de Colombia al campamento que tenía el líder de las FARC Raúl Reyes establecido durante muchos meses en Ecuador, fue el detonante de la crisis reciente, aún no superada. Un encuentro reciente en Panamá de los altos mandos militares de ambos países hace pensar en que la animosidades mutuas se están asentando y que va a prevalecer en el futuro el interés mutuo de garantizar la seguridad fronteriza como una condición para continuar adelantando la activa integración económica y cultural entre los dos pueblos.

De otra parte, Colombia ha logrado un apoyo muy sustancial del gobierno de Brasil en la lucha contra la guerrilla y contra el narcotráfico. En correspondencia, Colombia ha apoyado la iniciativa de Brasil para crear un Consejo Suramericano de Seguridad, a pesar de las reticencias iniciales del Gobierno colombiano al reclamar una actitud clara de todos los gobiernos del área con respecto al tema del terrorismo. Superado ese obstáculo, ese Consejo se perfila como una iniciativa necesaria para fortalecer la confianza mutua entre esos países y para enfrentar conjuntamente las amenazas a la seguridad colectiva.



Las relaciones de Colombia con Estados Unidos son muy estrechas en lo económico y en lo diplomático y no tienen ningún motivo de preocupación ni de incertidumbre hacia el futuro. El Plan Colombia ha sido una iniciativa bipartidista de hecho empezó con el presidente demócrata Bill Clinton y que ha sido continuada por los gobiernos republicanos. En consecuencia, es de esperar que cualquiera que sea el resultado de la próxima elección presidencial esa cooperación de Estados Unidos con Colombia continúe sin contratiempos, ya que ha sido y sigue siendo fundamental para fortalecer al Estado colombiano, recuperar la seguridad, robustecer el sistema judicial y debilitar a los grupos irregulares y a los narcotraficantes. El principal tema pendiente de la agenda bilateral es el TLC cuya aprobación se ha visto retardada por el debate electoral presidencial en EE.UU. Para los colombianos ha sido lamentable que los demócratas hayan aplazado la aprobación de ese tratado con el argumento de que en Colombia sigue habiendo violaciones de los derechos humanos, olvidando que fue gracias al apoyo de un gobierno demócrata que los colombianos logramos superar una grave situación de crisis humanitaria en el pasado y no reconociendo que la situación presente es mucho mejor que cuando se inició el Plan Colombia. Cualquiera podría afirmar paradójicamente que cuanto más mejora la situación en Colombia, peor es el tratamiento de los demócratas hacia el país. O que cuando la situación de Colombia era muy mala, la relación con los demócratas era mucho mejor.

Pero muy seguramente en realidad no existe una actitud hostil de los demócratas hacia Colombia sino que se trata solamente de una táctica electoral en un momento en que este partido busca atacar por todos los flancos al Presidente Bush, cuya administración ha tenido en el gobierno colombiano un aliado incondicional. Los demócratas buscan solamente atacar coyunturalmente a los aliados de Bush, entre ellos



Colombia. Por consiguiente, es de esperar que superada la coyuntura electoral e iniciado el nuevo gobierno en EE.UU., las cosas regresen a la normalidad, en caso de que la nueva administración sea demócrata, y que continúen las buenas relaciones de cooperación, en caso de que sea republicana. En ambos escenarios estaría garantizada la aprobación del TLC, acuerdo comercial que necesita con urgencia la economía colombiana para seguir creciendo e incorporándose exitosamente en las corrientes de la globalización.

RETOS FUTUROS Y REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Hacia el futuro el gran reto para la seguridad en Colombia será consolidar los avances logrados hasta el momento, garantizar y profundizar el control social e institucional del territorio, y mantener la tendencia positiva de la reducción de todo tipo de delincuencia. Todo lo anterior está relacionado con la necesidad de culminar con éxito la reinserción de los grupos guerrilleros, desarticular las nuevas bandas al servicio del narcotráfico, lograr acuerdos de paz con las guerrillas y, obviamente, reducir el narcotráfico.

De otra parte, Colombia tiene ante sí el reto de garantizar condiciones favorables para seguir atrayendo la inversión extranjera y el crecimiento de la inversión interna, como condición indispensable para mantener un alto ritmo de crecimiento económico que permita seguir reduciendo el desempleo, garantizar suficientes ingresos fiscales, ampliar la cobertura de la seguridad social y reducir la pobreza. Crecimiento económico y seguridad son a su vez condiciones esenciales para continuar trabajando en procura de una sociedad más cohesionada, más igualitaria y más justa.

El término del actual mandato del Presidente Alvaro Uribe es el año 2010. La coyuntura política colombiana esta marcada en este momento por el debate en torno a la sucesión presidencial,



luego de dos mandatos consecutivos de Uribe. Esta en marcha una iniciativa que busca la realización de un referendo que haga posible un tercer mandato del actual presidente, lo cual ha generado muchos temores entre los partidos de oposición debido a la muy alta popularidad de Uribe, quien se muestra imbatible en las urnas. De hecho, luego de seis años de gobierno su aceptación popular merodea el 80 por ciento, el más alto de mandatario alguno en las democracias del mundo occidental.

Quienes se oponen a dicha reelección señalan que Colombia podría correr los riesgos de otros países suramericanos cuyos presidentes luego de ampliar sus mandatos, mostraron tendencias autoritarias, concentraron excesivamente el poder y restringieron el pluralismo democrático. Me parece que Colombia no estaría expuesta a estos riesgos puesto que históricamente ha sido uno de los países con mayor estabilidad institucional a nivel regional. Esto significa que su democracia está blindada contra peligros autoritarios puesto que allí opera plenamente la separación y la independencia entre los poderes públicos, existen organismos de control independientes, la libertad de prensa está garantizada y existe una sociedad civil actuante, deliberante y crítica que vigila y controla los poderes públicos. Pero la última palabra la tiene el Congreso Nacional, las altas Cortes de Justicia y el pueblo colombiano, los cuales tendrán que optar por aprobar o no esa posibilidad de continuidad del actual gobierno en Colombia. De todas maneras, son muchos los aspirantes de varios partidos políticos, con capacidad y liderazgo suficiente para reemplazar al actual mandatarios de los colombianos, pues por fortuna, este país cuenta con una de las clases dirigentes más preparadas y capaces en el entorno regional. Cualquiera que sea el relevo, la continuidad de los propósitos parece asegurada : más seguridad, más crecimiento económico y más cohesión social.





GUYANA: LAND OF MANY WATERS





GUYANA: LAND OF MANY WATERS

MARY NOEL MENEZES

LOCATION AND IDENTITY

Guyana, the only English speaking country in the north literal of the South American continent, is bounded on the north by the Atlantic ocean and the west by Venezuela and the east by Suriname and the south by Brazil. For a South American country Guyana presents a unique profile, English speaking, cricket playing and a mixture of the British and Dutch in its legal system and a member of the Commonwealth and a member of Caribbean community. Although geographically part of South America, Guyana is culturally and historically closer to the Caribbean. Its vast territory of 83,000 square miles (approximately 215 square kilometers) embraces one of the few remaining pristine Rainforests of the world, which boasts of rich vegetation, is traversed by innumerable rivers and dotted with scenic waterfalls. Indeed Guyana is correctly named Land of Many Waters. The main rivers are the Demerara, Essequibo and Berbice. The capital Georgetown is situated on the mouth of the Demerara. One of the highest and most spectacular waterfalls in the world The Kaieteur Falls (741 feet) cascading over the Potaro river. The Guyana territory was so well advertised by Sir Walter Raleigh in “El Dorado” his famous publication: ‘DISCOVERIE OF GUYANA (1596)’ attracted the nations who came seeking gold. The history of the present day Guyana really began with the Dutch Merchants, who, not finding the fabled gold, settled on the Pomeroon river in the north east in 1581 and later on the Abarry and the Essequibo rivers, trading with the native Amerindians in dyes and timber.



MARY NOEL MENEZES

EARLY HISTORY

The definitive history of the colony really began in 1621 with the establishment of the Dutch West Indian Company. Settlements were made along the Demerara, Essequibo and Berbice rivers. In the 17th century slaves were introduced to work on the plantations; by 1667 it was reported that 60,000 pounds of sugar were exported from the colony. Throughout the territory posts manned by post holders were established to oversee the trade with the Amerindians and to help with the re-capture of runaway slaves. One of the outstanding Dutch Administrators was Laurence Storm van's Gravesande, the Director General of Demerara and Essequibo under whom the colony advanced rapidly. He laboured assiduously to contain and protect the western boundary from Spanish incursions and maintained excellent relations with the Amerindians. Above all his invitation to English planters on Barbados to settle in Demerara had far-reaching effects on the burgeoning sugar industry.

The 18th century was one of much upheaval. In 1801 war broke out between the Netherlands and Britain, resulting in British occupation of the colony. The French gained control of the territory which was later restored to the Dutch and finally became a British territory in 1803. In 1814 a Convention was signed between the British and Dutch placing the Dutch territory of the Demerara, Essequibo and Berbice under British rule which lasted un-interruptedly for 150 years until Guyana gained independence in 1966.

THE PEOPLES OF GUYANA

AMERINDIANS

The relationship of the Dutch with the Amerindians now called indigenous peoples was one of trade. The native Indians both



under the Dutch and the British considered themselves free peoples their very names –Lokono and Carinya - ‘the people’ stated a case. The Dutch and later the British paid them for their services for trading and catching runaway slaves with presents, rations and allowances. One of the worst gifts given was rum, which one of the Superintendents of Rivers and Creeks, WCF McClintock called ‘an authorized system of demoralisation’¹. The Dutch and later the British came in contact with a number of tribes: Warraus, Arawaks, Caribs, Patamonas, Wapisiana with sub tribes of Makushi ,Wai-Wais and Arecunas and Akawois. The Amerindians noted for their great respect of their environment and their deep love of the land acknowledged the existence of a spirit world-animism. They relied on their ‘paiman’ the medicine man and feared the ‘Kanaima’ who could call down the evil spirits. They were a greatly stereotyped people- wild, uncouth, savage etc., above all ‘bucks’ from the Dutch word ‘bok’ meaning swift. Unfortunately, there still remains in vogue today the label ‘buck’ which has connotations of lazy and shiftless². Hospitality is the hallmark of their culture. Above all they are the only authentic Guyanese who have a true and thorough understanding of the land. To them we owe the preservation of our rich forests, flora and fauna, rivers, lakes and creeks.

THE AFRICANS

Introduction of African slaves to work on the sugar plantations brought a second dimension to the history of Guyana. For almost two centuries the African was the main contributor of

¹ Minutes of the Court of Policy, 5 November 1850, McClintock’s Report, 30th September 1850. National Archives, Guyana

² Under the British, the word, ‘bok’ was expressed as ‘buck’. See M.N.Menezes, BRITISH POLICY TOWARDS THE AMERINDIANS IN BRITISH GUIANA, 1803-1873. Oxford: Clarendon Press 1977. Ch. 1



MARY NOEL MENEZES

the growth of sugar. Sugar was produced in an atmosphere of degradation, brutality and misery for the slaves. The Dutch planters in Berbice were notorious for ill-treating their slaves resulting in 1763 Slave revolt. Under the British slavery continued, but by the return of the nineteenth century there was reaction in Great Britain - the Movement for Abolition. In 1792 in the House of Commons William Pitt called for an immediate Abolition of the Slave trade but it was not abolished until 1807. The planters in British Guiana and in the Caribbean saw the handwriting on the wall, especially as the restlessness and rebelliousness of the slaves increased. In 1823 there was an insurrection of slaves at Le Resouvenir on the east coast. Fear of the Slaves was dominant. In 1833 the Abolition Act was passed to take effect on August 1st 1834. Apprenticeship was a transitional period for the planters to adjust to the idea of free workers, to mark time for the former slaves to prepare for the responsibilities of freedom and the missionaries to educate the apprentices. During the early emancipation period schools were founded by various religious denominations. An extremely important development during this period was the purchasing of abandoned plantations by former slaves and their founding of the "Village System" a unique development in the Caribbean. Between 1838 and 1844 large purchases were made along the east coast of the Demerara. These villages still exist today.³

MADEIRAN PORTUGUESE

Obviously the planters reacted strongly to this 'village movement' as they feared a peasantry independence of the sugar industry and therefore placed innumerable obstacles in their path. As the planters

³ Pln. Northbrook was renamed Victoria after Queen Victoria at the request of the freed slaves. 83 persons, including two women, bought the Pln. for \$10,284. Pln. Plaisance was bought by 88 labourers for \$39,000 and Pln. Orange Nassau, later Buxton for \$50,000 by 128.



needed a steady and continuous labour force to support the sugar industry they turned to other labour sources . In May 1835 the Portuguese of Madeira were introduced. For reasons of nostalgia sickness and high mortality the Madeiran immigration was temporarily discontinued but later renewed. The Portuguese introduced to work on the plantations did not persevere there, not because they were unfamiliar with growing sugar, but quite the opposite. By 1550 Madeira was the largest sugar producing country in the world. The growth of sugar cane growing in low lying land in British Guiana posed a problem for them. The Portuguese had a long history of trading and turned to shop keeping later they became the major retail and wholesale merchants of the colony, arousing jealousy of both the ruling white elite and the blacks. They were never accepted in the political arena until the early 1900s. The Portuguese also brought with them their Catholic faith and supported the building of churches throughout the colony. A fire in December 2004 destroyed the church of the Sacred Heart built by and for the Portuguese in 1861.⁴

THE EAST INDIANS

The East Indians arrived in May 1838 and became the main indentured labourers on the sugar estates until 1917 when immigration was stopped. Above all they brought their religious beliefs; today the country is dotted with temples (Hindus) and mosques (Moslems); prominent also is the celebration of their festivals of Deepavali, Phagwah, Eid and Youmanabi which are now all national holidays. The Moslems maintain even more now their specific dress; the Indian culture is expressed in dance song and film. The East Indian wedding, the food in particular, curry and roti, as well as many of the other

⁴ At the strong request of the Guyanese people, although most of the Portuguese people have migrated the Church of the Sacred Heart will soon be rebuilt.



MARY NOEL MENEZES

foods are shared by all in the society. Today they have taken the place of the Portuguese as the leading merchants and businessmen and entrepreneurs in the country.

THE CHINESE

In 1853 the Chinese were added to the economic and cultural kaleidoscope. Very much part of the contribution of the Chinese is the ubiquitous Chinese restaurant. In the early twentieth century the Chinese moved into the professions of medicine and dentistry and kept aloof from politics. Notable in the country is the absence of Chinese beggars; the care of the Chinese for their own stems from a strong family tradition. It should be underlined that the Chinese brought with them a background of the oldest civilization of the world but unfortunately the leaders of the country into which they came were ignorant of this fact.

CULTURAL ELEMENTS OF GUYANESE SOCIETY

Each of peoples introduced into the colony brought their specific culture which contributed to the formation of the culture today. The Plantation society imprinted a deep mark on the people's within it. The planter mentality under the Dutch and the British engendered an attitude of superiority on the part of the whites. The Dutch influenced the environment by the introduction of kokers-sluices-to regulate the inflow and outflow of water on the low lying land so similar to that of Holland; also many place names within the country are Dutch: Vlissengen Uitvlugt, Vreed-en-hoop etc; in family names De Groot van Groenegen, Broodhagen etc. The British influenced the subsequent form of government, religion, education, language, dress, social, structure, (tea at four) celebration of colonial events, strong bonds with the mother country England until Independence in 1966. Above



all, cricket became the favourite and most important game of the Guyanese as well as of the Caribbean people and today boasts famous cricketers in the field.

The African slave did not bring only himself/her-self but a rich culture also. The Dutch and the British were ignorant of African culture; the plantation society viewed the slaves as things, chattels, lazy and superstitious. Among the African contributions to the society was their innate love of music, ritual, dance, the language of the drums which gave birth to the calypso, the use of herbs, their ancestor worship and religious beliefs. Educated by the missionaries even before the end of the 19th century the Africans were teaching in the schools and played a prominent role as educators both men and women in the educational system.

POLITICAL DEVELOPMENTS

A bitter legacy of the plantation society was lack of cohesion and its inferiority complex. 'Divide and rule' was a key concept and unfortunately it still is today. The complex combination of race and class has produced social pluralism which is exacerbated by political division. Throughout the 19th Century constitutional clashes between the Court of Policy and the Combined Court in British Guiana and the Colonial Office in London were to a certain extent solved in 1928 when British Guiana became a crown colony. According to Sir Gordon Lethem, Governor of British Guiana, sugar continued to be the 'sheet anchor of our economics'. The 1940s saw the rise of Dr Cheddi Jagan and his wife Janet, advocates of communism, 'the red scare' 'the bitter debates and class struggles which, unfortunately evolved into outright racial strife. In 1966 Guyana's year of Independence was ushered into a country torn between the Marxist ideology of Dr Jagan of the People's Progressive Party (PPP) and



MARY NOEL MENEZES

the socialism of L.F.S. Burnham of the People's National Congress (PNC) leaders of the respective parties. The United Force (UF) leader Peter S. D'Aguiar was a weak opposition. In 1970 Guyana became a Co-operative Republic with a President L.F.S. Burnham. Under Burnhamite socialism 80% of the national economy was nationalised and the paramountcy of the PNC in power stressed. In 1976 the schools, which had been under dual control for over a century, were also taken out of the hands of the churches, under which the country had proudly cited High School enrolment and literacy rates close to 100%. With an acute shortage of teachers at all levels both the human and physical infrastructure of the educational system has declined. Moreover the 1970s saw the beginnings of the Guyana Diaspora which has accelerated over the past years and seriously affected the social and economic progress of the country. The University of Guyana established in 1963 has suffered intensely with the loss of many of its lecturers.

The failure of President's Burnham's policy of 'Cooperativism' led to its power loss. Under President Desmond Hoyte there was a return to privatisation and the country was again opened to international bodies. In 1972 the PPP (People's Progressive Party) returned to power under Dr. Cheddi Jagan who indeed inherited an economically shattered country. Debt-forgiveness helped to sustain the economy but, in general, the country experienced a difficult time, worsened by Dr. Jagan's death in 1997. The Government passed from Jagan into the hands of former Prime Minister, Samuel Hinds, then was inherited by Mrs. Janet Jagan, the able widow of Dr. Jagan, and presently by President Bharrat Jagdeo, former Minister of Finance. Unfortunately, racial divisions, especially between the Africans and East Indians, born at the dawn of independence, gathered momentum over the post-colonial days and still hampers smooth political developments.



Guyana's economic diplomacy showed a *volte face* at the recent meeting of CARICOM states in Barbados when President Bharrat Jagdeo declined to sign the Economic Partnership Agreement (EPA) with Europe in union with all the other Caribbean states. Sir Shridath Ramphal, Guyana's former Foreign Minister and Commonwealth Secretary General, seemingly agreed with this decision, noting that the Caribbean's acceptance of the trade and economic relations with Europe as outlined in the EPA's conditions, shows a loss of "passion, commitment and vision" that once marked Caribbean economic diplomacy.

However, other views re this unilateral stand of the Guyana government have been voiced. Rawle Lewis, Public Accountant, claimed in his article, "An Interesting Dilemma", in STABROEK BUSINESS, 19th September 2008 that, among other economic benefits, "the provisions of the EPA could reach deep into the Guyanese economy and help change the lives of ordinary Guyanese". With the continuing migration of Guyanese to First World countries, seeking to strengthen their economic life, such benefits could well halt the exodus.

HUMAN RIGHTS IN GUYANA

The Guyana Human Rights Association correctly noted that "Democracy and human rights are inseparable". In Guyana, although the human rights story is not a total success, over the past fifty years greater attention has been paid to the rights of women, children, indigenous people, people with disabilities, older persons, and more recently people with HIV/Aids. Unfortunately, those on the criminal side of the economy plunder the wealth of the nation, pay no taxes, launder their money and plan eventually to take their wealth overseas.



MARY NOEL MENEZES

BOUNDARY ISSUES

The 19th century history of British Guiana was an episodic one, encompassing the abolition of slavery the introduction of immigrants under the indenture system, constitutional crises, the discovery of gold and, above all, the beginnings of boundary controversies. The main boundary issue that surfaced was the Venezuela / British Guiana controversy. From the mid 19th century to the end of the century Venezuela had been asserting her claim to the western portion of the Guyana territory. Let us look briefly at the development of this claim.

The early history shows a strong liason between the Dutch and the indigenous Indians welded through treaties of trade and alliance, especially with the Caribs who occupied the territory between the Pomeroon and the Orinoco rivers. An extract from the secret report describing the dominions of the King of Spain in America read :

‘The Dutch settlements in Guyana extend from close to the river Amazonas to the Orinoco –the best settlement they possess in the whole of this coast is that of Nova Zeelandia in the river Paumeron, very near the river Orinoco and close to the city of Santo Thome De la Guiana which belongs to your majesty.⁵

After the Treaty of Munster in 1668 the Dutch strove to consolidate their position in the Guiana territory.⁶ In 1720 the Governor of Cumana, Dom Jose Diguja submitted a lengthy historical description of the Province of Guyana where ‘inter alia’, he stated

⁵ Great Britain. Documents and Correspondence Relating to the Question of Boundary between British Guiana and Venezuela, Biblioteca del Rey, Madrid Ms. (London, 1896, I, 5)

⁶ Menezes, p. 155.



that no other settlement existed in it than the Presidio and the City Santo Thome.⁷

For almost fifty years Venezuela importuned The United States of America to intervene, in support of their claim to the Guyana territory. In 1897 Great Britain agreed to arbitration and signed the Arbitration Treaty- Article 13 of which stated categorically that ‘result of the proceedings of the tribunal of arbitration would be *‘a full, perfect and final settlement of all the questions put to the arbitrators’*.

The Award was supported by Venezuela, Great Britain and the United States but especially by business men in Venezuela. Between 1901 and 1905 the boundary as defined by the award was laid down by a Venezuelan/British Boundary Commission. For over six decades the British, the Venezuelan and the International community accepted the award reproduced in official Venezuelan maps. In 1949 a posthumously published memorandum written by one of the commissioners, Mallet Prevost, in 1944 asserted that the award was null and void on the grounds that it was the result of a political deal between Russia and Great Britain. In 1962 on the grounds of this memorandum Venezuela raised in the United Nations the question of boundary, repudiating the validity of the 1899 award and objecting to the forthcoming independence of Guyana until the question of Boundary was settled. The UK agreed to the re-examination of documents by experts but emphasized that there was not a scrap of evidence to support Venezuela’s claim.

⁷ Documents Relating to the Question of Boundary between Venezuela and British Guiana. Submitted to the Boundary Commission by the Counsel of the Government of Venezuela(Washington, D.C., 1896), p.29.



By the Geneva agreement of the 17th February 1966 the government of Guyana agreed with the government of Venezuela, to establish a Mixed Commission of Representatives of both governments to seek satisfactory solutions for a practical settlement of the controversy between Venezuela and Guyana. Unfortunately, Venezuela breached the agreement as follows: the Venezuelan military invaded the eastern portion of Ankoko island. Venezuela annexed part of the territorial waters between the mouth of the Essequibo and the Waini point. Venezuela objected to Guyana developing the mineral sector in the Essequibo, and also Venezuela interfered in Guyana's internal affairs supporting the conspiracy of the Rupununi ranchers between the end of 1968 and early January 1969.

In 1970 an agreement, the Protocol of Port of Spain was reached providing a 12 year moratorium on the boundary issue. In 1981 Venezuela refused to sign the protocol and the situation remained *in statu quo*. In 1990 the Guyana Defence Force and Venezuela army signed a protocol. Then in mid November 2007 another challenge regarding the boundary arose when a Venezuelan military unit attacked and destroyed two Guyanese dredges followed by unauthorised Venezuelan flights into Guyana air space. The Venezuelans claimed that their military acted to remove illegal miners in and around the Cuyuni river in the San Antonio Eldorado area not in Guyanese territory. Then late in November Venezuela sent an "extraordinary shipment of gasoline and diesel" (16,000 barrels of fuel) possibly to help the fuel crisis in Guyana. According to Alex Sanchez "Guyana's resources and strategic geographical position could make it an important factor for global policy makers" especially to Washington which wishes to gain allies in the region in order to offset Venezuela's influence.⁸ As Sanchez rightly stresses "the Venezuela/ Guyana

⁸ Alex Sanchez, "All is not Well in Georgetown: Guyana's Emerging Hemispheric Role." Council on Hemispheric Affairs.



dispute” could be characterized as a kind of ‘frozen conflict’ zone in which no war has ever occurred nor likely to take place in the near future⁹.

IWOKRAMA PROJECT

Guyana, ever conscious of its natural resources and its vast hinterland, has strongly felt the need to share these resources with the rest of the world. In 1989 President Hugh Desmond Hoyte made available to the Commonwealth and to the world almost one million acres of virgin rainforest for the study of conservation and sustainable utilization. On the 7th May 1996 the Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development (IIC) was commissioned as a legal entity by Guyana’s Parliament. This vast area provides an eco- system of a variety of habitats, including over two hundred lakes, rivers flowing over volcanic dykes, mountains, lowland tropical forests, palm forests and savannahs. These are homes to an extraordinary bio-diversity including over 475 species of birds, the highest recorded number of species of fish, (over 400) and bats (over 90) in the world in an area of comparable size. The youth – the future forest rangers, tree spotters, fish managers are gleaned from the sixteen indigenous communities of Makusi Indians who have been using the forest resources for generations. They will continue to guard and manage the sustainable use of the forest. Sixteen wildlife and environmental clubs have been formed to encourage young people to take an interest in their environment. As Father Malcolm Rodrigues, S.J. forcibly states:

“Without the equitable partnership with the indigenous people sharing their knowledge, skills, expertise, their way of proceeding the dream of Iwokrama

⁹ Ibid.



MARY NOEL MENEZES

*would never have been realize to the level at which it exists today-
Internationally recognized and esteemed scientific entity of a high calibre.”¹⁰*

Indeed the indigenous people of Guyana hold in their hands the key to solving the seemingly insuperable problems of the country, particularly in maintaining that last remaining pristine forests- the lungs of the world.

The government of Guyana is willing to discuss how almost the entirety of Guyana’s forests can be deployed as part of Guyana’s efforts to help in the global battle against climate change. President Bharrat Jagdeo believes strongly that international partnership is the key to devising workable solutions. As Preston James maintains: “everywhere the hands of the past lies heavily on the land.” Presently Guyana is a country riddled with crime violence drugs and corruption. Morals and integrity are no longer values in society. Politics has caused deep divisions in the country and migrations of families to USA, Canada, UK and other countries, continues at an unprecedented rate. As noted there are many threads in our culture; if carefully woven these would make a strong fabric but unfortunately these threads have been unravelled. Hopefully the Guyanese through respect, knowledge and understanding of each other’s culture, race, religion and political leanings, will strive to weave those threads together so that we will indeed become as our country’s motto proclaims: “One People, one Nation, one Destiny.”

¹⁰ Fr. Malcolm Rodrigues, S.J. “Iwokrama Project”. JESUITS AND FRIENDS (Winter, 2007, Issue 68), pp.12-13.



ECUADOR, UN PAÍS EN BUSCA DE LA SENDA PERDIDA...

DE LA CRISIS A LA CONSTITUYENTE





ECUADOR, UN PAÍS EN BUSCA DE LA SENDA PERDIDA... DE LA CRISIS A LA CONSTITUYENTE

ALBERTO ACOSTA¹

Consecuencias de la crisis del tornasiglo

Ecuador concluyó el siglo XX con una de las mayores crisis de su historia. Luego de un prolongado período de estancamiento económico desde 1982, cuando se empezó a sentir los efectos de la grave crisis de deuda externa en todo el continente, al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB. Este declinó en 30,1%, de 19.710 millones pasó a 13.769 millones de dólares. El PIB por habitante se redujo en casi 32%, al desplomarse de 1.619 a 1.109 dólares.

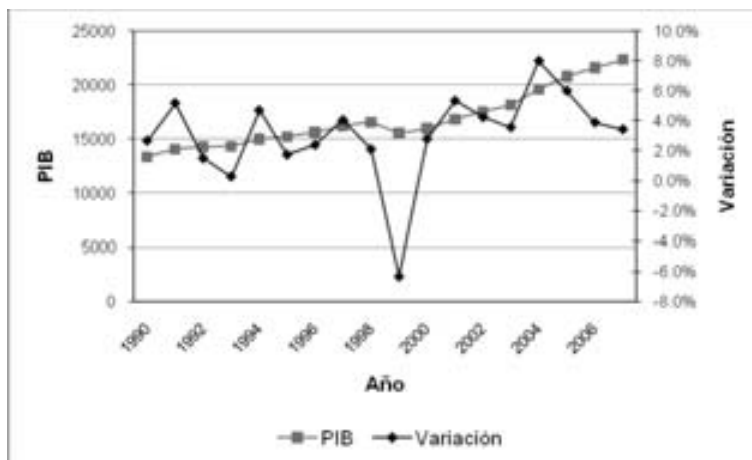
A pesar de quienes sostienen lo contrario, la economía ecuatoriana, como la de casi todos los países de la región, ejecutó y sufrió el recetario del ajuste inspirado en el Consenso de Washington. Desde inicios de los años ochenta, con diversos grados de coherencia e intensidad, en el Ecuador se adoptó una concepción aperturista, desregularizadora y liberalizadora, impuesta a través de múltiples mecanismos, incluyendo chantajes externos e internos. La recuperación de los equilibrios macroeconómicos, para retomar en forma espontánea la senda del crecimiento y alcanzar después la distribución de los frutos del progreso, fue el *leitmotiv* del manejo económico al tiempo que se introducían cambios estructurales en la economía. Las consecuencias están a la vista, pobre desempeño macro-económico acompañado de un alto nivel de volatilidad en la economía ecuatoriana que desembocó en la crisis de 1999.

¹ Ecuatoriano. Economista. Profesor universitario. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente, noviembre del 2007 a junio del 2008.



ALBERTO ACOSTA

PIB real (millones de dólares del 2000) y tasa de variación anual



Fuente: Banco Central del Ecuador.

El país, afectado también por una serie de factores exógenos, como las inundaciones provocadas por el fenómeno de “El Niño” y la caída de los precios del petróleo, experimentó uno de los empobrecimientos más acelerados en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres significativamente, en términos porcentuales de 39,3% a 52,18%; la pobreza extrema casi dobló su número, el salto relativo fue del 13,60% al 20,12%.² El ingreso por habitante del Ecuador alcanzó apenas un 43% del promedio latinoamericano. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementaba su participación del 52% a más del 61%. Esta inequidad es, sin duda alguna, una de las principales explicaciones de la pobreza.³

² Con una proyección de algo más de 13 millones de habitantes para 2005, con una tasa de crecimiento de 2.3%, Ecuador es uno de los países con más alta densidad poblacional de América Latina.

³ Esto es sobre todo preocupante, pues en este país la capacidad productiva disponible podría satisfacer la demanda de bienes y servicios de toda la población, de existir una



Evolución de la pobreza y la extrema pobreza de consumo
(% del total de la población)

ECV	1995		1998		1999		2006	
	Pobreza	Extrema Pobreza	Pobreza	Extrema Pobreza	Pobreza	Extrema Pobreza	Pobreza	Extrema Pobreza
Región								
Costa	36,07	9,06	46,44	16,50	52,85	15,98	40,31	10,85
Sierra	41,73	18,53	42,15	21,77	51,44	24,65	33,75	12,20
Amazonia	60,57	23,80	50,04	22,25	n.d.	n.d.	59,74	39,60
Área								
Campo	63,00	27,37	66,75	33,91	75,05	37,68	61,54	26,88
Ciudad	23,02	4,11	28,72	7,80	36,39	7,99	24,88	4,78
Nacional	39,34	13,60	44,75	18,81	52,18	20,12	38,28	12,86

Fuente: SIISE-INEC con base en INEC, ECV. Varios años.

Tomado de: SENPLADES – PNUD – FLACSO – CISMIL, *II Informe Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - Ecuador 2007. Alianzas para el Desarrollo*, Quito.

La consecuencia lógica de esta evolución económica fue el masivo desempleo y subempleo; la caída de los ingresos; la reducción de las inversiones sociales: salud, educación, desarrollo comunitario, vivienda; la creciente inseguridad ciudadana; el deterioro de la calidad de vida; y, la reducción vertiginosa de la confianza en el país...

A lo largo de este período el Ecuador realizó denodados esfuerzos para sostener una relación armónica con el sistema financiero internacional. Los programas de estabilización y de ajuste estuvieron orientados a garantizar el servicio de la deuda; a modo de ejemplo, los ingresos obtenidos por la posterior recuperación de los precios del petróleo eran ahorrados para sostener puntualmente el servicio de la deuda externa. Junto a este objetivo explícito aparece el pretendido

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza. La inequidad no solo se manifiesta en el campo económico y social, pues hay otras facetas culturales, étnicas, regionales, ecológicas y por cierto de género.



reordenamiento de la economía, en el marco del mencionado Consenso de Washington.

Con el Club de París se renegotió en siete oportunidades. A la séptima ronda de negociaciones el Ecuador llegó urgido por la dolarización. Con la banca comercial se repitieron en otras tantas ocasiones las negociaciones. En agosto de 1999, ante la manifiesta incapacidad de pago, el país se vio forzado a declarar la moratoria de los Bonos Brady y de los Eurobonos, con la complicidad del FMI y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De esta situación de moratoria el Ecuador salió el 2000 con una nueva fórmula de arreglo, forzada también por la dolarización, emitiendo los Bonos Global.

El objetivo de esta última renegociación, reconocido expresamente, fue “encaminar al Ecuador hacia la reapertura del acceso a los mercados internacionales (manteniéndose al día con el pago de obligaciones internacionales)”. Con dichos Bonos Global se buscó, también, “maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos (Deuda amortizable)”. De paso se pretendía aliviar las cuentas fiscales, al menos en el corto plazo, mejorando los índices de sustentabilidad de la deuda.

Algunas cifras permiten comprender de mejor manera la magnitud del esfuerzo derivado del servicio de la deuda externa. El Ecuador, desde 1982 al 2003, pagó por concepto de capital e intereses 98.602 millones de dólares y en el mismo lapso recibió por desembolsos 86.704 millones. Lo cual generó una transferencia neta negativa de -11.898 millones, mientras que la deuda creció de 6.630 millones en 1982 a 11.300 millones en 2004. Este servicio de la deuda estranguló literalmente a la sociedad durante 1999, por varios meses, pues a gran parte de la burocracia -soldados y policías, médicos y enfermeras,



profesores- no se les pagó sus salarios. El gasto social se redujo. Y la economía entró en una profunda recesión.

A la sangría crónica de recursos provocada por la deuda externa se podría añadir lo que ha significado la transferencia de recursos por el deterioro de los términos de intercambio, la fuga de capitales, las cuantiosas remesas de utilidades particularmente de las empresas petroleras, que, en muchas ocasiones, no tributan lo que les correspondería.

Un punto aparte merece el deterioro cuantitativo y cualitativo, de las actividades e inversiones sociales, con la educación a la cabeza, a causa también de las menores disponibilidades fiscales provocadas por los crecientes requerimientos para servir la deuda. Las inversiones sociales, dentro del Presupuesto del Estado, cayeron de un 50% en 1980 a un 16% en el 2005; mientras que el servicio de la deuda, en el mismo período, se incrementó del 18% a más del 50%, en algunos años.

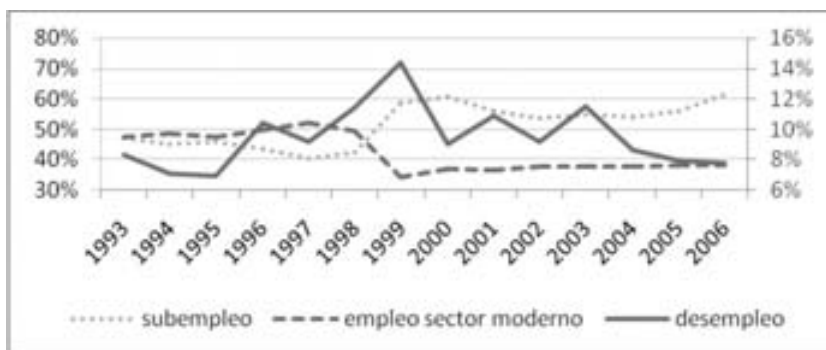
En tales circunstancias, al entrar el país en la mayor crisis de su historia e incluso como consecuencia de los mecanismos adoptados para enfrentarla, se inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes. En efecto, según varias estimaciones, desde el 2000 al 2005, mucho más de un millón de ecuatorianos habrían salido del país; hay cálculos que establecen que el número de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior podría bordear los 3 millones. Justamente en estos años de emigraciones masivas, se registra el ingreso de personas provenientes de los países vecinos: unos 500 mil provenientes de Colombia y de más de 150 mil del Perú, atraídas, en gran medida movidas por una economía dolarizada; el caso de la presencia colombiana, por estar vinculada a los efectos de la violencia en Colombia, es un factor a tomarse en cuenta.



ALBERTO ACOSTA

En este contexto, el aporte de la dolarización asumida como la tabla de salvación a la crisis económica en enero del 2000, no rindió los frutos ofrecidos. Por el contrario, la ansiada reducción de la inflación, que estaba lejos de una hiperinflación, se demoró casi 5 años hasta alcanzar niveles internacionales, con el consiguiente deterioro del costo de vida y de la competitividad del aparato productivo. Las tasas de interés, que se esperaba bajen con la dolarización, se mantuvieron en niveles elevados, superiores a las existentes en créditos en dólares en muchos países vecinos sin dolarización. La precarización laboral se incrementa a través del subempleo que pasa de alrededor del 49% en los 1990s a alrededor del 62% en el 2006. . Esto explica el mantenimiento e incluso la expansión de los flujos emigratorios desde que se introdujo la dolarización.

Desempleo, subempleo y ocupados en el sector moderno



Fuente: Encuestas de empleo y desempleo del área urbana. INEC.

En este escenario de crisis prolongada, la historia reciente del Ecuador ha sido la historia del masivo irrespeto e incluso sistemático dismantelamiento de muchas de sus instituciones. La misma Constitución Política del Ecuador, expedida en 1998, fue permanentemente atropellada. Esta es una constante en un país que registra una veintena constituciones

desde su separación de la Gran Colombia en 1830. Para comprender mejor el desgate institucional del Ecuador, basta con recordar que prácticamente desde diciembre del año 2004, por casi un año, no hubo Corte Suprema de Justicia, ni Tribunal Constitucional; que la Fiscalía funcionó con un subrogante por muchos meses y que, por varios años, se registró una situación similar en la Contraloría General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo.

Desde el ámbito económico, la decisión de dolarizar oficialmente la economía golpeó la institucionalidad democrática, pues violó los artículos 261 y 264 de la Constitución, que establecen que el Banco Central del Ecuador era el ente responsable de la política monetaria, cambiaria y financiera, y el sucre era todavía la moneda nacional. Una violación similar se dio con las leyes que se derivaron de la dolarización y de la necesidad de consolidar su vigencia.

En el ámbito fiscal, para asegurar los recursos necesarios para atender las demandas de los acreedores externos, las autoridades no dudaron en crear y reformar leyes -además de cambiar metodologías de cálculo- para limitar el gasto fiscal, convertir ciertas asignaciones en rígidas, todo para reducir artificialmente los ingresos del presupuesto desviando los excedentes del precio del petróleo hacia fondos de estabilización, entre otros. Muchos de estos ajustes se los hizo en contra de las normativas vigentes: a través de leyes se atropelló la Constitución Política de la República y con reglamentos se ampliaron o incluso tergiversaron las leyes. Se creía, incluso, que se podía legislar vía reglamentos ya que todo sería reglamentable, incluso la Constitución sin que medie ley alguna.

Aquí cabe recordar también el salvataje bancario que se inició en 1998. A contrapelo del dominante discurso del libre mercado, no faltaron intervenciones del Estado a favor de bancos en situación crítica, a partir



del salvataje del Banco Continental durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. El problema se agudizó en el gobierno de Jamil Mahuad, cuando, a fines de 1998, se estableció, por recomendación del Banco Mundial, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que asuma la garantía de todos los depósitos prácticamente sin límites en los depósitos, mientras que los banqueros no estaban obligados a entregar garantías adecuadas por los préstamos obtenidos para sus empresas. (En esa época, incluso se eliminó el impuesto a la renta a cambio de un impuesto a la circulación de capitales, decisión que agudizó la fuga de capitales y por ende la crisis financiera y cambiaria, que condujo a la crisis monetaria).

Un punto culminante de este proceso se dio en marzo de 1999, cuando para proteger a la banca el gobierno decretó primero un feriado bancario y luego congeló los depósitos de los clientes de los bancos, pulverizando los más mínimos derechos de propiedad violando abiertamente la Constitución. Luego se concretaría el salvataje masivo, que representó la entrega de miles de millones de dólares al sistema al asumir el Estado, de diversas maneras, el 70% del patrimonio y el 60% de los activos de la banca. El costo total de esta operación superó los 8 mil millones de dólares.⁴

En esta ocasión, la Superintendencia de Bancos brilló por su ausencia en términos del cumplimiento de su misión. Es cierto, antes ya fueron mermadas sistemáticamente sus funciones de control y regulación. En todo este proceso la AGD, en lugar de atender los objetivos para los que fue creada, o sea satisfacer las demandas del bien público, se convirtió en una instancia para ocultar sistemáticamente

⁴ El salvataje representó solo en el año 1999 casi el 30% del PIB, una de las mayores cifras registradas a nivel mundial en este tipo de operaciones: 15% en el Sudeste Asiático entre 1995 y 1997, mientras que el promedio de América Latina fue de 8,3%.



la información y para cubrir las espaldas de los dueños de la banca intervenida y de los grandes morosos de dicha banca.

En el ámbito político las cosas no anduvieron mejor. Tres presidentes -Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005)- fueron derrocados por la presión popular, ante el fracaso de su gestión. Su salida, al margen de las disposiciones legales, afectó la institucionalidad democrática y por cierto constitucional. En estos años, las organizaciones básicas de la institucionalidad jurídica e incluso política sufrieron repetidos atropellos. Estos abusos y abordajes a la función judicial hicieron que el Ecuador sufra un grave retroceso de más de muchísimos años en los pocos adelantos que se habían logrado en materia de administración de justicia y reforma judicial.

Es preciso reconocer, también, que el marco jurídico nacional fue obligado a procesar normatividades internacionales en varios campos: laborales, propiedad intelectual, inversiones, tributario, deuda externa, entre otros. El Derecho Internacional Público ocupó lo que fue espacio reservado al derecho privado de los contratos. Este es el resultado de una acción tipo tenaza: por un lado, las normas y prácticas globales asedian a los frágiles Estados del mundo subdesarrollado y por otro, desde los mismos Estados se les abre la puerta para que estos “intrusos” incidan en la vida nacional.

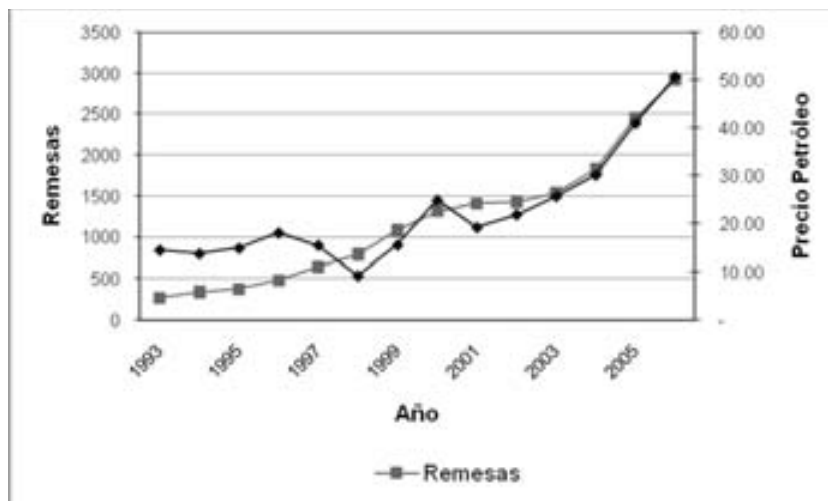
En la actualidad, si bien el país se encuentra inmerso en un problema global, definido por organismos especializados, como la FAO, de “crisis alimentaria mundial”, su economía parecería estabilizada gracias a una serie de factores exógenos. La dolarización se financia gracias a varios puntales: el petróleo, este momento con precios altos, y las remesas de los emigrantes. Los altos precios del petróleo, sin embargo, ocasionan presiones inflacionarias por la vía de los altos precios del transporte



ALBERTO ACOSTA

internacional e incluso de los insumos agropecuarios. Las remesas, superiores a las inversiones sociales, han ayudado a disminuir la pobreza como complemento del ingreso familiar.

Precio del petróleo (dólares) y monto de remesas (millones de dólares)



Fuente: Banco Central del Ecuador

Otro factor externo positivo fue la recuperación de la economía de los EEUU, en donde se coloca más del 40% de las exportaciones ecuatoriana. Las bajas tasas de interés en el mercado financiero internacional fomentaron el endeudamiento externo privado. La depreciación del dólar ayudó a recuperar marginalmente los bajos niveles de competitividad. No se podría marginar de este rápido análisis el ingreso de narcodólares. Y por cierto cabría anotar que las perspectivas de una economía en transición, en la que se hacen esfuerzos por dejar a tras la época neoliberal, se han ensombrecido por la debacle financiera en Wall Street...

Las políticas del gobierno del presidente Rafael Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, paulatinamente

han empezado a revertir la tendencia decreciente del crecimiento económico del país, pero que igualmente se han mejorado los índices de inserción laboral, el control de la inflación y la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, la pobreza nacional (urbana-rural) estuvo a finales de 2006 en el 37,60%, un año después en el 36,74 y en junio en 34,97%. En cuanto a la pobreza extrema, el dato nacional en 2006 fue de 16,89%, en 2007 el 16,45% y en junio pasado fue de 15,49%. La obra pública, sobre todo en vías de comunicación, dejando de lado las ataduras impuestas al funcionamiento del aparato estatal, comienzan a rendir frutos positivos.

Adicionalmente, para concluir este punto, deben ser mencionados algunos problemas estructurales mutuamente interrelacionados, que han empezado a ser abordados por el actual gobierno:

- La debilidad y fragilidad del mercado interno, a causa de las enormes desigualdades en la distribución de la riqueza, del bajo poder adquisitivo de las masas (pobreza) y de una creciente concentración del ingreso y los activos en pocas manos (inequidad); concentración que motiva, también, la creciente pobreza.
- La presencia de amplios sistemas de producción atrasados (con baja productividad de la fuerza de trabajo, pero con elevada productividad del capital) y de relativamente reducidos segmentos productivos modernos (con alta productividad de la fuerza de trabajo, pero con bajísima productividad del capital); situación que caracteriza la heterogeneidad estructural del aparato productivo. Esta realidad explica también la poca capacidad de absorción de la fuerza de trabajo en actividades productivas con



importantes niveles de competitividad y la desigualdad en la distribución del ingreso y los activos.

- La ausencia de políticas generadoras de empleos estables y de calidad, que incorporen sistemáticamente la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo.
- La carencia de una adecuada integración entre las diversas regiones del país y el débil desarrollo de las ciudades intermedias y pequeñas, agobiadas por diversas manifestaciones de centralismo gubernamental y de concentración de la riqueza privada en manos de reducidos segmentos de la sociedad.
- Los escasos encadenamientos productivos y de consumo; a lo cual se suma la reducida vinculación sectorial, en particular de la agricultura con la industria y de las actividades de exportación con el resto de la economía.
- La inexistencia de una adecuada política fiscal y de una estructura tributaria equitativa y eficiente, además de un gasto público insuficiente, inequitativo, ineficiente y hasta dispendioso en algunos rubros.
- La elevada propensión marginal a importar, no sólo maquinaria, equipo y materias primas, sino también, bienes de consumo duradero y no duradero, como consecuencia de la consuetudinaria dependencia externa, en especial tecnológica y cultural, agravada en los últimos años como resultado directo de la dolarización.
- El mal manejo administrativo del Estado, una marcada arbitrariedad burocrática y una gran cantidad de ineficiencias acumuladas a lo largo de la historia.
- El irrespeto casi permanente a la institucionalidad democrática y a la misma Constitución, que ha aumentado la inestabilidad política y que deteriora la imagen internacional del país.

- Las masivas ineficiencias del sector privado, así como la falta de empuje y capacidad innovadora de gran parte del segmento empresarial, infectado por la inercia del rentismo y de los clientelismos de antaño, que se reproducen con el ajuste estructural y con la misma dolarización.
- La existencia de estructuras oligopólicas y aún monopolísticas que frenan el desempeño de los mercados. Aquí se destaca un sistema financiero ajustado a las estructuras oligárquicas del país, que carece de transparencia y eficiencia, al tiempo que reproduce sistemáticamente las tendencias concentradoras y excluyentes.
- La corrupción generalizada en toda la sociedad, no sólo en el sector público.

LA OPCIÓN CONSTITUYENTE COMO PALANCA PARA LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES

En estas condiciones, como resultado de la crisis y como consecuencia de una propuesta de cambios profundos respaldada crecientemente por la sociedad, se cristalizó el triunfo del ahora presidente Correa a fines del año 2006. Dicha propuesta tenía como uno de sus ejes medulares la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Compromiso que se ratificó el 15 de abril de 2007, cuando con una abrumadora votación los electores en un 82% se pronunciaron a favor de la convocatoria a dicha Asamblea. Posteriormente, el 30 de septiembre del mismo año, la propuesta de cambio fue reafirmada con la elección de una amplia mayoría de asambleístas portadores de la misma (El movimiento Acuerdo país obtuvo 80 de los 130 escaños). Y el 28 de septiembre del 2008, luego de finalizada la Asamblea en julio, con una contundente mayoría de más del 64% de los votos emitidos, el pueblo ecuatoriano aprobó la nueva Constitución.



El objetivo de esta Asamblea Constituyente fue generar un nuevo texto constitucional para construir una democracia activa, radical y deliberativa orientada a consolidar y garantizar los derechos civiles, políticos, sociales y colectivos. En su mira está también propiciar un modelo participativo a través del cual todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer el poder, formar parte de la toma de decisiones públicas y controlar la actuación de sus representantes políticos. Definir instrumentos, normas y procedimientos que controlen y fiscalicen la actuación de la administración pública para la obligatoria rendición de cuentas y para que los tribunales electorales, las cortes de Justicia, los organismos de control y el Congreso no sigan siendo cuevas de las mafias políticas vinculadas al poder económico de la oligarquía y de la banca. Generar un Estado descentralizado que transfiera no sólo competencias sino recursos y poder de decisión para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dinamizar la economía local y acabar con el centralismo excluyente e ineficiente. Reducir el hiperpresidencialismo neoliberal, plasmado en la Constitución de 1998, implica, por igual, dismantelar aquellos mecanismos que alientan el chantaje y las prácticas mafiosas desde el parlamento, que se extienden a los diversos tribunales de control republicano como el Tribunal Supremo Electoral, el tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría de la Nación.

No se buscó sólo introducir ajustes más o menos importantes en la institucionalidad política. Está en juego la posibilidad de que la sociedad se apropie en forma articulada de la discusión de los grandes temas nacionales. Para lograrlo, la sociedad movilizadora tendrá ahora que adueñarse de la Constitución y luego presionar para que se cumpla lo acordado. Conjugando el verbo participar, la tarea es apostar por la democracia en serio. El objetivo es hacer de la democracia un ejercicio normal en la vida política nacional.



Entonces, cuando se instaló la Asamblea Constituyente, el 29 de noviembre del 2007, se asumió una tarea compleja: abrir la puerta a la esperanza. Esta Asamblea sintetizó una oportunidad histórica. En un esfuerzo sin precedentes se comenzó a pensar colectivamente en el futuro del Ecuador, no como individuos sino como una sociedad de iguales y libres, decididos a mejorar las condiciones de vida de toda la población, en especial de esos cientos de miles de personas marginadas, explotadas, olvidadas... muchas de las cuales visitaron la Asamblea en Montecristi o fueron parte activa de los debates constituyentes en tantas esquinas del país.

Encargada a las mesas constituyentes la elaboración de textos constitucionales, estos debían ser sometidos a consideración y debate del Pleno de la Asamblea, de todos los asambleístas elegidos por el pueblo ecuatoriano y también de la opinión pública y demás actores. Esa ampliación del debate dotó a la Constitución de una representación mayoritaria, convirtiéndola en un hecho político, ciudadano, contrariamente a la costumbre instalada de pequeños cenáculos de poder que acuerdan, sin la opinión popular, el destino nacional.⁵

El objetivo fue y es construir democráticamente una sociedad democrática; si el camino no es democrático, el destino no será la democracia. Con la nueva Constitución los ciudadanos y las ciudadanas

⁵ Es esa apropiación, esa incorporación de ideas de esperanza y bien para todos -que demandaba sus tiempos- lo que se debió confrontar con la premura del cronograma, de la fecha límite. Como es conocido, la posición del suscrito para ampliar el tiempo de la Constituyente -coherente con que piensa y en lo que cree, y que se sustenta en la deliberación democrática- no recibió el soporte y apoyo que requería. En consecuencia, renunció a la Presidencia de la Asamblea Constituyente, a la cual fue elegido por casi unánime adhesión. Se opuso a esa suerte de embutimiento de textos, a forzar las intervenciones de los Asambleístas y a limitarlas. La manera como se concluyó con lo encomendado, lamentablemente le ha dado la razón. Pero eso, sin embargo, más allá de algunos errores lamentables en la redacción, no afecta el sentido histórico de la Constitución de Montecristi.



tienen en sus manos la definición del presente y la construcción del futuro: el poder es para la ciudadanía. Sin ningún afán por concentrar el poder político, todo lo contrario, se aprobó la no reelección indefinida de ninguna persona escogida con el voto popular. Se estableció la revocatoria del mandato presidencial, con la condición de que el legislativo, que promueva esa iniciativa de revocatoria, se disuelva. En contrapartida, el presidente puede disolver por una sola vez durante su mandato al legislativo, pero que al momento de elegir a los nuevos diputados, la ciudadanía al mismo tiempo decida si el presidente continúa en su cargo. Igualmente, se constitucionalizó la independencia partidista de los tribunales de la República. Se alienta un reordenamiento territorial y administrativo solidario y eficiente, sustentado en regiones descentralizadas y autonómicas construidas sobre bases históricas y de alianza de oportunidades, fortalezas e identidades, decididas por sus habitantes y que consoliden efectivamente la unidad del Ecuador. Siempre más democracia, nunca menos.

El valor básico de la economía es la solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que es la que ha alimentado la especulación financiera. A partir de esa definición se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y cooperación que propicien la eficiencia y la calidad. El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado; por lo tanto, se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores, como en la época neoliberal; por eso los bancos tendrán que vender todas sus empresas no vinculadas a la actividad financiera, incluyendo sus medios de comunicación. Se persigue una economía que garantice el derecho de propiedad bien habida. Pero también el derecho a



la propiedad de quienes nada o muy poco tienen. El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribió cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización; incluso el incumplimiento de las normas laborales puede ser penalizado y sancionado. Por otro lado se prohíbe toda forma de persecución a los comerciantes y los artesanos informales.

En lo social se priorizaron las inversiones en educación y salud (al menos 6 y 4% del PIB, por lo menos, respectivamente), en tanto derechos humanos; educación y salud serán gratuitas; se incluyó la gratuidad de la educación en el nivel universitario. Se aprobó la universalidad de la seguridad social, de ninguna manera su privatización. Todo este esfuerzo en lo social se complementa con una serie de disposiciones para superar tanto el machismo como el racismo, así como toda forma de exclusión social.

La lucha en contra de la corrupción merecerá un tratamiento especial por parte del poder ciudadano. No se puede permitir que la impunidad cubra tantos atracos a los recursos del pueblo ecuatoriano. Con sanciones ejemplarizadoras, con mayor transparencia y creciente participación ciudadana se combatirá esta lacra, que ha crecido de una manera imparable en los últimos años.

En esta carta magna se consolidan los derechos políticos de los emigrantes. No sólo que podrán votar en las elecciones ecuatorianas y que tendrán representantes a la Asamblea Nacional, elegidos por ellos, sino que podrán impulsar varias iniciativas políticas, inclusive de ley. El Estado generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, para que dicho ahorro se oriente hacia la inversión productiva de calidad que decidan los propios emigrantes. También se



estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lograrlo se contará con el aporte de las personas domiciliadas en el exterior. En un gesto de coherencia con la defensa de los derechos de los compatriotas en el exterior, esta Constitución asegura similares derechos a los extranjeros y a los ecuatorianos: los extranjeros que tengan residencia de cinco años en el Ecuador, por ejemplo, podrán ejercer el derecho al voto, sin necesidad de acuerdos bilaterales con sus países de origen; no podrán ser devueltos o expulsados a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados. No se espera a que cambie el mundo para recién entonces avanzar en el campo de la migración, se actúa para provocar el cambio del mundo.

En sintonía con estas propuestas se impulsa el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. Para lograrlo se promueve la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en dicha región; la instrumentación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y, la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

Esta Constitución, la más ecuatoriana de la historia republicana, que ofrece una categórica propuesta de descentralización y autonomías, sobre bases de solidaridad y equidad, abre la puerta también a la integración regional. Ese es un paso fundamental para que los pueblos de Nuestra América puedan insertarse con dignidad e inteligencia en el



contexto mundial. Y para hacerlo empieza declarando al Ecuador como un territorio de paz, en donde no podrán asentarse fuerzas militares extranjeras con fines bélicos, ni ceder bases militares nacionales a soldados foráneos; una decisión que coincide con la resolución del gobierno del presidente Correa para cerrar el año 2009 la base militar norteamericana en Manta.

Esta es, en una apretada síntesis, la nueva Constitución, un proyecto colectivo escrito ahora pensando en el mañana. Un proyecto que permita tener una vida equilibrada entre todos los individuos, con la colectividad y con la Naturaleza. Nunca se puede olvidar que lo humano se realiza en comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza. Por eso, en forma pionera a nivel mundial, en la nueva Constitución se ha establecido que la Naturaleza es sujeto de derechos. Y de allí se derivan decisiones trascendentales: el agua es asumida como un derecho humano, que cierra la puerta a su privatización; la soberanía alimentaria se transforma en eje conductor de las políticas agrarias y de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad, para mencionar apenas un par de puntos. Con esta Constitución, sin embargo, aún cuando se superen las prácticas neoliberales, no se asegura la finalización del régimen de desarrollo extractivista dependiente, determinado por las lógicas del mercado mundial.

Por lo expuesto, que apenas sintetiza algunos puntos de los conseguidos en Montecristi, luego de terminado el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, empieza el verdadero proceso constituyente. Esto significa disputar el sentido histórico del desarrollo, que en la actualidad, incluso dentro de la tendencia de cambio, se centra en el enfrentamiento de las tesis neodesarrollistas que se sustentan todavía en el extractivismo enfrentadas a las tesis de un desarrollo que busque consecuentemente el Buen Vivir, es decir que garantice la armonía entre sociedad, economía y Naturaleza.



ALBERTO ACOSTA

La consolidación de estas normas constitucionales en nuevas leyes y en renovadas políticas, es una tarea que convoca a los habitantes del campo y de la ciudad a seguir caminando por la senda de las movilizaciones. La ciudadanía tendrá que apropiarse de la nueva Constitución. Habrá que impedir que se trate de vaciar de contenido a la nueva Constitución, sobre todo ahora que ésta ha recibido el masivo respaldo de la sociedad.

Hay que tener presente que no hay portadores únicos de esta propuesta de cambios transformadores e incluso revolucionarios. Los y las asambleístas apenas han consolidado, convertido en norma del Estado, todas las voces de esperanza, de cambios revolucionarios; las propuestas de tantas mujeres y hombres, indígenas, afroecuatorianos, cholos, montubios, mestizos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, campesinos, maestros, jubilados, emigrantes, ecologistas, amas de casa, empleados, profesionales, comunicadores sociales, artesanos, pescadores, artistas, investigadores, empresarios pequeños, medianos e incluso algunos grandes que han apostado por el país y su desarrollo. Se contó con su valiosa memoria acumulada en tantas jornadas de lucha popular. Sólo con el concurso de todos y de todas se podrá contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y libre, que es lo que ha orientado en la elaboración de esta nueva Constitución, entendida como un proyecto de vida en común.

Los futuros acuerdos políticos, indispensables para enraizar la nueva Constitución, tienen como condición innegociable sustentarse en el sentido de país, aportar al Buen Vivir, al bien común, y no sacrificar los intereses nacionales en beneficio particular de personas, gremios y corporaciones; los privilegios de unos pocos son insostenibles. A diferencia de las prácticas de los grupos oligárquicos (responsables de la crisis nacional) que han controlado el Estado durante décadas, no se quiere ganar posiciones simplemente con la fuerza del número o el peso del ejercicio del poder, sino con la fuerza de la organización ciudadana. Por eso parece necesaria la conformación de un gran frente nacional constituyente, que se proyecte

más allá del referéndum, para que la Constitución sea realmente de todos y de todas, no de un gobierno en particular.

La responsabilidad es grande y compleja. El proceso participativo debe superar aquellas formas elitistas, carentes de representatividad y representación. Necesariamente debe incorporar la pluralidad de expresiones, visiones e ideales del nuevo Ecuador. No se trata de reencontrarse con la senda de crecimiento económico, sino de transitar por nuevos caminos que abran la puerta a un proceso de permanente democratización de la sociedad.

La sociedad tiene una nueva Constitución por la que vale la pena luchar. Una Constitución que convoca a seguir debatiendo y aprehendiendo, en la búsqueda de que lo enunciado se vuelva parte de la vida de todos los días, de los emprendimientos individuales y colectivos, de la correspondiente asunción de responsabilidades.





**PARAGUAY: DICTADURA,
TRANSICIÓN Y COMUNIDAD
INTERNACIONAL**







PARAGUAY: DICTADURA, TRANSICIÓN Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

MILDA RIVAROLA

Pese a ser descrita literariamente como la “isla rodeada de tierra”, el Paraguay contemporáneo estuvo –y sigue estando– estrechamente ligado al desarrollo regional y mundial. Mal podrían explicarse su última dictadura y su inacabable “transición” sin apelar a variables internacionales. Precoz en sus regímenes autoritarios y con notable rezago en su institucionalización democrática, los procesos locales adecuaron sin embargo su lógica a la de la historia occidental, desde los tiempos de la Guerra Fría hasta los de la Globalización.

Lo que no implicó necesariamente pérdida de “unicidad”: desde el sesgo totalitario de la dictadura surgida a mediados de los años '50, hasta la alternancia liderada por un ex obispo a inicios del siglo XXI, muchos elementos contribuyen a la excepcionalidad política –“pays pittoresque”, según los viajeros del XIX– de esta nación latinoamericana.

A diferencia de otras dictaduras militares de la región, la de Alfredo Stroessner buscó y logró cooptar la sociedad y reestructurar el sector privado. Bajo ese régimen existía una sola central obrera (CPT) integrada al Ministerio de Justicia y Trabajo. Organizaciones gremiales paralelas solapaban las representaciones autónomas, y las corporaciones patronales -ARP, UIP y Feprinco- no ocultaban su identificación con el gobierno¹.

¹ La primera parte de este trabajo resume ítems del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, redactadas por la autora, que está en proceso de impresión.



De hecho, el gran empresariado paraguayo de la segunda mitad del siglo XX nació de contratos y licitaciones, políticas crediticias y tolerancias tributarias del Estado; ante la ausencia de desarrollo industrial, las clases medias se nutrieron del empleo público, y los programas de colonización agraria reestructuraron tanto al campesinado como a los nuevos sectores agroindustriales.

En ese régimen de partido-estado, el ingreso al ejército y al servicio civil suponía forzosa y excluyentemente la afiliación colorada. Al lado de cúpula militar, detentaba el poder² un partido de masas – la Asociación Nacional Republicana- que llegó a albergar en sus filas las tres cuartas partes del electorado nacional.³

TIEMPO Y CARÁCTER DE LA DICTADURA

El estronismo se implantó mucho antes de la secuela de golpes militares que destituyó a Joao Goulart en el Brasil y a Paz Estenssoro en Bolivia (1964), a Illia en Argentina (1966), y los gobiernos de Chile y Uruguay (1973). Si estas dictaduras “burocrático-autoritarias” (G. O’Donnell) del Cono Sur compartieron con la paraguaya la violación de derechos humanos, carecían sin embargo de un soporte político-partidario, mantenían un liderazgo corporativo-militar y se asumían como gobiernos de excepción.

También aquí las Fuerzas Armadas dieron respaldo armado al gobierno y jugaron un rol central en su aparato represivo. Tras depurar el cuerpo de jefes y oficiales, Stroessner ganó la fidelidad del ejército con privilegios económicos: cargos en entes

² A diferencia de los Directorios o Conducciones Nacionales de otros partidos, las autoridades de la ANR integran una “Junta de Gobierno”, título que conserva anacrónicamente hasta la actualidad.

³ En 1989 estaban afiliados unos 1.700.000 colorados, de los 2.226.000 inscritos en el padrón nacional, ver Ardití, Benjamín, *Adios a Stroessner*. CDE – RP Asunción.1992, pp 166, 213.



del Estado, distribución de tierras fiscales y carta blanca para la protección del contrabando y el narcotráfico.⁴

La Asociación Nacional Republicana aportó el sustento político; funcionó como partido-único hasta 1963, y como partido hegemónico hasta inicios de los '90. Esta asociación surgida en el siglo XIX, liberal en sus orígenes y nacionalista desde la posguerra del Chaco, apoyó políticamente al dictador y a la comandancia militar. Unas 230 seccionales administraron el masivo clientelismo⁵ y en diversas ocasiones sumaron milicias a las prácticas contra-insurgentes.

Tras el golpe militar del '54, la Junta de Gobierno postuló al jefe golpista como candidato del partido Colorado⁶, al que Stroessner convirtió en “herramienta de legitimación de su régimen, un instrumento para extender su propio poder y un partido de masas que podía usarse tanto en la movilización de apoyos como en la represión de oposición”.⁷

En cierta forma, él resolvió a su favor la crisis de hegemonía entre jefes militares y colorados prolongada desde 1947. El General-presidente hacía de jefe de las FF.AA. frente al partido y de líder colorado frente a los militares. Con el discurso de “democracia sin comunismo” ligado a la Doctrina de Seguridad Nacional, impuso un sistema que se pretendía legal y reivindicó la “unidad granítica” de las FF.AA., el partido Colorado y el gobierno.

⁴ Mora, Frank O. y Cooney, Jerry, *Paraguay and the United States: Distant Allies*, Athens, The University of Georgia Press, 1997, p 130.

⁵ Aproximadamente 12% de la PEA activa estaba empleada en el sector público.

⁶ Lewis, Lewis, Paul .H, *Paraguay Under Stroessner*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980, pp 63-44

⁷ Lambert, Peter, “The regime of Alfredo Stroessner” en *The transition to democracy in Paraguay*, P. Lambert y A Nickson (Eds), New York, St. Martin's Press, 1993.



Stroessner se situó en la cima de estas tres instituciones, ejerciendo control absoluto sobre el régimen.

Según un analista, “la vinculación entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, con el vértice en la figura del Gral. Stroessner, hacía que la ANR cumpliera el papel weberiano de partido de patronazgo que administraba el sistema clientelista de prebendas y privilegios y la corporación militar era el brazo que garantizaba la estabilidad y el orden del régimen”.⁸

La conjunción de pseudo-legitimidad, uso formal de ciertos instrumentos democráticos e implantación del autoritarismo en una sociedad conservadora, permitió a este sistema ser definido como “despotismo republicano”, un tipo especial de régimen autoritario que es capaz de “establecer dominación política y hegemonía social”.⁹

A fines de los '50 el embajador norteamericano en Paraguay lo calificaba como “totalitario”¹⁰; es decir, un gobierno que pretendía controlar la sociedad civil, encuadrar la población y movilizarla en favor suyo. La resistencia al encuadramiento partidario suponía discriminaciones complejas: “esa afiliación es prácticamente un requisito para disfrutar de las oportunidades y de los derechos y prerrogativas ordinarias de los ciudadanos, mientras que la participación en los partidos de oposición o el mantenimiento de posiciones disidentes dentro del partido oficial someten a las

⁸ Martini, Carlos. Una mirada política a la transición. En *Cultura política, sociedad civil y participación ciudadana. El caso paraguayo*. Alejandro Vial (coordinador). CIRD-USAID. Asunción, 2003.

⁹ Delich, Francisco, “Estructura agraria y Hegemonía en el Despotismo Republicano”, en J. Labastida (Ed.) *Hegemonía y Alternativas Políticas en América Latina*, Mexico, Siglo XXI-UNAM-IIS, 1985.

¹⁰ U.S. Declassified Documents Collection (US-DDC), “W.C. Ploeser to C. Herter” 20.VI.1959, 1983, p. 01905.

personas al hostigamiento, intimidación y, a veces, vejaciones físicas y mentales”.¹¹

El estronismo heredó rasgos totalitarios de los gobiernos “nacional-revolucionarios” (los del Cnel. Rafael Franco y los generales Jose F. Estigarribia e Higinio Morínigo, de 1936 a 1948), movilizando partisanos –hombres y mujeres- con fines políticos y represivos. En esa caracterización de totalitaria coincidieron curiosamente diplomáticos norteamericanos, líderes comunistas y colorados disidentes de la Confederación de Trabajadores en el exilio (CPT-E).

Con la afiliación compulsiva de la administración pública (civil, policial y militar), la estructura estatal concentró el poder militar, político, económico e incluso ideológico. Sindicatos, gremios empresariales, centros estudiantiles e instituciones culturales coloradas encuadraban la sociedad civil, convirtiendo a la ANR en un aparato masivo de cooptación clientelar, delación y control.

La documentación del aparato represivo estronista – descubierta en 1992 y conocida como los Archivos del Terror- es bien indicativa: las delaciones voluntarias de civiles que aportaban a la “paz y el progreso” del régimen, compiten en número con los informes regulares de policías en servicio. Al omnipresente sistema de delación se sumó la movilización de milicias coloradas para reprimir los excepcionales casos de contestación armada a la dictadura: las guerrillas liberales y comunistas (1959/61), el intento de resistencia armada urbano de la OPM (1976/7) y la toma del ómnibus por campesinos en Caaguazú (1980).

¹¹ Liga Internacional de los Derechos Humanos, 22.V.1980, en NNUU, Informe Paraguay, Procedimiento 1503, p. 445



DEMOCRACIA SIN COMUNISMO

Desde la guerra civil de 1947 estaban proscritos los partidos no colorados, pero a instancias del gobierno Kennedy (Alianza Para el Progreso), a mediados de los '60 se integraron varios partidos opositores al Parlamento, en un sistema de mayoría con prima (66% a la ANR y 33% al conjunto de la oposición), con leyes y prácticas comiciales no libres ni competitivas. En esa década se aceleró la redistribución de tierras fiscales, fortaleciendo las redes clientelares del partido y beneficiando con grandes propiedades a sus líderes y jefes militares.

El estronismo distribuyó casi 12 millones de hectáreas entre unos 4.000 beneficiarios. Los dirigentes militares y civiles del régimen (2,5 % del total) recibieron las tres cuartas partes de esta superficie, mientras se dio a los campesinos (97,5% de los beneficiarios) unas 164.000 hectáreas, el 26% sobrante.¹² Agotando lo que restaba de propiedades fiscales, esta política colonizadora dejó casi intacto el sistema de tenencia en el país, uno de los más desiguales del continente.

Efectos de la política colonizadora sobre la concentración de la propiedad rural, 1956-1991

	% explotaciones agropecuarias de menos de 5 Has	% de tierras detentado	% explotaciones agropecuarias de 1000 o más Has.	% de tierras detentado
1956	45,5	1	1	86,7
1981	33,1	0,8	0,9	78,6
1991	37,4	1,2	1	71,4

Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Censos Agropecuarios de 1956, 1981 y 1991

¹² Informe de la Cámara de Diputados, Asunción, 2001

En las áreas urbanas, un tardío corporativismo cooptó entes gremiales del empresariado, de los trabajadores, de universitarios, etc. en un sistema de representaciones únicas, con demandas restringidas y liderazgo impuesto por el gobierno. Paralelamente se fomentaron asociaciones paralelas (médicos, abogados, ingenieros, contadores o estudiantes colorados), que sustituían la representación social. Sólo desde mediados de los '80, con la crisis del régimen, la sociedad recuperó cierta autonomía organizativa.

En los inicios del “boom de Itaipú”, el clientelismo y la corrupción sustituyeron los apoyos políticos originales: “importantes factores de la estabilidad y la longevidad del régimen han sido la corrupción y el contrabando, que han constituido una especie de vínculo que ha unido la dictadura a un gran número de personas (...) todas las cuales tienen algo que perder si <ella> desaparece”.¹³

PARTIDO COLORADO Y FUERZAS ARMADAS

La extraordinaria duración de esta dictadura –un tercio de siglo– obedeció a factores internos como la naturaleza caudillista y clientelar de los partidos tradicionales, y los cambios sufridos por el ejército tras la guerra del Chaco. Los dos partidos tradicionales paraguayos –la ANR y el Liberal– se sitúan entre los más antiguos de América. Sus caudillos tejieron una vasta red clientelar con la población rural, desprotegida por el Estado laissezferista. Los pobres (la clientela) apelaban a la protección de caudillos políticos que eran, al mismo tiempo, grandes propietarios o comerciantes rurales.

¹³ Liga Internacional de los Derechos Humanos, 5.V.1977, en NNUU, Paraguay, Procedimiento 1503, p. 86



El estronismo suplantó este clientelismo “individual” por el partidario-estatal, obteniendo lealtades políticas de los campesinos a través de lotes fiscales. La persistencia de esta participación política pre-democrática se debe en parte a la lentitud del proceso de modernización rural, recién transformada con la expansión de la agricultura empresarial a fines del siglo XX.

La guerra del Chaco (1932-1936) dio al Ejército conciencia de su interés político y fe en su “misión histórica”. Sus jefes y oficiales se propusieron luchar contra el atraso y la dependencia económica interna, con un discurso antiliberal alimentado por las ideologías socialistas y nazi-fascistas de la época.

Estas primeras dictaduras militares no lograron bases políticas propias, ya que los partidos tradicionales habían logrado mantener las lealtades anteriores. Los intentos de crear un nuevo partido-Estado (“franquismo”, “cuarentismo”, “tiempismo”, etc.) fracasaron por falta de apoyo social: la institución militar era incapaz de detentar por sí sola la hegemonía.

A principios de los '50, ni los partidos políticos, incapaces de controlar los cuarteles, ni los militares, carentes de apoyo político, podían gobernar por sí solos. Esta situación fue aprovechada por el Gral. Stroessner, que se erigió en árbitro del impasse.

EL DISCURSO NACIONALISTA

Si la dictadura de Stroessner usó una retórica nacionalista -el culto al Mcal. F.S. López, la superioridad de la “raza paraguaya”, el rechazo a las influencias extranjeras liberalizantes o de izquierda, etc.-, su política exterior se tornó en la práctica fuertemente dependiente del Brasil y de los EE.UU.

La dictadura paraguaya pronto se alineó al discurso anticomunista de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad Nacional. El rechazo a la izquierda auto-definía a ese régimen de “democracia sin comunismo”, y cobró forma legal con artículos de la Constitución de 1967) y en leyes de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas (N° 209) y de la Democracia (N° 294).

Pese a la agresividad de este discurso, el estronismo nunca consideró al comunismo ni a otras formaciones de izquierda como amenazas políticas reales. Su anticomunismo servía más bien para reprimir toda oposición, y sobre todo, para obtener mayor cooperación técnica y financiera de los EE.UU.

A mediados de los '80, el gobierno sostenía en su respuesta a la Comisión de Derechos Humanos de las NN.UU. que “En el Paraguay no se ha conocido la ‘guerra sucia’, ni el terrorismo, ni forma alguna de violencia extremista (...) Si hubo brotes, intentos aislados, planes, lo cierto es que todos han fracasado, sin más consecuencias que las ocasionales”.¹⁴

En la única entrevista realizada al dictador en el exilio brasileño, la periodista indagó *“Pero los intentos de revolución en Paraguay? Y las guerrillas? ‘Algunas’* respondió el anciano. *‘Pero muy pocas. No tenían importancia’* Pensé en los campesinos masacrados, en los asaltos armados contra gente que reclamaba reforma agraria, en los opositores torturados, todos condenados como comunistas (...) En el discurso de la Guerra Fría, preservado en el extraño clima asunceno. Y ni él creía en eso? Nunca lo creyó? *‘No había razones para una revolución en Paraguay’*. (...) Stroessner se

¹⁴ NNUU. Paraguay, Procedimiento 1503. Nota de Cancillería de noviembre de 1986.



MILDA RIVAROLA

negaba simplemente a mostrar preocupación sobre el comunismo”.¹⁵

Un informe de las NNUU develaba el trasfondo de este mecanismo de la dictadura: “Cualquiera que sea la posición de su propaganda oficial, el régimen de Stroessner no tiene realmente miedo de la subversión. De lo que tiene miedo es de la democracia”.¹⁶

LOS APOYOS EXTERNOS

Como Domingo Perón cayó poco después del ascenso de Stroessner al poder, influyó poco sobre el surgimiento de este régimen. Hasta inicios de los ‘60, los militares argentinos incluso mostraron simpatía hacia la oposición paraguaya. Pero todos los siguientes gobiernos del “Proceso” apoyaron a la dictadura paraguaya, y el punto más alto fue el “Operativo Cóndor” con secuestros y desapariciones de centenares de militantes políticos en ambos países.

Brasil apoyó desde los inicios al gobierno de Stroessner, quien había hecho estudios militares en ese país. Para 1958, el presidente J. Kubistchek ya se había reunido con Stroessner en cuatro ocasiones; y su cooperación militar creció exponencialmente en esos años.¹⁷

La Misión Militar brasilera actuaba paralelamente a redes culturales y comerciales y sus miembros mantenían estrecho contacto con jefes y oficiales paraguayos. La embajada brasileña

¹⁵ Hilton, Isabel, *The General*, entrevista al Gral. Alfredo Stroessner, en *Granta magazine* (31.IV.1990) extractado en http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/stroessner_3834.jsp.

¹⁶ CDH-NN.UU, Procedimiento 1503, 30.X.1980, p 450.

¹⁷ Seiferheld, Alfredo y De Tone, José Luis (eds.), *El Asilo a Perón y la Caída de Epifanio Méndez*, Asunción: Editorial Histórica, 1988, pp. 65, 86



tuvo en Asunción uno de los mejores Servicios de Inteligencia, que probablemente compartía información con el gobierno paraguayo.¹⁸

Las relaciones militares de Stroessner le facilitaron incluso relaciones con gobiernos civiles progresistas: el general Amaury Kruel, comandante del II Cuerpo del Ejército, promovió una reunión del dictador con el presidente João Goulart en 1964, en la que se planteó por vez primera la construcción de una hidroeléctrica sobre el Río Paraná.¹⁹ Sobre este mismo río, Brasil construyó el puente de la Amistad, que abriría un acceso directo al Atlántico, dando fin a la ancestral dependencia que las exportaciones paraguayas tenían del sistema fluvial y ferroviario argentino.²⁰

El represamiento del río Paraná para la hidroeléctrica de Itaipú inundó los Saltos del Guairá, dando fin a un viejo conflicto territorial entre ambos países. Hubo paralelamente grandes desplazamientos en la región, con la “Marcha hacia el este” de miles de paraguayos, hacia “Puerto Presidente Stroessner” (Ciudad del Este), y la llegada de farmers brasileños dedicados a la soja y maíz. A mediados de 1970, Brasil ya había desplazado a Argentina como el principal socio comercial y económico, y como la mayor fuente de inversiones del Paraguay.²¹

¹⁸ “C. Herter to H. Stimpson,” 12.III.1960, en US-DDC, Washington, D.C.; Carrolltown Press for the U.S. Department of State, 1983, p. 387 y Paraguay, Procedimiento 1503, Informe de la Liga Internacional de Derechos Humanos, 1977, p. 77.

¹⁹ La Tribuna, Asunción, 21.I.1964

²⁰ El acuerdo para este puente data de 1956. En esa zona Brasil financió el estudio de factibilidad de la represa de Acaray, construida con crédito del BID.

²¹ CEPAL, *Banco de Datos sobre Inversiones Extranjeras Directas en América Latina y el Caribe*, Santiago: CEPAL, 1987 y Parquet, R. “Las Empresas Transnacionales en la Economía del Paraguay” en *Estudios e Informes de la CEPAL 61*, Santiago: CEPAL, 1987.



MILDA RIVAROLA

Al igual que otros países latinoamericanos, Paraguay sufrió la influencia de los Estados Unidos desde los años '40. Al inicio, la política exterior norteamericana buscaba contrarrestar la influencia argentina, más que contener una eventual expansión del comunismo.²² Con Stroessner, esa presencia se incrementó exponencialmente: entre 1953 y 1965, el total de ayuda directa norteamericana, más los préstamos otorgados por instituciones ligadas a ese país alcanzaron 133 millones de dólares.²³

En ese periodo, la política exterior norteamericana en Latinoamérica se basó en la contención del comunismo, propia de la Guerra Fría. Este objetivo pudo estar justificado respecto a ciertas naciones cuyos gobiernos podían desplazarse hacia la izquierda, pero no respecto al Paraguay, donde el inexistente “peligro rojo” era recreado por la dictadura para obtener ayuda norteamericana.

Los asesores de la Misión Militar norteamericana asistían con asiduidad a actos y maniobras militares. La cooperación americana incluyó la asesoría del Tte. Cnel. Robert K. Thierry entre 1956 y 1957, quien promovió la creación de la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior (uno de los principales centros de tortura), para la lucha anticomunista en el Paraguay.²⁴

En 1959, el embajador Walter C. Ploeser se preciaba del aumento de la ayuda económica al Paraguay y de sus buenas relaciones con

²² USAID (U.S. Agency for International Development) *U.S. Overseas Loans and Grants and Assistance from International Organizations, 1945-1975*, Washington, D.C., AID, 1975, pp 56 y 186.

²³ Wilkie, J.W. y Lorey, D. eds, *Statistical Abstracts of Latin America*, Vol. 25, Los Angeles, CA: Latin American Center Publications, University of California, 1985, p 682; y USAID, op. cit, pp 54, 56, 186.

²⁴ Andrew B. Wardlaw, Primer Secretario de Embajada al Departamento de Estado, Washington, Despacho 145, Asunción, 25.IX.1956, copia en archivos de Marcial A. Riquelme.



Stroessner²⁵ y su sucesor, Harry F. Stimson, solicitó a Washington que se incluya al Paraguay en una gira del presidente Eisenhower al Cono Sur.²⁶ La asistencia militar se multiplicó entre 1962 y 1965 (administraciones de Kennedy y Johnson), época en que también creció la cooperación en Inteligencia. La CIA colaboró en operativos para infiltrar la oposición paraguaya que trataba de derrocar al dictador.²⁷

En los '60, unos cuatrocientos oficiales paraguayos recibieron formación en academias norteamericanas en métodos de contrainsurgencia -“comunismo y democracia, asuntos civiles, operaciones psicológicas, desarrollo nacional y operaciones clandestinas”- en territorio de los EE.UU. y en la Zona del Canal de Panamá.²⁸

En contrapartida a esta creciente cooperación, la representación paraguaya en las NN.UU. y la OEA fungió de “voto seguro” para la potencia del Norte. En 1962, Paraguay demandó que la OEA actuara militarmente contra el gobierno cubano, tres años más tarde una unidad paraguaya se sumó a la intervención de Rca. Dominicana, y en 1968 Paraguay incluso ofreció enviar tropas militares a Vietnam.²⁹

DERECHOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO DEMOCRATIZADOR

Cambios efectivos se dieron recién en 1977, cuando el gobierno del demócrata Jimmy Carter inició su campaña a favor de los Derechos Humanos en Paraguay. Su sucesor, Ronald Reagan, equilibró su agresiva

²⁵ Miranda, Anibal, *Estados Unidos y el régimen militar paraguayo*, Asunción, El Lector, 1987, p. 204.

²⁶ US-DDC, “H. Stimson to C. Herter”, 11.II.1960, y “C. Herter to H. Stimson”, 12.II.1960, 1983, pp. 000386 y 01905.

²⁷ Agee, Philip, *Inside the Company: A CIA Diary*. New York, N.Y.: Stonehill Publishers, 1975, pp 338 y 345.

²⁸ Mora-Cooney, op. cit., pp 163, 169, 175, 177.

²⁹ Mora-Cooney, op. cit., pp 132, 133, 170.



política anticomunista en Centroamérica con la continuidad de presiones democratizadoras en el Cono Sur.

El estronismo enfrentó la caída del apoyo norteamericano estrechando lazos con las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, a través del Operativo Cóndor. Sobre todo intensificó sus relaciones con el Brasil: los flujos de capital para la construcción de Itaipú y las inversiones en la agroindustria compensaron el efecto de las sanciones económicas de Washington. De esos años datan las relaciones con la Sudáfrica del *apartheid*, Corea del Sur y Taiwán, con crecientes flujos de cooperación económica y comercio exterior.

Paralelamente el gobierno paraguayo empezó a recibir críticas de organismos internacionales, por la violación de los derechos humanos. A mediados de los '80, el sindicalismo norteamericano (AFL-CIO), la ORIT y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) retiraron su apoyo a la central obrera gubernista y respaldaron al nuevo Movimiento Intersindical de Trabajadores.

La Guerra Fría llegaba a su fin, el Paraguay empezó a ser condenado abiertamente en foros internacionales y por la Organización de Estados Americanos. Fue incluido en el "Procedimiento 1503" de las Naciones Unidas, cuya Comisión de Derechos Humanos recibía denuncias sobre violaciones sistemáticas de estos derechos, y hacía recomendaciones confidenciales al Paraguay.

El embajador norteamericano Robert White criticó con insistencia la violación de derechos humanos del Paraguay, apoyando a partidos de la oposición. Su sucesor Clyde Taylor colaboró con grupos antidictatoriales en Asunción. Luego que la policía atacara una reunión de demócratas de la que él participaba, el Jefe del Comando Sur Gral.



John Galvin expresó en Asunción el apoyo del Departamento de Estado y del Pentágono al embajador, en un fuerte mensaje a la dictadura.³⁰

El colapso de la Junta Militar Argentina y la democratización del Brasil crearon un nuevo entorno regional a partir de 1983. Estas dos naciones, históricamente rivales en su influencia sobre el gobierno paraguayo, adoptaron una política común frente a la dictadura más vieja de Sudamérica. A fines de los '80, los acuerdos pre-Mercosur entre Argentina y Brasil se extendieron a Uruguay, dejando marginado al Paraguay: para el presidente brasileño José Sarney, la integración requería socios democráticos

Los gobiernos de España y Francia adoptaron una diplomacia también crítica: un congreso de la oposición paraguaya tuvo lugar en Madrid, en 1988, auspiciado por la Fundación del partido de gobierno, Pablo Iglesias, con presencia del vicepresidente Alfonso Guerra. La oposición paraguaya se fortalecía con el creciente apoyo internacional.

UNA TRANSICIÓN VIGILADA

Pese a lo peculiar de la fórmula que dio fin de la dictadura e inició la transición –en 1989 un golpe militar, con apoyo de sectores Colorados, puso en la presidencia al consuegro del dictador- la comunidad internacional dio su inmediato visto bueno al gobierno del Gral. Andrés Rodríguez. Este fue reconocido por todos los Estados incluso antes de las elecciones que lo ratificaron como presidente constitucional, y al año siguiente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU levantó el Procedimiento 1503 que pesaba sobre el país.

³⁰ Última Hora, Asunción, 3.II.1987; Hoy, Asunción, 4.II.1987



En 1990 la Asamblea General de la OEA mantuvo su XX Período de sesiones en la capital paraguaya, y como deferencia al nuevo gobierno democrático de la región, en 1991 los presidentes de Argentina (Carlos Menen), Uruguay (Luis A. Lacalle), Brasil (Fernando Collor de Melo) y Paraguay (Andrés Rodríguez) firmaron allí el Tratado de Asunción, fundacional del Mercado Común del Sur.

Poco antes, el gobierno de los EE.UU. había levantado las sanciones que pesaban sobre el Paraguay dentro del Sistema Generalizado de Preferencias. En la primera década de la transición, las embajadas de este país y del Brasil detentaron un rol protagónico en la prevención o solución de las crisis políticas internas del Paraguay.

Si la dictadura estronista tuvo un carácter diferente a las de la región, también la transición democrática paraguaya fue particular. Prolongada en exceso (casi dos décadas), liderada por el mismo partido que gobernó en la dictadura, y con mediocres resultados sociales y económicos, esa transición construyó una institucionalidad democrática más formal que real. En consecuencia, las percepciones y actitudes locales hacia este sistema se sitúan entre las menos favorables de A. Latina.

América Latina y países dela región: Actitudes hacia la democracia

	Apoyo a la democracia	Satisfacción con la democracia	Confianza en la democracia	Gobierno actúa en bien de todo el pueblo
América Latina	54	37	54	25
Uruguay	75	66	77	43
Brasil	43	30	44	28
Argentina	63	33	67	18
Paraguay	33	9	34	7

Fuente: *Latinobarómetro*. 2007. Escala de 1 a 100.



Ante la debilidad y el faccionalismo de los partidos tradicionales, la escasa participación de sectores sociales y la fragilidad de las nuevas instituciones republicanas, la comunidad internacional – sobre todo la potencia mundial, EEUU, y la regional, Brasil- fue asumiendo un decisivo rol de “stakeholder” en los conflictos políticos de la transición.

EL PUTSCH MILITAR DEL '96

Ya las versiones de un eventual golpe militar para forzar las “internas” (primarias) de la ANR, en 1993, generaron el rechazo del embajador americano sobre cualquier interrupción del proceso democrático. Estos posicionamientos políticos de esta embajada se tornaron habituales en Asunción, y fueron decisivos en la primera crisis grave de la transición, el putsch militar del Gral. Lino Oviedo de 1996. En ese conflicto entre el poder civil y el militar, también los países de la región accionaron en forma conjunta, mucho antes de Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia, firmada en 1998 por los miembros plenos y asociados del Mercosur.

La decisión de pasar a retiro a este jefe militar, cuyas intromisiones en asuntos electorales y políticos eran ya insostenibles, fue previamente consultada con cancilleres de la región y discutida dos días antes en Brasilia, en una reunión privada entre los presidentes Juan Carlos Wasmosy y Fernando H. Cardozo.

En la tarde del 22 de abril del '96, la resistencia a la orden de relevo por parte del Comandante del Ejército fue denunciada en conferencia de prensa primeramente por un funcionario norteamericano (Mark Jacobs, de la USIS), seguido de comunicados de apoyo al poder legalmente constituido del Brasil (Embajador Marcio d'Oliveira) y de la Comunidad Europea. El presidente Wasmosy anunció a la ciudadanía la



MILDA RIVAROLA

gravedad de la crisis una hora después, y los posicionamientos de líderes políticos y de comandos de fuerzas militares y de seguridad se emitieron mucho más tardíamente.³¹

El diseño y la puesta en marcha de la estrategia para desarticular el golpe contó con la participación de los embajadores del Brasil y de los EE.UU.: en lo más difícil de las negociaciones en la madrugada del 23 de abril el jefe del Ejecutivo paraguayo estuvo en la Embajada de los EE.UU., y el Ministro del Ejército brasileño, Gral. Zunildo Lucena, operó sobre el Gral. Oviedo (de quien había sido instructor militar) instándolo a que diera fin a la sublevación contra el Poder Ejecutivo.

Los contactos de Wasmosy con presidentes, cancilleres y embajadores de países del Mercosur y con el Secretario de la OEA Cesar Gaviria, a lo largo de esa conflictiva semana, facilitaron la solución incruenta del conflicto. Según un protagonista, la “parálisis de la clase política” local y del entorno presidencial sólo pudo compensarse con la rápida reacción de la comunidad internacional, que en esos días contribuyó también a desarticular agendas paralelas con sesgo conspiraticio.

EL MARZO PARAGUAYO

La reacción de la comunidad internacional durante la crisis del “Marzo paraguayo” fue más prudente y tardía, en un contexto político disímil al del ’96. Esta vez era el presidente constitucional Raúl Cubas quien sufría un juicio político, acusado de desacatar a la Corte

³¹ Ver Britez, Edwin et alii, *El Ocaso del jinete*, Asunción, ABC Color, 1996; Costa, J.M. y Ayala, O., *Operación Gedeón, Los secretos de un golpe fracasado*, Asunción, Don Bosco, 1996, y apuntes de la autora sobre el relato del Embajador M. d'Oliveira, Residencia de la Embajada del Brasil en Asunción, 22.I.1998.

Suprema de Justicia y de inacción -o complicidad- ante el asesinato del vicepresidente Luis M. Argaña.

Cubas había perdido la mayoría parlamentaria tras asumir la presidencia, ocho meses antes, y durante su corto gobierno el país vivió constantes enfrentamientos entre poderes del Estado y agresivas manifestaciones contra el Parlamento y el Poder judicial.

El asesinato del vicepresidente, el 23 de marzo de 1999, provocó rápidas protestas ciudadanas, y esa misma noche surgieron versiones de un inminente golpe liderado por Oviedo, que disolvería el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia.³²

La Junta de Gobierno de la ANR responsabilizó al presidente Cubas y al movimiento Unace (liderado por Oviedo) del magnicidio. Los otros partidos políticos - el PLRA, el PEN, el PRF y el Humanista- exigieron la inmediata renuncia del titular del Ejecutivo, y el Congreso reactivó el juicio político contra él.³³

Las relaciones diplomáticas del Paraguay con los EE.UU se habían degradado durante el gobierno Cubas: la embajadora Maura Harty era blanco de pancartas injuriosas en las manifestaciones oficialistas y de las agresiones verbales de L. Oviedo. En un intento de salvar la situación, el Ejecutivo pidió apoyo a los Estados Unidos en Inteligencia y Seguridad, para esclarecer el asesinato que había agravado la crisis.

Mientras se sumaban los votos para el juicio político, Cubas amenazó con desacatar un eventual veredicto negativo del Congreso. Ya

³² Congreso del Paraguay, Comisión Bicameral de Investigaciones, Audiencia del diputado Rafael Filizzola del 25.V.1999.

³³ ABC, Última Hora y La Nación, Asunción, 24.III.1999.



habían empezado los contactos entre los cancilleres Luis Felipe Lampreia (Brasil), Guido Di Tella (Argentina) y Madeleine Albright (EEUU), preocupados por la degradación del proceso paraguayo.

Brasil tomó prontas medidas preventivas: la Binacional Itaipú redobló sus medidas de seguridad, y se puso en estado de “sobreaviso” a los cuerpos militares de la región Sur, limítrofe con el Paraguay. El jueves 25 el presidente F. H. Cardozo planteó la posibilidad de dejar a este país fuera del Mercosur si ocurriera un golpe de Estado, y aceptó la constitucionalidad del proceso del “impeachment”.³⁴ Su canciller Lampreia reiteró la posibilidad, según el Protocolo de Usuahia, de suspender “la participación del Paraguay en Mercosur”, ante los insistentes rumores de golpe de Estado.³⁵

El Nuncio apostólico Lorenzo Baldissieri, la embajadora Maura Harty y el embajador brasileño Bernardo Pericás Neto tomaron activa participación tras el tiroteo contra los manifestantes en las plazas del Congreso por milicias oviedistas, que provocó la muerte de nueve jóvenes y más de un centenar de heridos el viernes 26 de marzo.

En su comunicado posterior, Cubas deslindó toda responsabilidad y acusó a “infiltrados en ambos grupos” de la matanza, amenazando una vez más con desacatar el juicio político, si no tenía “la legitimidad del debido proceso”.³⁶ Poco después, la emisión televisiva de imágenes de oviedistas repartiendo armas y disparando sobre los manifestantes, destruyó lo que restaba de la credibilidad presidencial. Entretanto se sucedían reuniones entre embajadores, presidentes de partidos y autoridades eclesiásticas, negociando ya la renuncia del presidente. El

³⁴ Cable Ansa, Sao Paulo, citado en ABC Color, Asunción, 26.III.1999

³⁵ Entrevista de J.F. Lampreia a Jornal do Brasil 26.III.1999,

³⁶ ABC y La Nación, Asunción, 28.III.1999.



cuerpo diplomático garantizó a una delegación parlamentaria la aceptación de la comunidad internacional de las decisiones del Congreso.³⁷

El domingo las negociaciones prosiguieron en la Embajada americana y en la Nunciatura con líderes del Congreso, obispos y presidentes de partidos políticos. La fórmula inicial incluía la jura de Raul Cubas como senador vitalicio y el exilio político de L. Oviedo en el exterior.

Raul Cubas presentó su renuncia al final de la tarde, pero ante una orden judicial de detención, Brasil le concedió asilo y lo transportó en un avión de su Fuerza Aérea. Argentina hizo otro tanto respecto a Oviedo, tras consultas del canciller Di Tella con Peter Romero, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, y con sus pares del Mercosur.³⁸ Según el análisis de la prensa brasileña, Fernando Henrique Cardozo había tenido un “papel esencial” en esa “salida negociada”, preocupado por la seguridad de la hidroeléctrica Itaipú y de los colonos brasileños en la región este del Paraguay.³⁹

Por su parte, la prensa uruguaya subrayó las “indisimuladas gestiones de diplomáticos brasileños y argentinos en Asunción, junto con diplomáticos estadounidenses, en procura de solucionar la intrincada situación, sazónada con un juicio político contra Cubas y temores de golpe de estado”. El portavoz del Departamento de Estado americano, James Rubin expresó su satisfacción con la salida lograda: “La transición constitucional fue constitucional, pacífica y altamente respaldada por el pueblo paraguayo”.⁴⁰

³⁷ Estas negociaciones fueron llevadas por el Mons. Baldissieri, y los líderes políticos Euclides Avecedo, José.F. Fernandez Estigarribia, Oscar Denis y Bader Rachid, ABC y La Nación, Asunción, 28.III.1999.

³⁸ Cable AFP, Montevideo, citado en Diario Noticias, Asunción, 31.III.1999.

³⁹ Cable EFE, Rio de Janeiro, citado en Diario Noticias, Asunción, 31.III.1999.

⁴⁰ Cable EFE, Washington, citado en Diario Noticias, Asunción, 30.III.1999.



MILDA RIVAROLA

La alternancia política ocurrida hace unos meses en el Paraguay podría significar un giro en sus relaciones internacionales, con la presencia de nuevos actores regionales, cambios de fuentes de cooperación asiáticas (Taiwan-China), y quizá una inserción distinta en el contexto multilateral. Pero los desafíos del nuevo gobierno, que debe sustituir el “orden colorado”, lograr gobernabilidad y satisfacer las graves demandas sociales, seguirán requiriendo la participación solidaria de las otras naciones en estos tiempos globalizados.



LA ENCRUCIJADA PERUANA
2008-2011





LA ENCRUCIJADA PERUANA - 2008-2011

MIRKO LAUER

Cuando tuve el gusto de participar en una edición anterior de este curso, en Brasilia en el 2006, mi clase fue sobre todo en torno de lo que he llamado un excepcionalismo peruano, que consistiría en la cantidad de veces en que desde 1810 nuestro territorio y nuestras élites económicas se ubicaron claramente a la derecha del resto del continente. Muchos países han pasado por algo parecido en un momento u otro de su historia, pero al Perú de manera bastante consistente. En dos años nada ha cambiado en este aspecto: los gobiernos de Alan García y Álvaro Uribe son islas de derecha en un mar que va de lo que se suele llamar progresista a lo que se suele llamar radical. Algo parecido puede decirse de los gobiernos que los antecedieron, Alejandro Toledo, Andrés Pastrana. Sin embargo, como en el famoso cuento de suspenso, impaciencia e insomnio, el Perú vive hoy esperando el momento en que caerá el segundo zapato, antes que nada para saber a cuál de los pies él corresponderá. El zapato en este caso es el conjunto de signos que podrían dar respuesta segura a una pregunta: ¿las elecciones del 2011 confirmarán una línea de política económica ortodoxa que ya ha sobrevivido a cuatro cambios de gobierno, y que muestra casi 90 meses de crecimiento sostenido, o producirán un viraje hacia alguna modalidad de izquierda andina?

A casi tres años de distancia parece temprano para preocuparse por elecciones pero la continuidad del zapato derecho o la llegada del izquierdo es un aspecto central de la polémica que ya hoy se desarrolla en el Perú. La primera de cuatro interrogantes centrales es si los efectos positivos del crecimiento económico que flotan en el



ambiente pesan más que los efectos causados por la exclusión de buena parte de las mayorías, efectos que se vuelven más traumáticos en un clima de prosperidad proclamada a los cuatro vientos. En otras palabras, se trata de descubrir a tiempo si existe algo que podamos llamar una gratitud social, que mañana pueda volverse electoral, de los aliviados respecto de quienes promueven las políticas ortodoxas. O más bien si producir dinero en la parte alta de la pirámide social equivale más bien a arar en el mar cuando si no hay el acompañamiento de programas sociales significativos. El problema está en quiénes y cuántos son realmente los beneficiados.

El crecimiento ha estado reduciendo la pobreza con gran lentitud. El proceso se ha acelerado un poco en estos últimos años, pero ahora las alzas de precios de los alimentos (los combustibles todavía están subsidiados) están borrando lo que se acababa de avanzar. Los pobres están naturalmente impacientes con el gobierno. Las capas media y alta también han empezado a impacientarse, en este caso frente a lo que consideran una pobre administración del Estado (37% de los sectores A/B encuestados en todo el país expresaron simpatías por el paro nacional del nueve de julio pasado). La actitud del gobierno ante las críticas ha sido sobre todo pedir que se le preste atención al crecimiento y sus logros, y paciencia. La definición que hizo el presidente Alan García de una parte de quienes critican y protestan como perros del hortelano (en una serie de artículos, uno de ellos con ese título) estableció el tono áspero de la creciente confrontación entre oposición y gobierno.

Pero si por un momento la pobreza estadística se tomó uno respiro, en términos absolutos no ha hecho sino aumentar. En la medición de Cuánto SA, en 1985-86 la cifra era 42%. En 1990, luego de los nueve meses de la hiperinflación 1989-1990, el mismo sondeo dio 55%, y en 1994 arrojó 53%. Siguió bajando, a 50%, para 1997, y



en el 2000 ya había vuelto a rebotar, a 54%. Los 60 meses de crecimiento 2001-2206 la redujeron a 46%, y en dos años de altísimo crecimiento el actual gobierno anunció que había bajado a 39%, un 7% de reducción. El opositor Pedro Franke acepta este último logro pero lo establece en solo 5% de reducción y nos recuerda que para lograr eso la economía tuvo que crecer 29%. Hace notar que si el crecimiento fuera la única clave, el gobierno tendría problemas para llegar a su propia meta trazada de reducción de la pobreza en 30% para el 2011. Ahora bien, si una parte del país es pobre, eso no significa que la otra parte sea rica. Simplemente tiene algo más de ingresos y salva la valla de los criterios de medición internacionales.

Pero la noción misma de luchar contra la pobreza, un *leitmotiv* de este gobierno y del anterior, nace de unir la idea de gobernabilidad con la del aprovechamiento de un regreso del crecimiento a la economía peruana, y para la mundial, con el cambio del siglo. Benjamín Friedman, en un libro sobre el mismo problema en los EEUU, nos dice que “un crecimiento económico de ancha base es un prerequisite del progreso social”, esto último entendido como menos pobreza. Pero al reseñar el libro de Friedman Jeff Madrick nos recuerda que en el caso de EEUU la relación más crecimiento/menos pobreza no ha sido ni remotamente automática: de 1953 a 1973 el ingreso promedio se duplicó; de 1973 a 1993 ese mismo ingreso promedio creció mucho más lento que nunca desde la Guerra Civil de mediados del s. XIX. “La economía creció, pero los beneficios fueron disfrutados mayormente por los ricos”. Si hubo mejora de las cifras promediales, eso se debió a la mejora de los de arriba. John Cassidy escribe que el PBI de los EEUU, ajustado para inflación, se ha casi triplicado desde 1973, y la tasa de pobreza casi no se ha movido. En términos de ese país, en el 2004 fue de 23% en New Orleans, de 33% en Detroit, de casi 29% en Miami. Aquí en Perú estamos más cerca de las visiones de Madrick y Cassidy que de



MIRKO LAUER

la de Friedman: si la economía peruana crece, esto debería reflejarse en los ingresos, y por definición reducir la pobreza. Pero no sucede del todo así. Otras contabilidades de la pobreza que las peruanas, pero el problema es el mismo.

Tenemos, pues, pobreza y pobreza. Hay señales de que la parte más flagrante de la miseria efectivamente puede retroceder si se aplica con eficiencia una cantidad suficiente de recursos, aun sin transformar esencialmente el sistema económico. Es el caso de Chile, que ha logrado reducir la cifra a la mitad. Pero hay otra pobreza cuyo desmantelamiento no es tan sencillo, y que parece inmune incluso al crecimiento económico. Lo cual mantiene en la sociedad peruana una suerte de ejército de reserva para la protesta.

La segunda interrogante en debate en el Perú es si luego del retroceso del pensamiento de izquierda y centro-izquierda en el paso de los años 80 a los 90 las ideas del capitalismo liberal, y hasta neoliberal, han logrado avanzar en las mentes de las mayorías peruanas lo suficiente como para garantizar el bloqueo electoral a un candidato izquierdista/nacionalista fuerte en las urnas del 2011. Esto incluso si el candidato de derecha resultara el menos carismático. En verdad la difundida protesta en el Perú de hoy no habla de un pueblo muy convencido de que sus intereses están del lado de la forma en que se conduce hoy la economía. Pero si bien en las encuestas aparece una población predominantemente opositora, a la vez ella resulta más conservadora de lo que sugieren las noticias sobre movilizaciones populares de protesta. Es demostrable la fuerte presencia de cierto pragmatismo económico, que funciona como contrapeso de otros impulsos. Lo que no está demostrado es que este pragmatismo sea una ideología de la postergación de necesidades y reclamos, como quisiera el gobierno. El capitalismo liberal es bienvenido en todos los estratos social del país cuando abre oportunidades, pero no tanto cuando revela su urdimbre



de desigualdad en los tiempos y volúmenes de acceso a bienes y servicios.

Mucho más fuertes en la escena política que las ideas contrarias al capitalismo liberal, i.e. las del izquierdismo “suave” o “duro” que viene triunfando en elecciones de toda la región, son en el Perú hoy aquellas ideas que sin ser del todo ideológicamente opuestas a ese tipo de capitalismo, sí lo ven como una suerte de competencia desleal. Es lo que viene sucediendo con el regionalismo descentralista, el ambientalismo comunitarista rural (sobre todo aquel crítico de las industrias extractivas), los intereses del vasto capitalismo pequeño e intermedio sin acceso a los mejores negocios, y el sector informal reacio a toda reglamentación registrada por el Estado.

Todo esto viene explicando un fuerte horizonte de conflictos. La Defensora del Pueblo identificó 159 conflictos relevantes en el país en setiembre. Los estudiosos Víctor Caballero y Teresa Cabrera hacen notar que “los espacios constituidos para la negociación no se utilizan, pues una de las partes, por lo general la población de una determinada comunidad o sus organizaciones, considera que el conflicto es la mejor vía, la más efectiva, para lograr mejores condiciones para negociar su posición”. Luego hacen notar que en los últimos años los temas que más conflictos causaron han sido los tributarios, y el cuestionamiento de normas relacionadas con la promoción de inversión privada, sobre todo en minas y petróleo. En ambos casos se trata de asuntos centrales para la marcha de un gobierno que se apoya sobre todo en los megaproyectos de inversión extractiva y energética.

Una tercera idea en debate en el Perú hoy es si las opciones de izquierdismo/nacionalismo electoral seguirán tan aisladas como esencialmente viene sucediendo con los 20 congresistas de Ollanta Humala y su Partido Nacionalista Peruano (los otros 20 que el PNP



llevó al Congreso se independizaron y volvieron al centro-derecha). Es decir, si el futuro de este sector, al que se suele syndicar como la versión peruana del chavismo, dependerá exclusivamente del descontento y la protesta radical en las calles, o si tendrá la capacidad de hacer alianzas hacia el centro. Por lo pronto es evidente que la izquierda que casi triunfa en el 2006 no ha sabido aprovechar su buena fortuna de aquel momento. Todavía no hay una propuesta de ese sector que realmente de sustancia a sus discursos de campaña del 2005-2006 o que los proyecte hacia adelante.

Es en los próximos 12 meses que aparecerán los primeros indicios de si la ola electoral de izquierda en la región es un ciclo que empieza a agotarse o si ella va a mantener sus avances, o incluso ganar más países. En el caso peruano la caída del gobierno en las encuestas (entre 15% y 20% de aprobación) no se está trasladando a una o más candidaturas en la izquierda, sino a un hombre de centro-derecha (Luis Castañeda, alcalde de Lima) y a dos mujeres de derecha confirmada (Lourdes Flores, social-cristiana y Keiko Fujimori, hija de Alberto).

Algo importante que se perdió con la crisis de las izquierdas radicales a partir de 1990 es la idea de que los pobres deben participar activamente como tales en política. Una vez postergadas ideas como la de la unión de los proletarios del mundo, o los partidos del trabajo, las soluciones políticas a la pobreza han quedado en manos de sectores sociales que no lo son, es decir pobres. Es cierto que hoy hay políticos peruanos que sinceramente hablan y/o trabajan a favor de los pobres como concepto o como problema tecnocrático (aunque tampoco tantos). Pero en la actualidad no hay un solo político con audiencia nacional en capacidad de hablar en nombre de los pobres como grupo de interés. Extraña ausencia, si consideramos, que esos sectores son los que por su volumen podrían dar el triunfo, o por lo menos el margen de triunfo, en cualquier elección, por no decir en todas.



El elenco de la política formal peruana hoy es más o menos el mismo que en las elecciones del 2006, con algunas novedades que sospechamos son importantes, pero que todavía no han tenido oportunidad de demostrarlo. Los tres políticos que entonces compitieron por entrar a la segunda vuelta todavía están aquí: García, que en la primera vuelta entró segundo por 150,000 votos sobre 12 millones, y luego le ganó a Ollanta Humala, por 6%. Humala es ahora un referente de la protesta, no tanto su líder, y Lourdes Flores, que todavía es la mujer fuerte de la coalición de derecha Unidad Nacional, que quedó fuera en el 2006. Luego hay dos figuras nuevas: Castañeda, cuya gestión convoca aprobaciones de 75%+, y Keiko Fujimori.

El Apra de García es el partido más grande y más antiguo del país, hoy con unos 400,000 afiliados reinscritos en el entusiasmo del 2001 y listados en una página web. En varios aspectos el Apra de hoy se parece a la de la segunda mitad de los años 70, cuando salió de un decenio de ostracismo con la imagen de un partido destinado a la victoria electoral. Sin embargo entonces el Apra perdió en 1980, y luego ganó en 1985. Si algo valen las historias electorales paralelas, en esta segunda salida del ostracismo (ya no perseguidos por el velasquismo sino por el fujimorismo) el Apra perdió en el 2001, y triunfó en el 2006. Hoy ya no estamos realmente ante el mismo partido populista, esperanzador y enmarcado en la social-democracia que en 1985. Lo que ha cambiado es sobre todo la calidad de la esperanza. Las posibilidades de que un país con 26 millones de habitantes en América Latina pueda entrar a la prosperidad en un plazo razonable (?), aquello que se llama el desarrollo, han desaparecido de las mentes más frías. En efecto esto ha encajonado a la política en una fea disyuntiva: la campaña de promesas como fuga hacia delante (los millones de puestos) o la administración de la pobreza como una suerte de control de daños.



La cuarta idea en discusión hoy es sobre si García valorará más la ortodoxia económica que su popularidad (se supone que no hacerlo fue el pecado mortal de su primera presidencia). Su otra opción sería una suerte de justo medio que lo vaya llevando por entre las presiones paralelas de la inequidad implícita en el actual éxito macroeconómico y la protesta popular, un callejón oscuro ahora salpimentado con la crisis mundial. Quizás esto no sea una garantía al 100% para los inversionistas, pero se ha vuelto notorio que García es ahora muy renuente a los golpes de timón y prefiere prolongar las políticas iniciales de este segundo mandato todo lo que ellas puedan dar. Lo cual se explica en parte porque está transitando territorios desconocidos para él: crecimiento con impopularidad, aumento simultáneo de la inversión pública y de la protesta, ambas parejamente intensas.

García comenzó este su segundo gobierno bajo la difundida idea de que el gran éxito económico produciría un capitalismo con popularidad, un gobierno en sí mismo popular, y de paso impediría un triunfo del temido Humala, el militar retirado original o en una nueva versión. Tras dos años de gobierno, las cosas no parecen necesariamente así. Primero porque el éxito económico ha demostrado funcionar de otra manera: en las zonas donde los pobres son muchísimos, incluso más que los demás, el crecimiento económico es visto como un llamado a seguir esperando en la cola. Segundo porque ese éxito está amenazado por su propia lógica interna: si no chorrea, entonces los excluidos se van a abalanzar sobre el caño, que sin duda es como los beneficiados de esta hora perciben la difundida protesta en el país, y uno de los mensajes fondo en la expresión perro del hortelano.

Por todo esto García se encuentra al borde de un inevitable cambio de perspectiva, en que se le van a multiplicar los objetivos



impuestos por las circunstancias, incluso algunos contradictorios entre sí. Por lo pronto hacer crecer la economía como meta viene siendo cuestionado por la crisis de alza de precios, todavía moderada pero ya bastante fuera de control, y por la crisis de confianza que suele acompañar estos escenarios. Hacer crecer la economía parecía una forma segura de acrecentar el prestigio político. Pero hasta el momento no ha sido suficiente, lo cual crea una nueva meta: la lucha por la continuidad del modelo económico.

Una de las cosas de las que García se sacudió en el paso de una presidencia a la otra es el postulado de proyectos partidarios o personales propios para el largo plazo. Ahora el único plan de este tipo en la plaza peruana es el de los megaproyectos de inversión privados. El joven político que llegó en 1985 se sentía un demiurgo, a la vez espíritu creativo y deidad subordinada al cumplimiento del gran diseño histórico del partido aprista originado entre los años 20 y los 30. El político que llegó en el 2006 en cambio parece concebir la historia como un agregado de cortísimos plazos. Hoy prefiere moverse en las seguridades de la coyuntura, en cuyo manejo es un artista, antes que en las siempre riesgosas promesas de la posteridad. Más que un conquistador del futuro colectivo, es un rectificador de su propio pasado. Nadie está agradeciendo su metamorfosis.

Hasta el momento es difícil imaginar la partida de García en julio del 2011 muy distinta de la de Alejandro Toledo en julio del 2006: cinco años de buen crecimiento, estupendo clima de negocios, relativa calma política aunque interrumpida por movilizaciones de gran impacto mediático que no logran articularse nacionalmente, indicadores sociales insatisfactorios, impopularidad del gobierno y un gran descontento larvado en todo el país. A García le agradaría la comparación. No porque él tenga a menos los logros de Toledo, sino porque desde el inicio declaró su ambición de elevarlos a otra escala,



MIRKO LAUER

cosa que en algunos aspectos ha logrado. Propuestas como superar a Chile en el campo comercial o reducir la pobreza en un 30% son emblemáticas de los propósitos declarados de este segundo gobierno.

Ahora que parece estar desacelerándose más en serio lo que ha sido un ciclo expansivo de la economía mundial, empieza a ser replanteada la cómoda supeditación de la política a la economía que domina tantas mentes peruanas desde fines de los años 80. Como en ciertas películas de vaqueros, el hoy manso tendero puede recordar que alguna fue un feroz pistolero. No estamos sugiriendo que en un momento dilemático García lanzaría por la borda todos sus compromisos con el orden establecido neoliberal. Pero sí que pronto podría estar empezando a tomar o a exigir decisiones económicas (o financieras, o monetarias) con el ojo puesto en la política. Es decir mirando más allá de la coyuntura, hacia el 2011.

ANEXO: UN TEXTO DEL 2003, QUE NO HA PERDIDO SU ACTUALIDAD.

En el Perú la decepción con la democracia no es permanente sino recurrente, bipolar. El ciclo se completa con una también recurrente decepción frente a la dictadura, que en la segunda mitad del siglo XX se ablandó algo al tecnocratizarse. En nuestra experiencia de ese siglo hay aplausos para las restauraciones democráticas y demasiada tolerancia para los golpes militares. El autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 fue aprobado por tres de cada cuatro peruanos. Un poco menos del porcentaje que aprobó su vacancia moral del cargo y el retorno a la democracia en el 2000.

Detrás de esta historia de probable inconsecuencia ideológica hay otra de reales esperanzas traicionadas: le pedimos más o menos lo mismo a demócratas y a dictadores, con parecidos resultados. En nuestras



democracias siempre se ha respirado mejor, pero tarde o temprano el clima de libertades ha terminado atentando contra los intereses del capital en todas sus formas, y a veces hasta contra los del trabajo: la diferencia no es dramática, pero la serie histórica muestra mejor capacidad de compra de la población bajo las dictaduras.

Al centro de este carrusel (que no es invento peruano, sino tradición latinoamericana) está la arraigada idea de que en el Perú estos regímenes políticos básicos no son para durar, sino para alternarse, siempre con un empujoncito de ayuda de Washington. Lo expresa el *bon mot*, irónico solo a medias, del poeta Martín Adán luego del golpe del general Manuel Odría en 1948, “Hemos vuelto a la normalidad”. Creo que la normalidad a la que aludía no era propiamente el golpe militar; era simplemente el cambio de régimen, y la complacencia con el hecho.

El proceso es más o menos sutil, o así nos parece. Las dictaduras salen de escena por hartazgo ciudadano frente a su estilo, mientras que las democracias parten víctimas de una súbita decepción ciudadana. En ningún caso es el fin de la historia sino más bien el eterno retorno. Es difícil imaginar en el Perú el tipo de argamasa social que produjo 200 años de democracia en EEUU, 40 de dictadura en España o Portugal, o 70 años de PRI en México. Nuestro record sin un golpe de Estado: 15 años (1899 a 1914). Sin una democracia: 12 años (1868 a 1980).

En un momento de los años 90 pareció que esta pendularidad terminaba, pero en eso apareció esa suerte de democracia Potemkin tras cuya fachada se ocultaba una semi-dictadura, llamado fujimorismo. Pero si el fujimorismo era la fórmula intermedia que iba a detener el péndulo, tampoco duró. Lo cual sugiere que, si bien toda analogía es perversa, aquí el ciclo completo democracia-dictadura ha demostrado hasta ahora ser más fuerte que cualquiera de sus fases. E incluso más fuerte que los intentos de explicarlo.



Hoy la versión dominante sobre el desencanto con la democracia en los países pobres es la del déficit de crecimiento económico, lo que se ha llamado “la economía política de la ciudadanía”. Para la izquierda el capitalismo le impone límites a la democracia, para la derecha es la democracia la que le impone límites al capitalismo. Entre los dos planteamientos están las esperanzas políticas puestas a prueba por la penuria cotidiana, que aquí se niega a casarse con alguna de las versiones.

Se alterna entre democracia y dictadura porque en algún momento del proceso para las mayorías empobrecidas (50%+ en el Perú) da lo mismo. El aporte de la economía y de cierta cultura política, es poner el péndulo otra vez en movimiento, o ayudarnos a descubrir que nunca se había detenido. Sin duda hay minorías a las que nunca les da lo mismo, en un sentido o en otro, pero su capacidad de oponer la institución democrática o la mano dura dictatorial al desasosiego de una calle impaciente se ha ido volviendo cada vez más limitado.

¿Algo ha cambiado en nuestro brevísimo siglo XXI democrático? Es muy temprano para opinar. A tres años de retornada, nuestra democracia vive sujeta a algunas presiones conocidas. Vivimos entablillándola con pactos medio tácitos y medio secretos entre sus actores. Arreglos a la postre ineficaces y que se vuelven parte del problema. Nadie está esperando un golpe de Estado, pero sí el tipo de disturbio de fondo que en otros tiempos los precedía. A nadie sorprendería mañana en el Perú uno de esos hipos a la ecuatoriana, que alían turbamulta popular con músculo militar.

¿Cuán avanzados estamos en este avatar del ciclo? Hay una mayoría que aprueba la democracia en el Perú, pero la popularidad de los demócratas en el poder anda por los suelos. Las cifras de



aprobación al prófugo [hoy preso y en juicio] Fujimori vienen creciendo lentamente. Quizás si su régimen no llevara prendido al cuello un historial de robos y asesinatos, el rebrote autoritario no sería tan lento. Pero como va la cosa, las mayorías peruanas cada vez más ven a la democracia como una primavera cruel que solo está allí para ser deshojada.





SURINAME





SURINAME

KRIESNADATH NANDOE

1. BRIEF HISTORY

The Republic of Suriname – former Dutch Guyana – is situated on the Northeast coast of South America, and is part of the Guyana's and the Amazon and bounding in the West by Guyana, the East by French Guyana, in the South by Brazil and in the North by the Atlantic Ocean.

Our history is interesting in the sense that it is related to Manhattan/New York. In 1667 – after the Second Anglo-Dutch War - Suriname was ceded to the Dutch in exchange for New Amsterdam, what is now New York.

Until the 15th century, the only inhabitants were the Carib, Arowak and Warao Amerindians. Another tribe – the Surinen – who inhabited the country at an earlier time, were driven away by the Caribs. The Surinen tribe is considered to be the source of the name Suriname.

The first successful settlement in Suriname was founded by an Englishman Francis Lord Willoughby, who welcomed settlers from other West Indian and South American colonies. Among these were a number of Jews, mainly from a Dutch colony on the Berbice estuary, West of Suriname, to which they had fled in 1639 from religious prosecution in Brazil. They brought capital and skills and in 1665, erected what is said to be the first synagogue in the Western



Hemisphere. The colony developed a prosperous plantation economy based on slave labour imported from Africa.

The Dutch abolished slavery in 1863 and with this act a new era began, namely the import of indentured labourers from China, British India and Indonesia. Most of these labourers settled in Suriname and – as a result – our today's society consists of a wide ethnic and cultural diversity which includes native Amerindians, Maroons, Creoles, Hindostanies, Javanese, Chinese and others.

2. POLITICAL STRUCTURE

Suriname is a former colony of the Netherlands and became independent on November 25, 1975 and was admitted as a member of the United Nations in December 1975. The relations with the Netherlands are friendly and constructive, where about 250.000 former Surinamese nationals live.

The relations with the Netherlands are gradually becoming more institutionalized since the policy of Suriname is more and more directed towards integration into the region and geared towards establishing diplomatic relations with countries in other parts of the world.

Before its independence Suriname did not enjoy strong links with the countries in the Latin American and Caribbean region, because the impact of colonial bilaterism constraint the emergence of soical and political bonds.

On February 25, 1980 a military coup toppled the constitutional government of Suriname. After 7 years of military rule on September 30, 1987 the people of Suriname overwhelmingly



approved a new constitution and doing so, paved the way for holding general elections.

The newly enacted constitution underlines the principle of a multiparty system, private enterprises, an independent free press and the independence and integrity of the judiciary.

The constitution establishes an unicameral 51 seat National Assembly, elected for a five year period by direct universal suffrage.

The Central Government is composed by the President, the Vice President and the Council of Ministers. The latter is the highest executive and administrative body of the Government. The Judicial power is vested in the Court of Justice, consisting of the Prosecutor's Office, the Magistrate's Court and the Supreme Court.

3. FOREIGN POLICY

Today's world is vastly different from that which existed when the United Nations was founded. Globalisation, the interdependence among nations, the rise of new economic centers and the growing influence of non state actors have necessitated many nations – small and large – to redefine their policy, nationally, regionally and globally.

From the time of independence in 1975, Suriname has attached great importance to an effective multilateral system, in accordance with international law, in order to better address the multifaceted and interconnected challenges and threats confronting our world.

Suriname has joined many international organisations, such as the United Nations and its specialized and autonomous agencies,



Bretton Woods Institutions, Regional Organisations such as the Organization of American States, Interamerican Development Bank, Caricom and other organisations such as the Non Aligned Movement and Organization of Islamic Countries. In its foreign policy Suriname recognizes that development is a central goal by itself and that sustainable development in its economic, social and environmental aspects constitutes a key element of the overarching framework of many International Organisations.

Suriname is a member of the World Trade Organization and has sought to comply with its obligations. Efforts are being made for further implementation of World Trade Organization agreements and national legislation. Suriname is also engaged in external trade negotiations on the Hemispheric Free Trade Area of the America's and on the Economic Partnership Agreements.

Suriname maintains bilateral diplomatic relations with a number of friendly nations around the world. These relations are based on mutual benefit and are in conformity with the principles of the Charter of the United Nations and the Organization of American States and the Non Aligned Movement.

Suriname maintains good diplomatic relations with the Federative Republic of Brazil. During the past decennia many cooperation agreements have been signed in many fields such as agriculture, health, trade, defence, education and other areas. The constructive relations have resulted in mutual visits by the Head of State of both countries.

4. INTEGRATION

Suriname signed in July 1995 the accession documents to become a member of the Caribbean Community (CARICOM) and has been



SURINAME

participating actively in the various organs of this organisation. In response to the challenges and opportunities presented by the global economy, CARICOM decided to transform the originally limited Common Market, as conceived in 1973, into a full fledged Single Market and Economy (CSME) .

Suriname considers the creation of CSME as an effective means by which the individual economies of the region can be successfully integrated into the evolving global economic system on terms that will enable them to minimize the costs and dislocations that ensue from that integration. In this context it is interesting to note that the European Union agreed to make available a grant of Euro 36.9 million to support the integration process of CARICOM. Of this amount Euro 20 million will be used for implementation of the CSME, for external trade negotiations through the Caribbean Regional Negotiating Machinery (CRNM) and representation at the World Trade Organization.

In the context of the integration process Suriname welcomed the inauguration of the Caribbean Court of Justice that will provide the necessary legal certainties in the implementation of the provisions of the revised Treaty of Chaguaramas. The CARICOM Competition Commission is located in Suriname. The basic objective of this institution is to deal with anti-competitive practices and at the same time will have to advise the member states on ways and means to enhance efficiency in the market and maximise consumer wellbeing.

5. RELATIONS WITH THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

Suriname is a member of the Organization of American States (OAS) and attaches great importance to the activities of this important regional organisation. The OAS has become the primary political body



and platform for discussions in many areas of political and social development. Over the past decades many new challenges have been added and in many cases it has demonstrated that a collective and coordinated response is the only way to effectively address these new concerns.

6. RELATIONS WITH SOUTH AMERICA

At the 16th Inter-Sessional Meeting of CARICOM Heads of State - held in Suriname in 2005 – and also attended by President Lula da Silva, the desirability of building an alliance with Brazil was underlined. The Chairman of the meeting – the President of Suriname, drs. R.R. Venetiaan – said at that occasion *‘Caribbean countries have been historically oriented towards Europe and North America. It is the highest time that we realize that, besides an Eastern and a Western border, the Caribbean also has a Southern border and beyond that border there is a great potential of markets, technology and culture’*.

In this context it can be stated that the level of cooperation between member states of CARICOM and South American countries has been deepened. In accordance with the Declaration of Cusco of December 2004, and in the spirit of a comprehensive integration process in South America, President Venetiaan recently signed the Constitutive Agreement in Brasilia, establishing the Union of South American Nations (UNASUR). Suriname welcomes this Brazilian initiative that contemplates the social and economic integration of South America and the coordination of common political, economic and diplomatic efforts aimed at strengthening the position of this region in the international area. From a vantage point of the location of Suriname, UNASUR could assist in the emergence of a more balanced level of Hemispheric relations providing further scope for the development of trade and other relevant countries of South America.



At present, South America exhibits important imbalances in its connectivity networks, and a significant pattern of what it has is not well suited for greater integration with neighbouring countries. The project '*Integration of Regional Infrastructure for South America (IRSA)*' started in 2002 and has become the main regional forum to advance the process to physically articulate the 12 countries of South America. Suriname is taking part in this project that is directed towards the construction of new infrastructural network for the region which will include roads, waterways, bridges and communications.

The road link between Brazil, Suriname and Guyana and the State of Roraima could not only serve to facilitate the linking of the Northern states of Brazil, but also provides access to the Caribbean and other parts of the region.

7. TRANSNATIONAL CRIME

In the area of regional security Suriname and other CARICOM countries continue to be challenged in the area of transnational crime. Suriname remains exposed to threats from terrorism and to its stability, security and territorial integrity.

Suriname strongly condemns terrorism in all its forms and manifestations committed by whomever, wherever and for whatever purpose as it constitutes one of the threats to international peace and security. Transnational crime, including illicit trafficking of drugs, persons, weapons and money laundering have negative effects on development. The combatting of these threats cannot be carried out in isolation since most of them are interrelated. These problems can only be countered as a shared responsibility that demand a multilateral, integral and balanced approach.



Suriname organised in October 2006 the International anti-Narcotics Conference that adopted the following policy recommendations:

1. Continuing cooperation at bilateral, regional and multilateral level in order to respond appropriately and effectively in a timely manner to reduce the availability, production, trafficking and demand of drugs.
2. Undertaking efforts to improve the operational and communication capacity of the national control agencies preventing smuggling of drugs and precursors.
3. Developing and implementing joint or combined operations to detect the trafficking of illicit drugs and dismantle illegal airstrips.
4. Working individually and collectively to identify and dismantle international, regional and national criminal organizations and their support networks engaged in illicit drugs, firearms and ammunition.

Suriname ratified the following international conventions:

- The Intern-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1992) (to be ratified);
- The Inter-American Convention against Corruption (1996);
- The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972 Protocol;
- The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988);
- The 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
- Convention against Terrorism (2002).



SURINAME

8. ECONOMIC STRUCTURE

The following data and views are based on reports such as:

- The Economist Intelligence Unit
- Country report October 2007
- International Monetary Fund Country Report – May 2007

Annual indicators

	2002 a	2003 a	2004 a	2005 b	2006 b
GDP at market prices (Sr\$ m)	2,534	3,306	4,081	4,856	5,802
Nominal GDP (US\$ m)	1,080	1,271	1,493	1,778	2,112
Real GDP growth (%)	2.6	6	8.1	5.5	5.8
Consumer price inflation (av; %)	15.5	23.1	9.1	9.9	11.3
Population ('000)b	483.6c	485.6c	487c	488.5c	490c
Exports fob (US\$ m)	529.3	638.5	873.5	929.1	1390.7
Imports fob (US\$ m)	-476.8	-668.7	-703.1	-1044.9	-1297
Current-account balance (US\$ m)	-60.1	-136.9	39.2	-192.9	104.7
Total external debt (US\$ m)	277.8	278	259.5	248.4	240.2
International reserves excl. gold (US\$ m)	106.2	105.8	129.4	125.8	215.4

Source: Country Report Suriname, October 2007 - The Economist Intelligence Unit

A Actual. b Economist Intelligence Unit Estimates. c Population data have been re-estimated for 2000-03 based on the latest population census result.

Origins of gross domestic product

Origins of gross domestic product 2006	% of total	Components of gross domestic product 2004	% of total
Informal sector	13.9	Private consumption	67.0
Manufacturing	12.9	Private fixed investment	24.4
Mining	11.9	Government consumption	32.4
Commerce	10.9	Public fixed investment	4.7
Government	9.5	Exports of goods and services	33.8
Agriculture, forestry & fishing	4.7	Imports of goods and services	- 62.2

Principal exports 2006	US\$ m	Principal imports 2005	US\$ m
Alumina	642.4	Machinery & Transport equipment	295.0
Gold	198.6	Fuels and lubricants	171.4
Crude oil	48.8	Manufactured goods	150.4
Bananas	12.0	Food and live animals	99.7



KRIESNADATH NANDOE

Main destinations of exports 2006	% of total	Main origins of imports 2006	% of total
Norway	23.7	USA	29.0
Canada	15.9	Netherlands	18.6
USA	13.0	Trinidad and Tobago	14.6
Belgium	10.5	Japan	5.0

Source: International Monetary Fund - IMF Country Report – May 2007

A. ECONOMIC POLICY OUTLOOK

The strength of international commodity prices is boosting mining and energy revenue and strengthening the fiscal accounts, providing a generally benign context for economic policymaking. Prices for aluminium, Suriname's main export, will remain historically high, falling back only slightly in 2008-09 from a high in 2007, while gold prices will increase further in 2008 and remain historically high in 2009. With the government and Centrale Bank van Suriname (Central Bank) policy abroad alignment, the authorities will try to keep the fiscal deficit low and continue to reduce public-sector debt. Social spending and infrastructural investment will be stepped up gradually. Public-sector salaries will rise, but given the government's good relations with most trade unions it is possible that pay scales may be restructured.

Although there has been upward pressure on inflation, core inflation and the currency will remain stable. The economy will benefit throughout the forecast periode from significant FDI inflows and robust prices for Suriname's principal commodities. GDP expanded by 5.8% in 2006 on the back of strong rises in investment in mining, oil and the informal sector. The forecast is that growth will remain above the historical average at 5% in the forecast period. However, if a major investment proposed by international bauxite companies, to extract bauxite deposits from the Bakhuis mountain range in western Suriname, were to come on stream, as appears likely, the growth forecast would need to be revised upward.



Prospects for alumina production are bright, with output expected to increase in 2006 owing to improved technical efficiency. Gold output is also forecast to increase. Prospects for the onshore oil industry are positive, and an active drilling programme is under way in existing oilfields. Offshore exploration programmes are well advanced under production-sharing agreements with international oil firms, but are unlikely to bear fruit before the end of the forecast period. Official inflows for development projects will maintain public-sector construction activity, and the informal sector will continue to boost commercial and residential construction, as well as retail demand.

The prospects for agriculture are mixed. As a major employer, its performance is important to the economy. The banana industry has been restructured and appears in good shape. Prospects for the rice industry, which is saddled with heavy debt and operates with a high cost base, are modest at best. The industry is also threatened by the gradual phasing out of EU trade privileges.

B. ECONOMIC POLICY

The fiscal balance has benefited from the strength of the mining and oil sectors, which has been boosted by higher international prices and higher export volumes. In the first half of 2007 fiscal revenue was up by 29%, well above year-earlier levels, with direct tax revenue nearly doubling. This is largely owing to higher tax payments in the second quarter from Staatsolie, the state-owned oil company, and the bauxite companies.

Spending rose at a slightly slower pace than revenue, with the bulk of the increase coming from higher spending on goods and services. Wages and salaries increased at a more modest rate, as did

subsidies and transfers. Interest payments were stable. For the first half of the year, the fiscal accounts registered a current surplus of nearly Sr\$ 57 m (US\$ 20 m) and an overall surplus of nearly Sr\$ 46 m, up sharply on the first half of 2006. Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur, the national telecommunications company) in August declared profits of Sr\$ 78.5 m for 2006, a 7% increase over the previous year, of which 55% will be paid to the treasury.

	2006		2007		% change b
	1 Qtr	2 Qtr	1 Qtr	2 Qtr a	
Revenue	318.6	338.2	426.9	418.2	28.7
Current revenue	318.6	332.3	420.7	410.1	27.6
Direct taxes	148.7	1015.0	135.5	154.8	95.2
Indirect tax	141.7	154.2	175.5	168.3	16.2
Non-tax revenue	28.2	76.7	109.7	87.0	87.5
Grants	0.0	5.9	6.2	8.1	142.4
Expenditure	329.5	321.7	400.9	398.5	22.8
Current expenditure	324.4	305.8	390.5	383.4	22.8
Wages & salaries	138.2	134.8	163.9	153.0	16.1
Goods & services	87.0	75.5	125.6	122.5	52.7
Subsidies & transfers	77.4	75.3	80.8	86.1	9.3
Interest payments	21.8	20.2	20.2	21.8	0.0
Capital expenditure	5.1	15.9	10.4	15.1	21.4
Current balance	-5.8	26.5	30.2	26.7	174.9
Overall balance	-10.9	16.5	26.0	19.7	716.1

a Preliminary figures. b First half year on year

Source: Ministerie van Financiën

The development of spending in the first half of 2007 was in sharp contrast to the spending plans outlined in the 2007 budget, which projected a deficit of SR\$ 650 m, or 11.5% of GDP. Historically, spending has been significantly below the amounts authorised in the annual budget, largely because of the limited project implementation capacity in the ministries. The outline 2008 budget presented in the annual state of the nation speech on October 1st projects revenue of Sr\$ 1.9 bn (US\$ 679 m) and expenditure of Sr\$ 2.4 bn, resulting in a deficit of Sr\$ 405 m or around 5.4% of GDP.



SURINAME

Development assistance programmes are continuing. The EU in July agreed € 3.1 m (US\$ 4.4. m) in assistance for institutional strengthening of the transport sector. EU assistance is also supporting work in progress on port facilities and the resurfacing of the road to the Guyana ferry terminal at South Drain. The EU has also agreed € 1.5 m in assistance for institutional strengthening in tourism, with an emphasis on sustainable development, building on earlier assistance to the tourism sector. The EU has a €9.5 m support programme for the rice-production industry. China in June agreed to surface the road from Paramaribo to the southern district of Brokopondo. Two Dutch companies were bidding in September for sea defence contracts totalling € 91 m to be financed with Netherlands development assistance.

C. DOMESTIC ECONOMY

Although alumina production rose steadily in the first half of 2007, gold output declined owing to a dip in production in the first quarter of 2007, when output was disrupted by strike action. However, gold output rose sharply in the second quarter of 2007 in quarter-on-quarter, as well as year-on-year, terms when normal operations had resumed.

Suriname: natural resources production

	2006		2007		% change a
	1 Qtr	2 Qtr	1 Qtr	2 Qtr	
Alumina ('000 tonnes)	507.0	548.4	537.1	539.1b	2.0
Gold (kg)	5,105.0b	5,306.1b	4,613.8b	5,412.9b	- 3.7
Oil production ('000 barrels)	1,133.0	1,135.0	1,275.0	1,270.0b	12.2

a First half, year-on-year change. b Official estimates

Source: Centrale Bank van Suriname

Oil output continued to rise in the first half of 2007, owing partly to a good exploration programme within Suriname's Exclusive Economic Zone (EEZ). Oil production in the onshore Tambaredjo and Calcutta fields averaged 13,950 barrels per day (b/d), of which



KRIESNADATH NANDOE

7,095 b/d was processed in the Tout Lui Faut refinery. The majority of the refinery's output (79.9%) was fuel oil and diesel (12.9%). Staatsolie, the state-owned oil company intends to raise production this year to an average of 13,975 b/d. In the long term it aims to double refinery capacity and produce higher value products, including premium diesel. Repsol (Spain) is expected to begin exploratory drilling in its offshore concession in 2008, and Maersk (Denmark) is set to follow. For offshore exploration, Staatsolie has a production sharing agreement with a US company, Murphy Oil, which will invest US\$ 40 m in an exploration programme.

The performance of agriculture, a larger employer than the natural resources sector, remains mixed. Banana production has exploded since the third quarter of 2006, and in April-June was running a more than double year-earlier levels. Production has been stimulated by changes to the EU banana regime, rather than prices that have been falling and are expected to fall further. A new banana regime for EU exports, announced in May, which removes export licences from the start of 2008, is considered advantageous to Suriname, which has no licences of its own, and has in previous years been forced to buy them from other ACP producers at considerable cost.

Suriname: agricultural output

	2006		2007		% change
	1 Qtr	2 Qtr	1 Qtr	2 Qtr	
Bananas (tonnes)	13,500	13,000	17,577	28,334	73.2
Rice ('000 tonnes)	32.9	32.9	34.0	34.0	3.3
Shrimp (tonnes)	4,500	4,000	4,500	4,900	10.6

Source: Centrale Bank van Suriname

Rice production by contrast is stagnant, although a national action plan for rice is attempting to improve quality and yield per hectare. Shrimp production picked up in the second quarter with increased deep sea catches of small shrimp. A local company, Suraq, is



developing an export aquaculture project for black tiger prawns, with an investment of US\$ 17 m, and expects to complete its facility by the end of 2007.

9. MULTI-ANNUAL DEVELOPMENT PLAN (MDP)

In August 2006 the Council of Ministers approved a new five year development plan for the period 2006-2011. The plan proposes four development pillars:

- good governance
- economic development
- social- and human development
- equal opportunities for all.

Additionally, the Environment, Gender and Youth are presented as cross-cutting areas. The MOP strategic vision is being implemented via the annual budget, prepared by the Ministry of Finance.

10. EDUCATION

The policy of the Government of Suriname is focused on creating the conditions for equitable access for every citizen to the necessary education and training that will allow them to realize their full potential as productive and creative members of the Surinamese Society.

The Anton de Kom University of Suriname (ADEK) is the highest academic institution of Suriname. In general, the university contributes to the process of modernization, creates conditions for higher education, training and scientific and



technological research and development. In this regard emphasis is being laid on quality and on the rigorous insertion of higher education into the society.

According to the National Strategic Paper 2007-2015 the Faculty of Social Sciences as well as the Faculty of Technological Sciences have as their main task to train citizens for higher education who will be able to function efficiently in a variety of offices and activities, even the most diverse, modern and specialized. The School of Medicine is also contributing importantly in the field of health care and training.

Based on today's changing circumstances ADEK has introduced the BSc/Master Programme, replacing the old Dutch system and has strengthened its cooperation with regional and other institutions in the field of higher education, research and development.

Accordingly, in 2006 the Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) was established as well as the Research and Development Fund.

The ADEK has supporting institutions such as:

IMWO - Institute of Social Research

INTEC - Institute of Technical Research

CELOS - Agriculture Research

MWI - Medical Research

CMO - Environmental Research

IDPM - Institute of Development and Planning

IKIM - Institute of Quality and Information Management

IIR - Institute of International Relations

UK - Institute of the Child



11. FINAL REMARKS

The changing structures and increasingly dynamic and interwoven form of the international system demand new policies and strategies. During the last decades – in particular after the end of the Cold War - we have witnessed a number of changes in Latin America and the Caribbean region.

Democracy has deepened, the economy strengthened and social policy improved. Most countries in the region are addressing through constitutional means various facets of national life.

The region is engaged in a dynamic process of integration in order to expand and strengthen trade and investments. The establishment of NAFTA, MERCOSUR, CARICOM, the Andean Community and the Central American Common Market has facilitated and contributed in building mechanisms that can enhance higher standard of living, social progress and development.

However, it should be acknowledged that, yet, much has to be accomplished in order to mitigate the vulnerability of an important part of the citizens of the region. The sober realisation is that the road to democratic consolidation and economic stability is long and arduous and sometimes rocky and painful.

The policy of the Republic of Suriname is to participate in international cooperative efforts with the view that through dialogue and peaceful negotiations the right answers and solutions can be found and program's be implemented that ultimately can lead to meet the needs of its people.





POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA EN EL SIGLO XXI

UN PANORAMA DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA





POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA EN EL SIGLO XXI UN PANORAMA DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

*MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PIRELA**

El escenario político en Latinoamérica en los últimos años ha girado indudablemente hacia la izquierda. Luego de épocas de largas dictaduras y de un traumático y penoso proceso posdemocrático, la región ha visto con buenos ojos a una dirigencia alternativa. Evidentemente, ello se ha reflejado en la nueva forma de concebir y asumir la política exterior en este siglo que comienza. Venezuela es un paradigma de ello.

Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, ésta ha experimentado un cambio radical en su política internacional, orientándola hacia la integración del continente americano, tomando como punto de partida el sur del continente y el Caribe. Consciente de que la única forma de sobrevivir a un modelo hegemónico y a un mundo unipolar es rescatar el sueño unificador de Bolívar sobre las naciones del Sur, la política exterior venezolana ha promovido la integración del continente con iniciativas, proyectos y acuerdos en el ámbito energético, económico, cultural, científico, militar y educativo, centrados en la búsqueda de alternativas en pro de la consolidación de lo que se ha denominado la “Patria grande”.

* Vicepresidente ejecutivo del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA); Dir. del Centro de Investigaciones Teóricas (CENTIT) del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Jefe de la Unidad de Ciencia Política, Caracas, Venezuela. Post-doctor en Filosofía Política por la Sorbona, París 1, Francia; Dr. en Filosofía Política por la Pontificia Università Gregoriana de Roma, Italia.



Esta política integracionista se encuentra enmarcada en un objetivo estratégico preciso: la construcción del Socialismo de Siglo XXI. Lemaire Romero (2007), señala que la visión hegemónica de la diplomacia¹ como instrumento para el manejo de las relaciones internacionales y la coexistencia entre naciones, ha sido reorientada hacia una visión regida por principios de complementariedad, cooperación y solidaridad que conduzcan a un mundo pluripolar articulado.

Este objetivo estratégico se ha constituido como una respuesta a la urgente necesidad de dar sólidas bases conceptuales al proyecto de refundación de la República y creación de una unión del Sur. Ello evidencia la presencia de un nuevo paradigma en la política exterior venezolana, enmarcado en los postulados bolivarianos que se definen a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. En ésta se incluye, en el capítulo del Poder Público, una sección dedicada a las relaciones internacionales. Es así como los fines y principios de las relaciones internacionales de la República adquieren rango constitucional, priorizando la defensa de la soberanía

¹ Históricamente en Venezuela se observa una línea hegemónica seguida por la diplomacia de la cuarta república (1958-1999): desde 1959, se implementó la Doctrina Betancourt con dos vertientes fundamentalmente. La primera, aislar a todos aquellos factores internacionales que pudieran significar la vuelta a un régimen parecido al de Pérez Jiménez. La otra vertiente fue arremeter en contra del comunismo en América Latina, fortaleciendo e impulsando la injerencia de los Estados Unidos en el país. Esa doctrina se mantuvo con el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969). Luego, el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) implementó la famosa política de pacificación hacia el exterior como reflejo de la política de pacificación al interior del país. Después nos encontramos con la política tercermundista de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) que da paso a un declive más o menos significativo en la participación de los gobiernos y de nuestro país en el escenario internacional. De hecho, se observa como Luís Herrera Campins (1979-1984), Jaime Lusinchi (1984-1989) y Pérez (1989-1993), prácticamente destinaron sus gestiones gubernamentales fundamentalmente a atender asuntos domésticos, más que ocuparse de los asuntos internacionales. La hegemonía continuó durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), quien mantuvo una política exterior cautelosa y expectante en relación a los cambios mundiales.



y la promoción de la integración latinoamericana y caribeña, confiriendo la dirección y rectoría de las relaciones exteriores al Presidente de la República².

Además de la Constitución como marco de las relaciones internacionales, es importante mencionar el rescate de la memoria histórica en lo relacionado con las ideas emancipadoras de Simón Bolívar respecto a la Patria grande y la integración del Sur, plasmadas en sus cartas y documentos. Expresaba Bolívar en 1814: “Para Nosotros la Patria es la América”³. Y cuando hablaba de América no la concebía únicamente en términos geográficos, sino más bien geoestratégicos. América para el Libertador era sinónimo de Nación: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo”⁴, afirmando a su vez que: “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo una sola nación con un sólo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo”⁵. Como se puede apreciar, su idea de nación tenía una significación holística. No se trataba de un mero Estado-nación moderno, pero tampoco caía en la trampa de una idea de globalización, de mundo-todo.

² El artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece que: “Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.”

³ Palabras de Bolívar a la división del General Urdaneta en Pamplona, 1814. En: discursos y proclamas / Simón Bolívar; fundación biblioteca ayacucho. Colección fundación John Boulton. Caracas 2007. P: 53.

⁴ Carta de Jamaica, 1815. En Simón Bolívar Doctrina del Libertador. Biblioteca Ayacucho. Colombia 1979. Pág. 68

⁵ *Ibíd.* Pág. 72



La idea de Bolívar de que “El día de América ha llegado”⁶ estructura en la actualidad una política exterior venezolana entendida, antes que todo, como resistencia. En este sentido se comprende que:

El Sur no es sólo explotación y exclusión. También es resistencia y construcción de una manera alternativa de civilización mestiza, y ello no sólo desde el punto de vista genético... es precisamente del mestizaje y sincretismo de experiencias y formas políticas del Sur que han de surgir los modelos alternativos de construcción y solución política del siglo que apenas comienza.⁷

La estructuración de la política exterior venezolana comienza entonces por definir como prioridad, no sólo la idea del sur en tanto que espacio geográfico, sino también como capital de la explotación. De hecho, esta concepción la podemos observar en la primera intervención de Chávez como presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), donde manifestó: “Sólo un país repotenciado por dentro, puede incorporarse con su propia fuerza a las relaciones internacionales del mundo moderno, de un mundo como el que está amaneciendo.”⁸

Ello nos lleva a pensar que el Sur al resistir al Norte, como eje de dominación, se está definiendo a sí mismo de manera autónoma y se está constituyendo en un espacio alternativo. En este sentido, las relaciones internacionales venezolanas se ven enmarcadas a lo interno en el “Plan

⁶ Carta dirigida a Coronel Justo Briceño. En Cartas del Libertador / Simón Bolívar; corregidas conforme a los originales. Mandadas a publicar por el gobierno de Venezuela presidido por el general J.V. Gómez. Caracas, Lit. y Tip. del comercio, (tomo II) 1929. P: 55

⁷ Perez Pirela, M. A., “*Del Estado Posible, crónicas de una revolución*”, Monte Ávila Editores, Caracas, 2008. (En imprenta). P:102

⁸ Citado por: Romero, Lemaire. HACIA UN PARADIGMA BOLIVARIANO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA. En publicación: Boletín Electrónico ISRI, no. 17. ISRI, Instituto superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, La Habana, Cuba: Cuba. Febrero-Marzo. 2007. Acceso al texto completo: http://www.isri.cu/Paginas/Boletin/boletin_9707.htm

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007” y las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”, cuyos objetivos estratégicos están destinados a acelerar la construcción de ese nuevo modelo sociopolítico venezolano denominado “Socialismo del Siglo XXI”.

Además de los mencionados documentos, hay que hacer mención a los acuerdos suscritos por Venezuela en el marco del ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América), que junto a la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), forman parte de la materialización del nuevo paradigma geopolítico.

LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA)

Desde el punto de vista histórico, la “Cumbre de los pueblos”, que se efectuaba paralelamente a la “Cumbre de las Américas” en Mar del Plata, Argentina en el 2005, fue un punto determinante para la confrontación de dos modelos geoestratégicos en pugna. Entonces, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, profirió duras críticas al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), acotando que en la región despertaban políticas neoliberales apadrinadas por los EE.UU., contra las cuales se propone desde Venezuela la creación del ALBA. Ésta se encuentra fundamentada en el establecimiento de:

...mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias.⁹

⁹ Consultar en: <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1>



La “Ventaja Cooperativa” en clara alusión y contradicción a las “Ventajas Competitivas” de la política económica conservadora, es la idea más original del ALBA, pues resalta la negociación internacional en bloque regional, elevando la calidad de vida en las naciones menos favorecidas, y otorgándoles peso real en las negociaciones económicas y comerciales en la relación Norte-Sur.

Según este criterio, el ALBA se fundaría en la solidaridad, cooperación y complementariedad económica. De aquí surgen entonces algunas de las diferencias más resaltantes entre el ALBA y el ALCA, al menos, en cuatro rubros esenciales: Liberalización arancelaria vs. desarrollo endógeno¹⁰, agricultura¹¹, derecho de Propiedad Intelectual¹² y el tema de las privatizaciones¹³.

¹⁰ La liberalización arancelaria abre los mercados, para los países con mayores ventajas competitivas. A esto, el ALBA contrapone el desarrollo endógeno solidario, donde las asimetrías sean *solidariamente* solventadas entre los países hermanos de la región, para conseguir un comercio justo y un desarrollo integral y sustentable.

¹¹ La entrada de productos agrícolas sin aranceles a países cuya actividad agrícola es el rubro principal, asfixiaría el mercado local de productos más caros y más abundantes provenientes del país extranjero. Los países desarrollados priorizaron su agricultura interna, con sus propias formas de sembrar y cosechar, y alcanzaron así su plena soberanía alimenticia. Siendo éste un derecho fundamental, el ALBA propone que la plena soberanía alimentaria es inherente a todos los pueblos, y que las formas de sembrar y cosechar deben ser respetadas y mantenidas, más allá de la actividad económica que viene con la producción agrícola. Queda entonces claro que la soberanía alimentaria no es comercializable.

¹² Los derechos de propiedad intelectual, en el marco del ALCA (y en general en la legislación internacional) son extremadamente desventajosas para las regiones del Sur, en contraposición a los increíbles beneficios comerciales de las transnacionales, en específico las compañías farmacéuticas. Los desbalances en investigación científica entre los países ricos y los pobres, hace que el sistema de patentes sea extremadamente injusto. Estas compañías toman, por ejemplo, elementos de la selva amazónica para la creación de nuevos farmacéuticos, los cuales patentan, para así cobrar aranceles altos para la reproducción de estas medicinas y sus componentes. Lo mismo sucede con la información genética en algunas semillas. En este sentido, el ALBA propone la eliminación de las patentes.

¹³ La desregularización de la economía, así como la liberalización e inexistencia de la regulación del Estado en la economía, conlleva a perennizar la lógica de las privatizaciones. Países que todavía conservan un sistema de seguridad social, salud y educación gratuito y obligatorio, con la llegada del ALCA, se verían obligados a cubrir demandas del acuerdo



Dentro de la apertura de nuevos espacios de unión en la región que Venezuela propone, fundamentados en un diálogo democrático, abierto y plural, se encuentra – a la par de la iniciativa del ALBA – la creación de una institucionalidad internacional del Sur cristalizada en UNASUR.

UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR)

Impulsada diplomáticamente desde Venezuela, la región ha retomado el paso en la conformación de la UNASUR. Los países de la región, en el “cambio de época” que promueven, han abrazado la posibilidad de la unificación e integración regional, como paso fundamental para la consecución de la equidad social, la democracia participativa y protagónica y el fortalecimiento de la región. Más que hablar entonces de una política “internacional”, la propuesta se enmarca en un progresivo cambio de paradigma de las relaciones diplomáticas suramericanas hacia una política “interregional”.

En el acta fundacional de Cochabamba, hito del proceso, se habla pues del “énfasis en la distribución de la renta como instrumento de eliminación de la exclusión social”¹⁴. También se destaca el papel de la globalización en este proceso, ante el cual “la integración regional es una alternativa para evitar que la globalización profundice las asimetrías, contribuya a la marginalidad económica, social y política, y procurar así aprovechar las oportunidades para el desarrollo”¹⁵. De esta forma, desde

inaceptables. Tal es el caso de la imposición de disminución del gasto público a cantidades irrisorias. El ALBA propone la plena soberanía de los recursos y servicios básicos, para que no sean comercializados.

¹⁴ Declaración de Cochabamba: piedra fundamental para una unión sudamericana, Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cochabamba Bolivia, 2006. Disponible en: http://www.minci.gov.ve/avances/28/11289/declaracion_de_cochabamba.html. Consultado: (Octubre 2008).

¹⁵ *Ibíd.*



el Sur se plantea un nuevo modelo pluripolar, tendiente a la paz y a la distribución de responsabilidades en el marco internacional¹⁶. En el 2008, en Brasilia, los países de UNASUR firmaron el acta constitutiva del mecanismo de integración, ratificando todos los principios de la Cumbre de Cochabamba, y dándole así un marco de acción jurídico al mismo.

De esta forma, UNASUR se opone decididamente a la demonización actual de lo público, afianzado en el rol preponderante del Estado. He aquí el carácter innovador de UNASUR, al anteponer el rol del Estado como garante del bienestar social y económico de los pueblos. De hecho, en UNASUR se hace imperativo el compromiso de resolución pacífica de controversias en el seno de escenarios de discusión suramericanos a partir de la fuerza y soberanía de sus Estados-naciones¹⁷.

En este punto se debe resaltar el aspecto militar, que no escapa de las políticas integracionistas llevadas a cabo en la región. En este sentido, el gobierno venezolano se une a la propuesta de Brasil, para la creación del “Consejo Sudamericano de Defensa”, iniciativa liderada por el ministro de Defensa brasileño Nelson Jobim. Dicha propuesta tiene como finalidad

¹⁶ “Esta integración sudamericana no es sólo necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz” Declaración de Cochabamba. Bolivia, 2006.

¹⁷ El caso boliviano fue el más emblemático: a mediados del 2008 una fuerte arremetida de la derecha boliviana a las instituciones democráticamente electas, dio pie a la primera ocasión de actuación de UNASUR como foro de solución de controversias. El resultado de la cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de gobierno en Santiago de Chile, va mucho más allá de la declaración conjunta de rechazo y repudio a la acción de la derecha, sentando el primer precedente de una rápida acción y resolución para mantener la integridad democrática de cada uno de sus países miembros, y de actuar en conjunto, para el mantenimiento de la paz y la libre determinación, no sólo del pueblo boliviano, sino de la región en general.



el establecimiento de una política de defensa consolidada desde y hacia América del Sur, así como también la normalización de las discusiones de los problemas fronterizos de la región y la participación como bloque de defensa en los organismos de seguridad internacionales e interregionales. Otro fin del Consejo Suramericano de Defensa es precisamente la unificación de una base industrial en el ámbito de la defensa, que tenga impacto en la comunicación, la educación, la salud, la energía y el transporte en la región.

EL NUEVO MAPA GEOPOLÍTICO DEL DESARROLLO ENERGÉTICO

Dentro del nuevo mapa geopolítico del desarrollo energético, Venezuela coloca sus inmensas potencialidades como puntal para afianzar la alianza estratégica con los pueblos del mundo. Entendiendo que para superar los problemas económicos, los pueblos deben concebir la energía como un factor dinamizador de la consolidación de su propio modelo de desarrollo. En tal sentido, Venezuela en su política petrolera ha tomado medidas conducentes a fomentar la integración energética de la región. Entre ellas se destacan proyectos de unión regional como Petrocaribe y Petrosur.¹⁸

¹⁸ Sin embargo, antes de profundizar sobre estas medidas, resulta necesario entender las acciones de reconstrucción de la política petrolera llevadas a cabo por el Estado Venezolano para fortalecer una industria nacional resquebrajada por los sucesos del 2002 e impulsarla hacia los procesos de integración en la región. A raíz del golpe petrolero fracasado, ocurrido en el 2002, el Estado venezolano entiende la necesidad de recuperar PDVSA, en aras de una verdadera soberanía de la industria petrolera nacional, y en consonancia con lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa: “los yacimientos de hidrocarburos, cualesquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por lo tanto, inalienables e imprescriptibles” (Artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). A la luz de los hechos, se crean las empresas mixtas poniendo fin a los convenios operativos y las asociaciones estratégicas en la faja petrolífera del Orinoco, siendo éstas eje fundamental de la soberanía petrolera, respaldadas en la ley orgánica de



PLAN SIEMBRA PETROLERA 2005-2030

La política de gestión del plan energético de la nación está dividida en dos etapas: la primera comprende el período 2005-2012¹⁹, y la segunda el período 2012-2030.

La primera etapa del Plan Siembra Petrolera establece 6 ejes de acción, entre los cuales destaca el eje de la integración energética en el cual Venezuela suplirá de forma directa volúmenes de crudo y productos al Caribe, a través de la firma de Petrocaribe en el marco del ALBA, y al Sur en el marco de la UNASUR. Además de aunar de más en más la idea de PETROAMÉRICA, que surtiría de energía a todo el continente, en un proyecto multilateral de trabajo mancomunado, cooperativo y solidario.

Una de las primeras acciones que emprendió el gobierno de Hugo Chávez fue precisamente el afianzamiento de una política exterior energética por lo demás activa. Para ello, la prioridad fue un replanteamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

hidrocarburos en su artículo 22, que establece que: “Las actividades de exploración y producción de petróleo y gas serán realizadas directamente por el Ejecutivo o por empresas de su exclusiva propiedad o por empresas donde tenga el control de sus decisiones, por mantener una participación mayor de 50% del capital social” (Artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Caracas, 2002). En este sentido, según datos de PDVSA en el año 2006, al poner fin a los convenios operativos y promover las empresas mixtas, la nación se ahorra más de 31.000 millones de dólares. Actualmente, Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuenta con 7 filiales principales en todo el país: Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Palmaven, Deltaven, PDVSA Gas, PDV Marina, Intevep y Bariven.

¹⁹ Según cifras de PDVSA: se han estimado inversiones por el orden de los 56.000 millones de dólares para ser ejecutados en esa primera fase, de esa cantidad, 70% será aportada por la operadora estatal venezolana y el resto por el sector privado. Consultar en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc2.tpl.html&newsid_temas=32



La Cumbre de Jefes de Estado realizada en Caracas en septiembre del año 2000, fue determinante en el diseño, propuesta y aplicación del sistema de bandas de precios y en la realización de una política consensuada a largo plazo, con nuevos lineamientos que contemplen, no sólo una relación determinada por la variable económica, sino también los temas ambientales y sociales.

En aras del cumplimiento del eje de integración contemplado en la primera etapa del Plan Siembra Petrolera 2005-2030, el análisis de fenómenos como Petrocaribe y Petrosur resulta fundamental.

PETROCARIBE:

Esta iniciativa venezolana, acordada con los países del caribe, la mayoría de los cuales no posee control estatal de sus recursos energéticos, nació el 29 de junio de 2005, en la cumbre sobre PETROCARIBE en la ciudad de Puerto La Cruz, Venezuela. PETROCARIBE fue suscrita inicialmente por 14 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Haití y Nicaragua se adhirieron formalmente durante la III Cumbre PETROCARIBE.

La vertiente de integración, dirige los impulsos de PETROCARIBE, pero también una realidad palpable, que acuerdos anteriores como el pacto de San José ha podido solventar: la pobreza y desigualdad en los países del Caribe, en específico Haití. La demanda de energía está directamente ligada a la falta de desarrollo sustentable de la región. No se trata por ello sólo de un tema energético sino, más aún, social.

Así que, lo que en el pasado hubiera sido un acuerdo de compra-venta, hoy se convierte, con la nueva dirección de las políticas internacionales



de Venezuela, en una herramienta de integración y de creación de igualdad social en la región del Caribe. Esta iniciativa ha propiciado: 7 Empresas Mixtas²⁰, 11 Contratos de Suministro²¹ y el Fondo AlbaCaribe, constituido con recursos provenientes del ahorro generado por el financiamiento de la factura petrolera y el comercio directo, así como derivados de instrumentos financieros y no financieros. Además, todo esto ha sido determinante en la realización de estudios, promovidos por la iniciativa PETROCARIBE, orientados a la identificación de fuentes de energía renovables y el mapeo de la situación energética del Caribe.

Lo que se busca en términos geoestratégicos es elevar la capacidad del Caribe para que la región pueda ser soberana en todos sus rubros, y no depender sobremanera del gasto energético. Todo esto con miras a futuras negociaciones por parte de estos pueblos a partir de una nueva capacidad real en el ámbito internacional.

PETROSUR:

Pero más allá de las fronteras caribeñas se tejen nuevas alianzas estratégicas que tocan a Latinoamérica como tal. Es el caso de PETROSUR, una iniciativa venezolana tendiente a crear una cooperación energética entre Venezuela, Brasil y Argentina, para avanzar en la complementariedad entre las tres empresas petroleras estatales (PDVSA, Petrobras y Enarsa). Esta estrategia nació en el año 2005, en una reunión entre los países latinoamericanos y árabes, donde los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva se comprometieron a crear un habilitador de políticas

²⁰ Belice, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas.

²¹ Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas.

públicas en materia energética. Aunque el principio de reciprocidad y solidaridad es el mismo que PETROCARIBE, la realidad actual del acuerdo es distinto, ya que PETROSUR existe como un coordinador de políticas energéticas regional y como apoyo al consejo energético de UNASUR.

PETROSUR se constituyó para velar por una consciente utilización de los recursos energéticos, y para democratizar el uso de la energía en la región. A esta iniciativa se ha incorporado la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland²² (ANCAP) de Uruguay.

Hasta el momento, PETROSUR tiene como principal tarea minimizar los efectos negativos que sobre los países de la región tienen los precios de la energía originados por factores especulativos y geopolíticos, mediante la disminución de los costos de las transacciones (eliminando la intermediación), el acceso a financiamiento preferencial y el aprovechamiento de las sinergias comerciales para solventar las asimetrías económicas y sociales de la región.

Por ello persigue la utilización del componente energético, no sólo para solventar su escasez, sino para llevar a cabo planes de financiamiento y proyectos regionales de envergadura, como el gasoducto del sur, iniciativa venezolana, aceptada por Brasil y Argentina, para llevar gas licuado pesado (GLP) desde las refinerías al norte de Venezuela, hasta los abastecimientos de gas en la Argentina.

Entre las áreas de cooperación destacan el suministro y comercialización de crudos y productos, así como la exploración,

²² Un tipo de Cementos utilizado como ligante para la preparación del concreto u hormigón.



explotación y procesamiento de petróleo y gas; diseño, construcción y operación conjunta de refinerías, facilidades de almacenamiento y terminales; transporte y logística, tecnología, adiestramiento y políticas públicas. Estos términos se firmaron en una reunión de los ministros de energía de cada uno de los países que integran la iniciativa PETROSUR en 2005.²³

La exploración de la Faja petrolífera del Orinoco, la refinería Abreu e Lima y la exploración de nuevas áreas en la República Argentina, se desprenden de este acuerdo. La refinería Abreu e Lima, en el nordeste brasileño, será inaugurada en el año 2010, en su primera fase, y la estatal Petrobrás, ya tiene una parcela delimitada en la Faja del Orinoco, en la cual iniciara el proceso de certificación del bloque 1 del campo Carabobo.

UNA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO DE UN MUNDO PLURIPOLAR.

Es preciso destacar que antes de la llegada del Presidente Chávez, la política exterior venezolana tenía un protagonismo sumiso y apático en el escenario internacional, viviendo de la renta de los acuerdos con Estados Unidos y con algún otro grupo de países que cubrieran el espacio en la cartera petrolera restante.

Es por ello que la ampliación de los mercados como eje fundamental para la internacionalización de la Revolución Bolivariana ha fomentado la creación de *Asociaciones Estratégicas* cooperativas, en un marco de igualdad y solidaridad, brindando espacios alternativos, e inéditos para el país, de beneficio mutuo.

²³ Consultar en: http://www.mci.gob.ve/pagina/1/3153/acuerdo_ministerial_conjunto.html



A la luz de los hechos, surge un mapa alianzas a nivel mundial, llevadas a cabo por la política exterior venezolana, manifestadas en proyectos concretos y relaciones, no sólo comerciales, sino políticas y sociales. Tal es el caso, por ejemplo de la creación del *fondo pesado mixto sino-venezolano* (2006)²⁴; la construcción del Satélite Simón Bolívar: Un prototipo sino-venezolano ya en el espacio desde el primero de noviembre de 2008, en una órbita cedida por Uruguay y que independizará a Venezuela y a la región en sus comunicaciones satelitales; la Asociación Estratégica con Rusia (2008) para la exploración y explotación del yacimiento del Delta Caribe Oriental entre la compañía de gas rusa Gazprom y PDVSA; la concesión de un crédito a Venezuela por 1.000 millones de dólares para programas de cooperación militar Rusia-Venezuela (2008); la Asociación Estratégica con Cuba, bajo la cual se han creado las misiones: Barrio Adentro y Misión Milagro, entre otras. Igualmente, la construcción de Petrocasas en las cercanías de la refinería de Cienfuegos (Cuba); la construcción de la refinería Antonio José Abreu e Lima en el Estado brasileño de Pernambuco; el Acuerdo de cooperación técnica con Brasil para el fortalecimiento agrícola de Venezuela entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Inia) y la Empresa brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa); los 29 acuerdos con Irán, que incluyen planes conjuntos en la manufactura de acero, la exploración de petróleo y la producción de automóviles económicos. También contemplan áreas como la petroquímica, la salud, la minería y la agricultura. Esto acuerdos comprenden además el entrenamiento de trabajadores siderúrgicos y la fabricación de instrumentos quirúrgicos, medicamentos y envases

²⁴ Constituido con un aporte de 6.000 millones de dólares para financiar proyectos en el desarrollo energético, agrícola, transporte y vialidad. China aportaría 4.000 millones de dólares, mientras que Venezuela contribuiría con 2.000 millones de dólares. Actualmente el mismo cuenta con un aporte adicional de 6.000 millones de dólares, alcanzando de este modo la cifra de 12.000 millones de dólares para financiamiento. Consultar en: http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/183978/venezuela_y_china.html



plásticos; el Asesoramiento de Irán en materia de Energía Nuclear con fines pacíficos, el apoyo a ALBA y los acuerdos subregionales.

Todos estos acuerdos contribuyen a la construcción de una plataforma de investigación, desarrollo de conocimiento y estrategias formativas para el soporte teórico y el seguimiento de iniciativas que impulsen la nueva geopolítica mundial. Aspectos contemplados en el anteriormente mencionado Plan de la Nación Simón Bolívar.

NUEVOS ESQUEMAS DE COOPERACIÓN FINANCIERA.

El apalancamiento del desarrollo endógeno permite el aprovechamiento de las potencialidades de la región, en la construcción de nuevos esquemas de cooperación financiera que rompan con las organizaciones tradicionales de financiamiento internacional (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo), que han propiciado la desigualdad y la pobreza en los países del Sur, ahorcando su sistema financiero con políticas neoliberales y minimizando los espacios de acción de los Estados al sumirlos en “deudas eternas”.

Dentro de las estrategias de integración que propone la revolución bolivariana, el Banco del Sur luce como una alternativa económica y financiera para la región. Este banco tiene como objetivo financiar el desarrollo económico y social de los países miembros, así como reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones con miras a la consolidación de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

El Banco tendrá un capital inicial de 10 mil millones de dólares el cual vendrá del aporte de los países miembros (en una

primera etapa Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela). Se debe observar que Chile ha participado en las reuniones como observador, y Surinam ya ha pedido su pronta incorporación. El aporte de capital se dividirá en tres franjas, con los países más grandes (Argentina, Brasil y Venezuela). En la banda 1, suscribiendo un capital de unos 2.000 millones de dólares. En la segunda franja se incluyó a Uruguay y Ecuador, que aportarán 400 millones de dólares cada uno; y en la tercera están Paraguay y Bolivia, con 100 millones de dólares cada nación.

El interés del Banco del Sur no es convertirse en un nuevo Fondo Monetario Internacional (FMI), sino la creación de un Fondo de Solidaridad Social para el desarrollo endógeno de las regiones, pensando en términos de cooperación y complementariedad, lo que facilitará la independencia financiera de Latinoamérica. Además, con esta alternativa la región dejaría de depositar las reservas internacionales en el extranjero, evitando que nuestras reservas sirvan para que las potencias tradicionales nos las reenvíen a su vez como prestamos con onerosas tasas de interés.

La Integración Financiera debe ser parte de un proceso de transformación institucional que contribuya a la conformación auténtica de la Comunidad Suramericana de Naciones y, por extensión, las relaciones SUR-SUR como nuevo método de relaciones internacionales.

NUEVAS FORMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL, PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y REDES DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Para lograr la expansión del conocimiento mutuo responsable y de la diversidad de los pueblos, la Revolución Bolivariana parte del principio que es necesaria la comprensión de



nuestra cultura, nuestra ciencia, el afianzamiento de la educación como instrumento liberador y el establecimiento de redes estratégicas de comunicación alternativa entre nuestros pueblos (Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013).

Las políticas a seguir para lograr el fortalecimiento de la educación superior en los procesos de integración latinoamericana y caribeña se centran en la creación del espacio de educación superior del ALBA; la participación en MERCOSUR Educativo; el impulso de un espacio de educación superior de América Latina y el Caribe; la incorporación de la dimensión de la cooperación solidaria internacional a todas las actividades de la educación superior; y el fortalecimiento del componente internacional en planes de estudio, con énfasis en la integración latinoamericana y caribeña y la cooperación con los pueblos del Sur.

En este sentido la creación de la Universidad de los Pueblos del Sur (UPS) será un espacio fundamental para la formación de profesionales que cumplan un rol activo en los procesos de cambios democráticos en la región latinoamericana, en la búsqueda de nuestras necesidades y aportando soluciones apropiadas para y desde nuestros pueblos: “Estamos hablando de un proyecto de ruptura con la concepción moderna y liberal prevaleciente de la Universidad, la cual responde a las lógicas de organización del mercado capitalista como si estuviesen determinadas por un orden natural e ineludible.”²⁵

Otras políticas focalizadas en el logro de la articulación de redes internacionales de cooperación entre nuestros pueblos son:

²⁵ RIVERA, L. (2007). La Universidad de los Pueblos del Sur. ALBA. Disponible en: alternativabolivariana.org/modules.php?name=New&file=print&sid=2469. Consultado: (Octubre de 2008).

las Cátedras Simón Bolívar de Integración Latinoamericana Caribeña, creadas en septiembre de 2008 y enmarcadas en el convenio de cooperación entre la Universidad Bolivariana de Chile y Fundayacucho; la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que nace del acuerdo político de cooperación Cuba-Venezuela, y tiene como compromiso la formación de 200.000 médicos y médicas de América Latina y el Caribe en 10 años²⁶; la creación del Instituto Agroecológico Latinoamericano Paulo Freire, producto de la cooperación entre Vía Campesina y La Universidad Bolivariana de Venezuela; el Programa de estudiantes internacionales en Venezuela en donde participan jóvenes de diferentes países que han sido excluidos del sistema de educación superior en sus tierras de origen; el fortalecimiento de la cooperación interuniversitaria internacional y la consolidación de los procesos permanentes de movilidad académica y cooperación solidaria internacional.

Con respecto al establecimiento de redes estratégicas de comunicación alternativa, debemos reconocer que el papel de los medios de comunicación en la actualidad está en entredicho. Los *mass media* son utilizados como armas políticas e ideológicas para la justificación de invasiones a naciones soberanas, socavando las democracias no convenientes a los Estados Unidos y su histórica influencia en el sur del continente. Las grandes cadenas de información como CNN, Reuter, BBC, entre otras, han instaurado dictaduras mediáticas, cPolítica Exterior de Venezuela en el Siglo XXI - Un Panorama de Integración latinoamericanaonvirtiéndose así en los nuevos generadores de la realidad en el mundo. Dentro de este panorama se hizo perentoria la creación de una red de integración comunicacional y cultural del Sur.

²⁶ ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA (ELAM). Disponible en: <http://www.elam.edu.ve>. Consultado: (Octubre de 2008).



Esta red surge para desarrollar una nueva estrategia comunicacional para Latinoamérica y el Caribe, promoviendo el derecho a la información y la veracidad como principio formativo. Además, se busca la difusión de contenidos que le sean propios a la región con el fin de crear y fomentar el imaginario latinoamericano desde la pluralidad y la diversidad. Es en esta óptica que nace TeleSUR, estructurada como sociedad anónima, cuya participación accionaria está distribuida de la siguiente manera: Venezuela, 46%; Argentina, 20%; Cuba, 19%; Uruguay, 10% y Bolivia 5%.

En 9 meses exactos quedaba construido el proyecto mediático más ambicioso de Latinoamérica con una audiencia potencial de 30 millones de usuarios²⁷, distribuidos en 20 países de América Latina y el Caribe y parte de Europa y Asia vía satelital.

ALGUNOS RETOS Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA

La posición geoestratégica de Venezuela como país petrolero y del Sur, lo coloca a la cabeza de los cambios que se están produciendo en la región, con gobiernos, movimientos y organizaciones sociales que cada vez tienen una mayor identificación con ideas progresistas que apuntan a salidas distintas a la propuesta neoliberal en el mundo.

Es en este contexto que la nueva visión internacionalista de Venezuela cobra fuerza y vigencia. En palabras de Armando Hart Dávalos:

...América Latina y el Caribe es la única región del mundo con posibilidades de elaborar una tesis coherente en relación a los grandes desafíos que nos

²⁷ Aunque ellos mismos reconocen que existe la imposibilidad de medir el número de usuarios, ya que gran parte de la audiencia se conecta al canal vía satelital o Internet. Consultar en: <http://www.telesurtv.net/>

presenta el siglo XXI... Es en América Latina y el Caribe donde se encuentran las reservas culturales indispensables para enfrentar la grave crisis que tenemos ante nosotros. Nuestra América, por factores económico-sociales vinculados a su inmensa tradición espiritual puede presentar fórmulas para un diálogo con el mundo.²⁸

Dicho de otro modo, no sólo en Venezuela sino, en toda la región existen posibilidades históricas reales, para la creación de nuevas teorías, nuevos paradigmas y nuevas realidades diplomáticas que sustenten los cambios políticos que permitan la creación de un espacio para una Patria grande y unida.

Por ello lo importante es recalcar que las acciones geoestratégicas, apenas descritas y analizadas, corresponden a la estructuración progresiva de un modelo diplomático alternativo que parte desde el Sur. Modelo cuya principal vocación es la integración y la unidad latinoamericana y caribeña, concebida no solamente en términos históricos y simbólicos, sino más aún en términos factuales.

Es así como se quiere, a través de dicho modelo, crear desde la política exterior del gobierno de Hugo Chávez una unión que, antes que todo sea política (Unasur); ello no impide que, al mismo tiempo, dicha unidad posea importantes premisas económicas (Banco del Sur), energéticas (Petrosur y Petrocaribe), militares (Consejo Suramericano de Defensa), mediáticas (Telesur), y sobre todo, educativas (Universidad del Sur). Esta política exterior venezolana ha sido concebida y ejecutada en poco menos de un decenio (1999-2008) que, está de más decirlo, ha sido el período tomado en consideración en el presente trabajo.

²⁸ Romero, Lemaire: Ob. cit.



MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PIRELA

Queda ahora como desafío para el análisis del tema abordado el estudio del alcance que tendrá dicha política exterior, en eso que hemos llamado el “Nuevo Panorama de Integración Latinoamericano”.

Ello al menos desde dos planos diversos. Primeramente desde el lugar que tendrá esta nueva geopolítica planteada en tanto que antítesis y alternativa a los modelos de política exterior neoliberales, impulsados desde los Estados Unidos de América, como continuación de una política hegemónica con más de un siglo de aplicación en el subcontinente. En un segundo momento, es necesario interrogarse sobre la continuidad y afianzamiento de estas políticas exteriores en la creación de un nuevo modelo de la región.

Dicho de otro modo, ¿Son estas políticas una mera antítesis a la política exterior estadounidense o, por el contrario, son éstas una verdadera propuesta alternativa que logrará afianzarse como un modelo aplicable y duradero en la región?

Del seguimiento, reflexión e interpretación de estas dos interrogantes dependerá la última palabra que pueda ser dada en relación al modelo apenas esbozado. Algo sin embargo resulta cierto. Desde el sur del continente latinoamericano parece haber surgido un innegable paradigma geopolítico alternativo del cual depende, nada más y nada menos, que la subsistencia inter- nacional e inter-regional en un subcontinente que alberga las fuentes energéticas que escasean ya en este siglo.

REFERENCIAS

ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA). **¿Qué es el ALBA?** Disponible en:

<http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1>. Consultado: (Octubre de 2008).

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2002). **Ley de Hidrocarburos**. Caracas.

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA (ELAM). Disponible en: <http://www.elam.edu.ve>. Consultado: (Octubre de 2008).

LECUNA, V. (1929). **Cartas del Libertador**. Tomo I y II. Gobierno de Venezuela. Caracas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MPPINCI). **Noticias**. Disponible en: <http://www.mci.gob.ve>. Consultado: (Octubre de 2008).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICIÓN Y EL DESARROLLO (MPPPD). **Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013**. Caracas, Venezuela.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). **Intervención del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea general de las Naciones Unidas de 2000**. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/55/>. Consultado: (Octubre de 2008).

PEREZ PIRELA, M. A., **Del Estado posible, crónicas de una revolución**, Monte Ávila Editores, Caracas, 2008.

PETROLEOS DE VENEZUELA. **Empresas Mixtas: Soberanía petrolera al servicio del pueblo**. Disponible en: <http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/>



MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PIRELA

readmenuprinc2.tpl.html&newsid_temas=32. Consultado: (Octubre de 2008).

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)**. Caracas.

RIVERA, L. (2007). **La Universidad de los Pueblos del Sur**. ALBA. Disponible en: altenativabolivariana.org/modules.php?name=New&file=print&sid=2469. Consultado: (Octubre de 2008)

ROMERO, L. (2007). **Hacia un paradigma bolivariano de la política exterior de Venezuela**. Boletín Electrónico ISRI, no. 17. ISRI, Instituto superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, La Habana, Cuba. Disponible en: <http://www.isri.cu/publicaciones/articulos/2007/0907.pdf>. Consultado: (Octubre de 2008)



